

PROSEGUR RESEARCH

Anuario de seguridad de América Latina

Análisis de las principales cifras de
criminalidad y amenazas a la seguridad

2025



**PROSEGUR
SECURITY**



01

Introducción

1. Introducción

La violencia y los elevados niveles de crimen organizado en América Latina no son un problema contemporáneo. Para entender el contexto actual, hay que ampliar la mirada y escarbar en sus profundas raíces históricas y estructurales que explican, al menos en parte, los diversos factores que nos han llevado a un entorno propicio para el desarrollo de organizaciones criminales y altos niveles de violencia. En este primer Anuario de Seguridad de América Latina, pretendemos ahondar, no tanto en los efectos, sino en las **causas que hacen a América Latina una de las regiones más violentas del mundo.**

Desde el siglo XX, América Latina ha sido escenario de diversos tipos de conflictos. Guerras civiles, golpes de Estado, dictaduras, y enfrentamientos con guerrillas han dejado un legado de violencia estructural cuya huella permanece. Aunque sería un error no pensar en la lucha ideológica y el uso de la violencia política como herramienta de control durante la Guerra Fría para entender la región, desde la década de los 80 **el crimen organizado se convierte en el actor principal indiscutible de la transformación de la violencia**, que cambia sus relaciones y se une irremediabilmente a la economía criminal, cuyo impacto continúa presente hoy en día.

La fuerza, penetración y evolución del crimen organizado en las sociedades ha revolucionado la región, pasando de estructuras tradicionales jerárquicas, como los cárteles de drogas, a **redes más descentralizadas y flexibles que operan a nivel transnacional** y que extienden sus lazos más allá de tierras americanas. Estas organizaciones han sabido adaptarse a un entorno globalizado, en el que

aprovechan las deficiencias y debilidades estructurales de los estados para consolidar su poder, controlar territorios y expandir sus actividades, convirtiendo **América Latina en una plataforma de exportación de modelos criminales y de distribución de drogas.**

No se puede estudiar la criminalidad y la violencia en América Latina desde un único lugar. Es necesaria una visión multidimensional que valore desde los factores políticos, sociales y económicos hasta aquellos como la cultura o la religión. Violencia y criminalidad deben entenderse como fenómenos interconectados que requieren soluciones integrales que aborden no solo los síntomas sino también las causas subyacentes.

Tampoco pasa desapercibido el profundo impacto que el crimen organizado tiene en el tejido social latinoamericano. Tiene la capacidad de generar mecanismos de control social a través del miedo, la violencia y, en algunos casos, incluso siendo el proveedor de servicios básicos en las denominadas zonas marrones de Guillermo O'Donnell¹, es decir, aquellas donde el crimen organizado ejerce poderes sobre la población discrecionalmente. A ello se le suma el desarrollo de la denominada una narcocultura, que glorifica líderes criminales a través de la música o las películas y otros medios populares, convirtiéndolos en héroes y modelos a seguir e inmortalizando la narrativa de que el éxito y el poder se pueden alcanzar a través de la violencia y el crimen.

Esta dinámica ha llevado a la normalización de la

¹O'Donnell, Guillermo, Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa, Buenos Aires, Prometeo, 2010, p. 172.



violencia en muchas comunidades, donde parte de sus miembros son atraídos por la promesa de poder y riqueza que les ofrecen los grupos criminales, siendo una fuente constante de reclutamiento, perpetuando la cultura de violencia y la exclusión social.

En todo caso, es imposible entender la relevancia de estos grupos sin comprender el poder económico con el que cuentan. **La economía ilícita en América Latina se ha expandido de tal forma que es parte integral de muchas economías locales y nacionales**, controlando diversas cadenas de suministro ilícitas, desde el narcotráfico hasta la trata de personas, pasando por la minería ilegal o el tráfico de armas. Además, el blanqueo de capitales y la infiltración de estos grupos en sectores económicos formales permiten la consolidación de sus actividades ilegales, convirtiéndose en proveedores de empleo, lo que refuerza su influencia social.

El panorama de la violencia en América Latina no parece mostrar señales de mejora en el corto plazo. Las tasas de homicidios son de las más altas del mundo y la diversificación de actividades criminales suma nuevos retos para los Estados en su lucha contra el crimen organizado. Los **grupos criminales en América Latina han demostrado una notable capacidad de adaptación e innovación en el entorno global y local** y continúan evolucionando y consolidando su poder. La lucha contra estos grupos requiere no solo esfuerzos de seguridad, sino también políticas sociales y económicas más amplias que reduzcan las oportunidades para el crimen organizado.

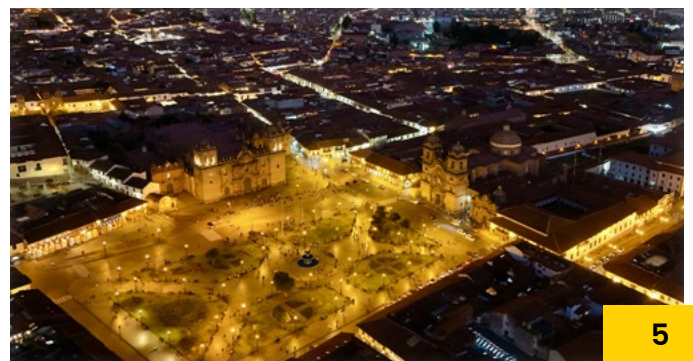
América Latina y el Caribe se ha consolidado como la región más violenta del mundo en términos de homicidios, concentrando aproximadamente el 33% de los homicidios globales, pese a tener menos del 10% de la población mundial. Según el Global Peace Index (2024), América Latina ha experimentado un deterioro sostenido en sus niveles de paz, con países como Venezuela, México, Colombia y Honduras posicionándose en los últimos lugares del índice. En términos de crimen organizado, el Global Organized Crime Index (2023) revela que varios países latinoamericanos ocupan los primeros lugares a nivel mundial, destacando la presencia de redes criminales transnacionales que abarcan tráfico de drogas, armas, extorsiones, secuestros y lavado de dinero. Colombia, México y Paraguay aparecen, tras Myanmar, como los países con mayor nivel de criminalidad del mundo. La organización World Population Review lista anualmente las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo, basado en tasas de homicidios. Treinta y ocho de ellas están en América Latina, destacando 17 ciudades de Brasil y 12 de México. Estos datos evidencian un **entorno de inseguridad crónica que no solo afecta a la población, sino también a empresas y organizaciones, que deben invertir cada vez más en medidas de seguridad.**

En este primer Anuario de Seguridad en América Latina, diferentes expertos aportan visiones regionales y locales sobre el contexto de seguridad actual. El apartado de conclusiones incluye una serie de aspectos, de carácter reflexivo, a considerar. **La violencia y la criminalidad en América Latina son problemas complejos y multifacéticos que requieren un enfoque integral.** A pesar de los numerosos estudios y diagnósticos, persiste la falta de ejecución efectiva y financiación adecuada. Este fenómeno se alimenta de factores estructurales, agravados por la resiliencia del crimen organizado, el cual adapta sus estrategias constantemente.

Para abordar este desafío, **es necesario un enfoque multidimensional** que no solo contemple medidas represivas, sino también acciones económicas y sociales. Se deben promover oportunidades laborales legítimas, fortalecer la educación y diversificar las economías locales para reducir la vulnerabilidad ante redes criminales, así como adoptar políticas diferenciadas según la tipología de los grupos delictivos y sus dinámicas específicas.

Si bien el fortalecimiento institucional para la anticipación y prevención es clave, especialmente en campos como la inteligencia o la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad, no es el único ámbito en el que hay que trabajar. La cooperación internacional es esencial, dado el carácter transnacional de muchas actividades criminales, pero también lo es la robustez de la cadena de seguridad pública, que incorpora policía, justicia y prisiones, para reducir la impunidad.

Combatir el crimen predatorio, perpetrado mediante actividades como extorsiones, secuestros y microtráfico, es tan importante como dismantelar grandes cárteles, ya que estos delitos impactan directamente en la población. Y en este sentido, existen ya lecciones que Europa puede aprender del contexto latinoamericano, especialmente en relación con la dinámicas organizativas y sociales de los grupos criminales, con las actividades desarrolladas y los modus operandi empleados, y a cómo un fenómeno que aún hoy es bastante opaco en el viejo continente comienza, con fuerza, a mostrar sus severos impactos.



02

La geografía de la seguridad en América Latina



México y El Caribe

2.1 México y El Caribe

Guillermo Mendoza Bazán

2.1.1. Introducción

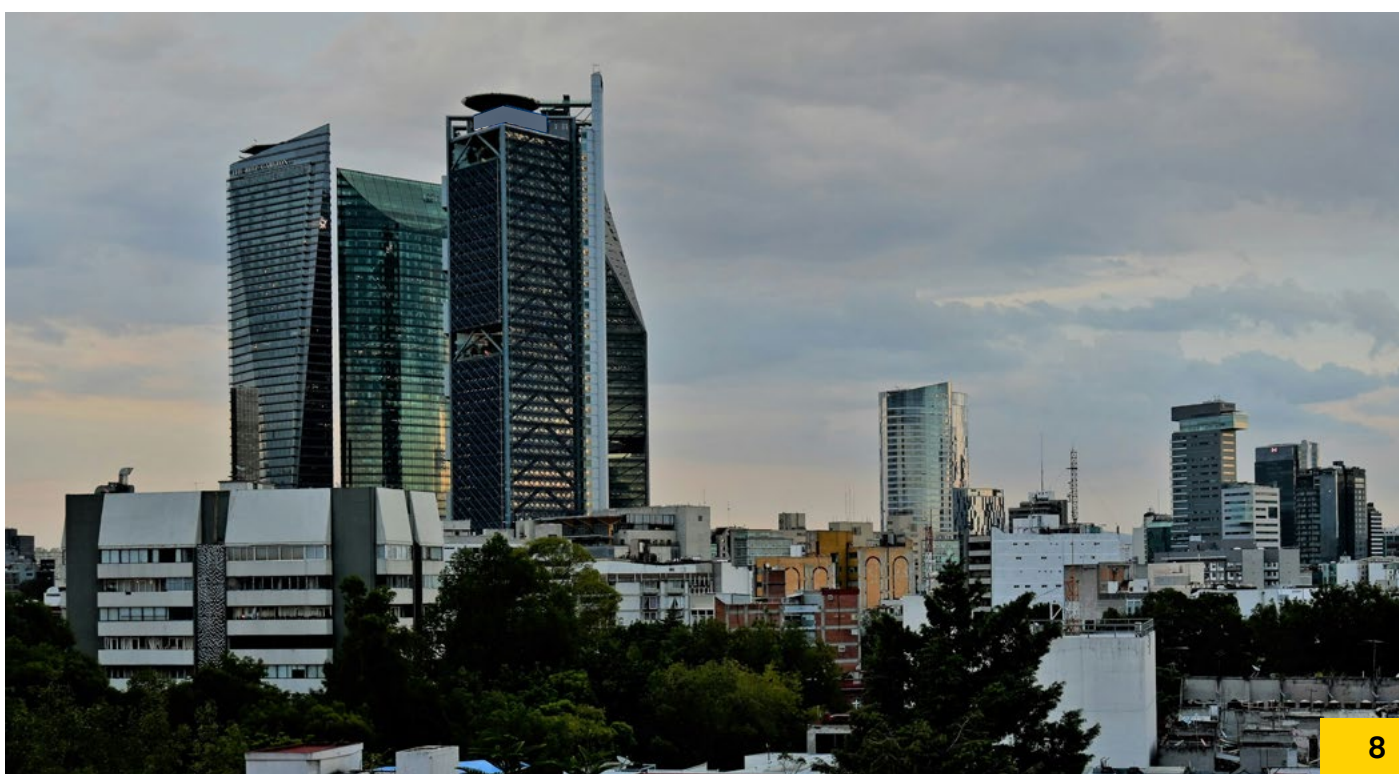
Durante los últimos 30 años México ha incrementado su presencia internacional tanto por su creciente importancia como centro de manufactura de alcance global, como por ser **sede de algunas de las principales organizaciones criminales del continente americano**. Estas organizaciones ejercen violencia y controlan economías ilegales dentro de su territorio y más allá de sus fronteras.

Las organizaciones delictivas mexicanas, conocidas mundialmente por estar especializadas en el cultivo, procesamiento y distribución de narcóticos, han expandido sus actividades ilegales al tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, soborno, extorsión y muchos otros crímenes. Además, **han infiltrado mercados legales** que, en

algunas zonas del país, son ampliamente controlados por ellas.

De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2023, **México ocupa el primer lugar en puntuaciones de mercados criminales**. El país lidera en trata y tráfico de personas, extorsión y cobros ilegales por protección, tráfico de armas, comercio de productos falsificados, y comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos.

Por otro lado, **el Caribe se mantiene como un importante centro regional de distribución de drogas, principalmente cocaína, hacia los mercados de Estados Unidos y Europa**, además de que se han expandido otros delitos asociados.



2.1.2. Protestas sociales y violencia política

En junio de 2024, México vivió la jornada electoral más grande de su historia, con más de 20 mil cargos de elección popular en juego, fue también **el ciclo más violento en la historia democrática del país.**

De acuerdo con la recopilación de Causa en Común, desde junio de 2023 al día de las elecciones se registró un total de 65 asesinatos de actores políticos, incluyendo 38 candidatos. Entre los asesinatos no se reportó un sesgo hacia algún partido político en particular: el 92% de los candidatos asesinados competían por cargos a nivel municipal.

Claudia Sheinbaum, la candidata triunfadora, se ha mostrado cautelosa sobre la posibilidad de cambiar radicalmente las líneas de la estrategia de seguridad.

2.1.3. Tendencias delictivas en México

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al 30 de junio de 2024 en México se han registrado un total de 1,071,366 delitos, lo que representa una disminución del 2.6% en comparación con el primer semestre de 2023, que reportó 1,100,315 delitos, y un incremento del 2.8% respecto al mismo periodo de 2022, que contabilizó 1,069,695 delitos.

Conviene subrayar que la información presentada por el SESNSP representa solo el 7.6% de los delitos denunciados. **La cifra negra en México de delitos no denunciados se estima en 92.4% del total de casos.** De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) (ver aquí) la cifra negra por delito específico alcanza 97.4% en extorsión; 96.5% en fraude; 94.2% en robo parcial de vehículo, y en secuestro 86.4%.



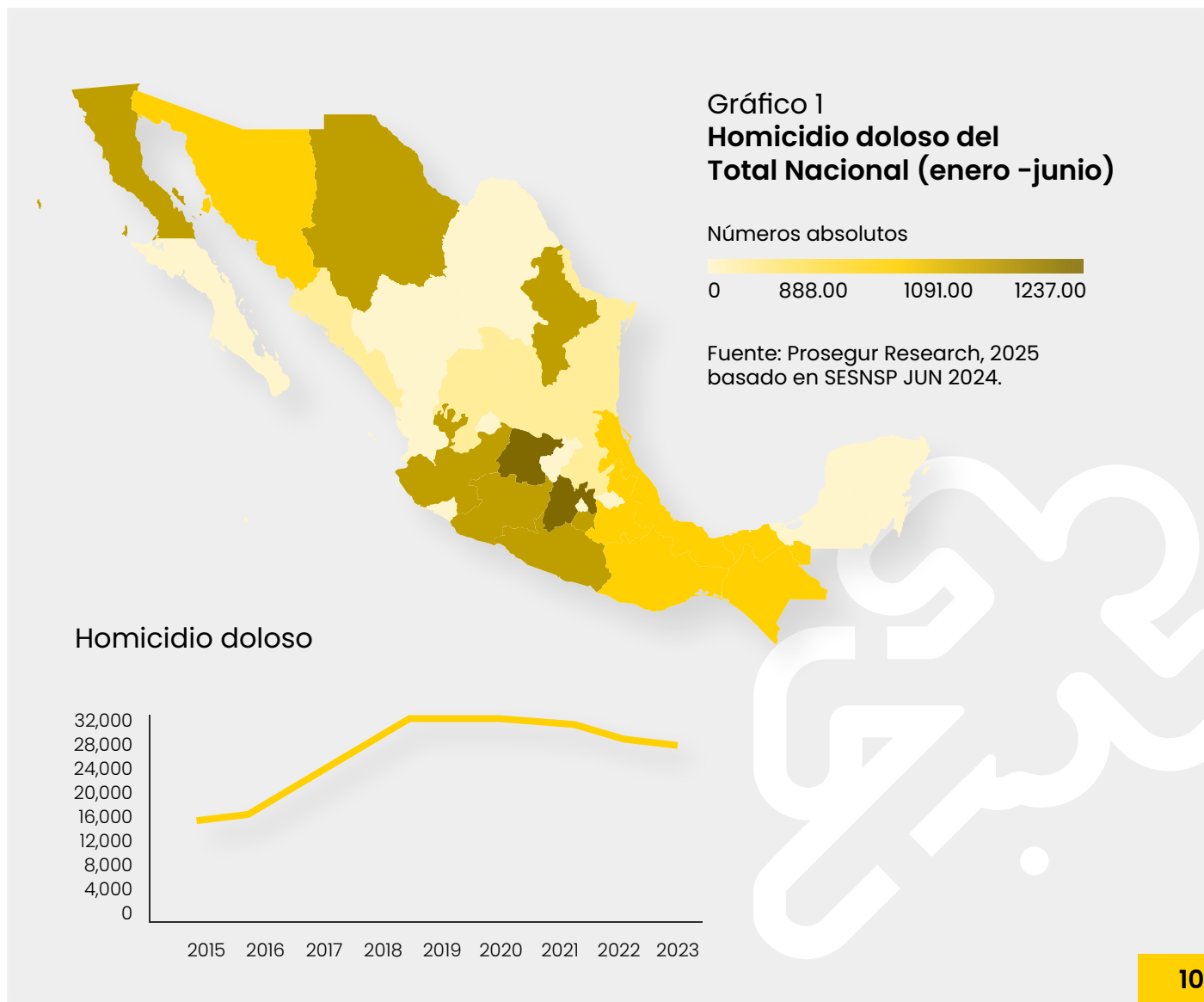
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD

El análisis de la incidencia delictiva en México revela una tendencia variada en los delitos que afectan directamente a las personas y su libertad.

Homicidio

Durante la primera mitad de 2024, se registraron en México un total de 21,906 homicidios, un aumento del 3.49% en comparación con los 21,167 reportados en el mismo periodo de 2023 y una disminución del 0.18% respecto a los 21,206 incidentes registrados en el primer semestre de 2022. **Desde 2015 hasta junio de 2024, Guanajuato destaca como el estado con la mayor incidencia acumulada de homicidios, con un total de 32,894 casos.**

Le siguen el Estado de México con 30,924 incidentes y Michoacán de Ocampo con 23,476 casos. Baja California, Jalisco y Guerrero también figuran entre las entidades con mayores cifras, con 23,290, 21,889 y 19,592 homicidios, respectivamente. Chihuahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, Ciudad de México y Oaxaca completan el top 10 con 18,378; 18,257; 15,173 y 14,522 casos.



Secuestro

En el primer semestre de 2024, se reportaron en México un total de 246 casos de secuestro, lo que representa un aumento del 9.33% en comparación con los 225 incidentes registrados en el mismo periodo de 2023, y una disminución del 21.33% frente a los 286 casos del primer semestre de 2022.

Desde 2015 hasta junio de 2024, el Estado de México

encabeza la lista con el mayor número acumulado de secuestros, sumando 1,416. Veracruz de Ignacio de la Llave le sigue con 1,111 incidentes, mientras que la Ciudad de México reporta 773 casos. Tamaulipas, Tabasco y Guerrero también presentan cifras significativas, con 744, 455 y 389 incidentes, respectivamente. Morelos, Michoacán de Ocampo, Puebla y Zacatecas completan el top 10 con 364, 304, 292 y 279 casos.

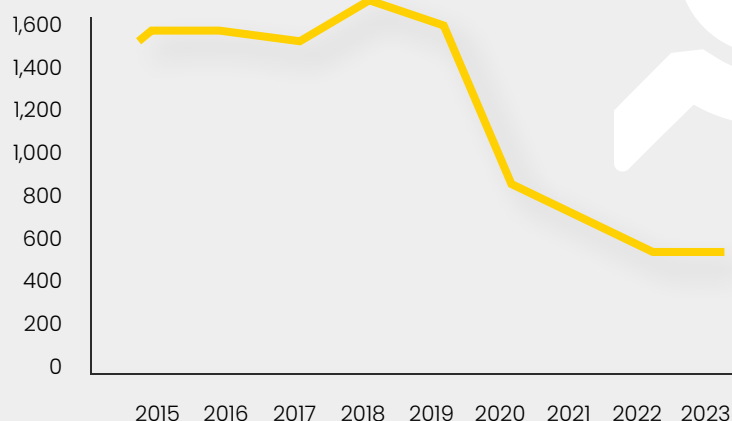
Gráfico 2
Suestro del Total Nacional
(enero -junio)

Números absolutos

0 19.00 21.00 33.00

Fuente: Prosegur Research, 2025
basado en SESNSP JUN 2024.

Secuestro



Feminicidio

Durante los primeros seis meses de 2024, se reportaron en México un total de 401 casos de feminicidio. Esta cifra representa una disminución del 8.86% en comparación con los 440 incidentes registrados en el mismo periodo de 2023 y una reducción del 12.87% respecto a los 505 casos reportados en el primer semestre de 2022.

Desde 2015 hasta junio de 2024, el Estado de México sigue siendo la entidad con el mayor número acumulado de feminicidios, con un total de 946 casos. Veracruz de Ignacio de la Llave ocupa el segundo lugar con 647 incidentes, mientras que la Ciudad de México reporta 538 casos. Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Sinaloa también presentan cifras significativas, con 501, 454, 347 y 335 casos, respectivamente. Chiapas, Sonora y Puebla completan el top 10 con 291, 291 y 278 casos.

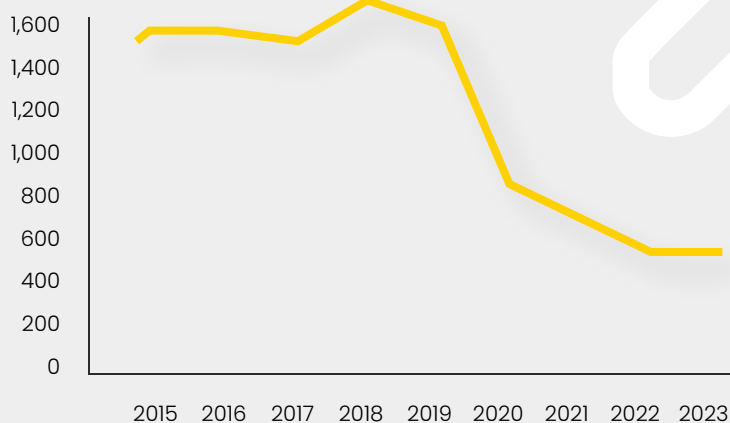
Gráfico 3
Feminicidio del Total Nacional
(enero -junio)

Números absolutos



Fuente: Prosegur Research, 2025
basado en SESNSP JUN 2024.

Feminicidio



DELITOS CONTRA LAS EMPRESAS

Extorsión

En el primer semestre de 2024, se reportaron 5,143 casos de extorsión en México, lo que representa un incremento del 1.62% en comparación con los 5,061 casos registrados

durante el mismo periodo en 2023. Sin embargo, esta cifra muestra una disminución del 6.93% respecto a los 5,438 casos reportados en el primer semestre de 2022.

A nivel nacional, **el Estado de México lidera con 22,993 casos acumulados de extorsión de 2015 a junio de 2024**. Jalisco ocupa el segundo lugar con 6,128 incidentes, seguido por Veracruz de Ignacio de la Llave con 5,472 casos y Nuevo León con 5,391. La Ciudad de México reporta 4,858 casos, mientras que Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Tabasco y Baja California completan el top 10 con 2,343; 1,842; 1,679; 1,585 y 1,525 casos respectivamente.

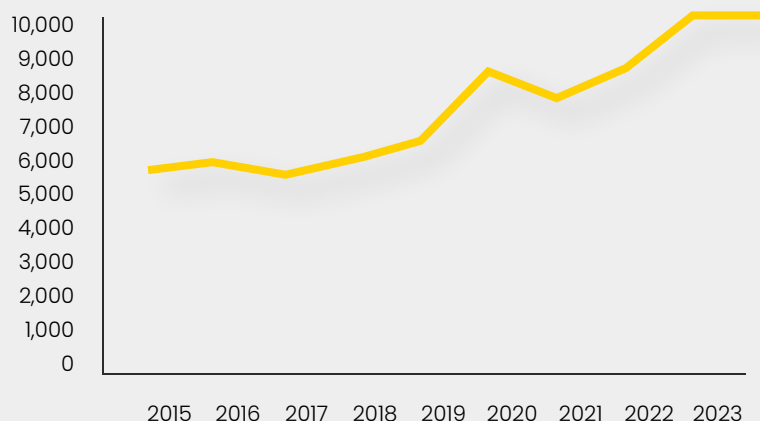
Gráfico 5
Extorsión del Total Nacional
(enero -junio)

Números absolutos

0 418.00 468.00 1699.00

Fuente: Prosegur Research, 2025
basado en SESNSP JUN 2024.

Extorsión

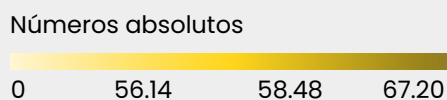


Robo a negocio

En el primer semestre de 2024, se reportaron 37,650 casos de robo a negocio, lo que representa una disminución del 2.26% en comparación con los 38,522 casos registrados durante el mismo periodo en 2023. Esta cifra también es inferior en 8.85% a los 42,264 casos reportados en el primer semestre de 2022. A nivel nacional, el **Estado de México encabeza la**

lista con un total de 147,792 incidentes de 2015 a junio de 2024. Le sigue la Ciudad de México con 141,435 casos, Jalisco con 87,582, Baja California con 49,539 y Guanajuato con 49,093. Veracruz de Ignacio de la Llave, Puebla, Quintana Roo, Querétaro y Nuevo León completan el top 10 con 43,799; 34,919; 27,258; 25,180 y 24,455 casos, respectivamente.

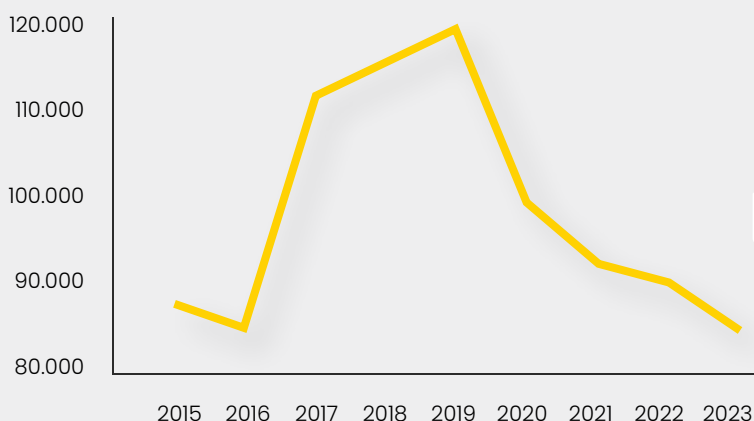
Gráfico 6
Robo de Negocio del Total Nacional (enero -junio)



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en SESNSP JUN 2024.



Total de robo a negocio



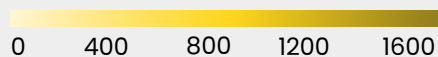
Fraude

Durante el primer semestre de 2024, se registraron 59,111 casos de fraude, lo que marca un incremento de 6.38% en comparación con los 55,564 casos del mismo periodo en 2023. Esta cifra también representa un aumento de 11.08% respecto a los 50,021 casos reportados en el primer semestre de 2022. **La Ciudad de México lidera con un total de 143,311**

incidentes acumulados de 2015 a junio de 2024. Le siguen el Estado de México con 85,076 casos, Jalisco con 70,285, Nuevo León con 40,549 y Chihuahua con 32,994. Puebla, Guanajuato, Veracruz de Ignacio de la Llave, Querétaro y Baja California completan el top 10 con 31,801; 28,108; 26,951; 24,675 y 19,089 casos, respectivamente.

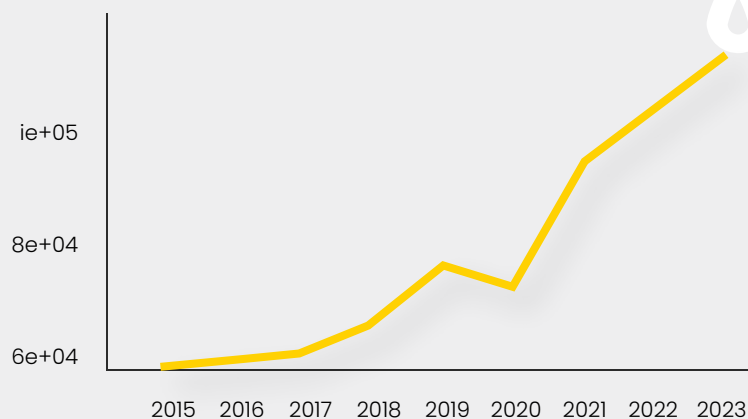
Gráfico 7
Fraude a nivel nacional
(enero -junio)

Números absolutos



Fuente: Prosegur Research, 2025
basado en SESNSP JUN 2024.

Total de fraude



Robo a transportista

En el primer semestre de 2024, se reportaron 4,029 casos de robo a transportista, lo que representa una disminución del 15.36% en comparación con los 4,760 incidentes del mismo periodo en 2023. Esta cifra también marca un incremento del 11.58% respecto a los 4,266 casos registrados en el primer semestre de 2022. **En el acumulado de 2015 a junio**

de 2024, el Estado de México destaca con un total de 36,260. Puebla ocupa el segundo lugar con 14,213 casos, seguido por Michoacán de Ocampo con 9,394, Nuevo León con 5,871 y Morelos con 5,735. Jalisco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Ciudad de México y Oaxaca completan el top 10 con 4,409; 3,932; 2,989; 1,437 y 1,002 casos, respectivamente.

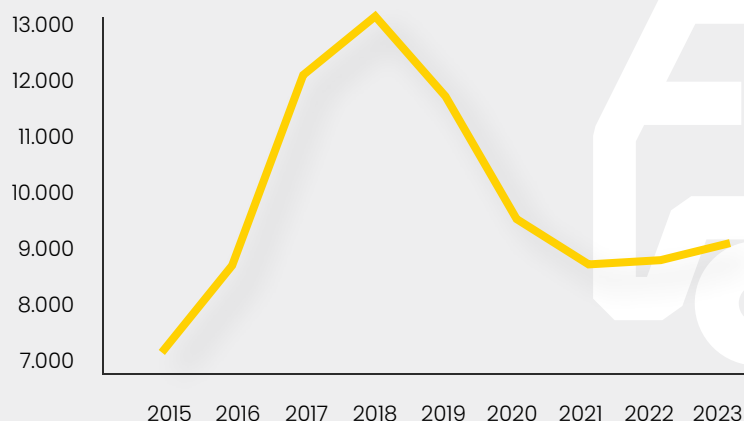
Gráfico 8
Robo a transportistas
(enero -junio)

Números absolutos



Fuente: Prosegur Research, 2025
basado en SESNSP JUN 2024.

Total de
robo a transportista

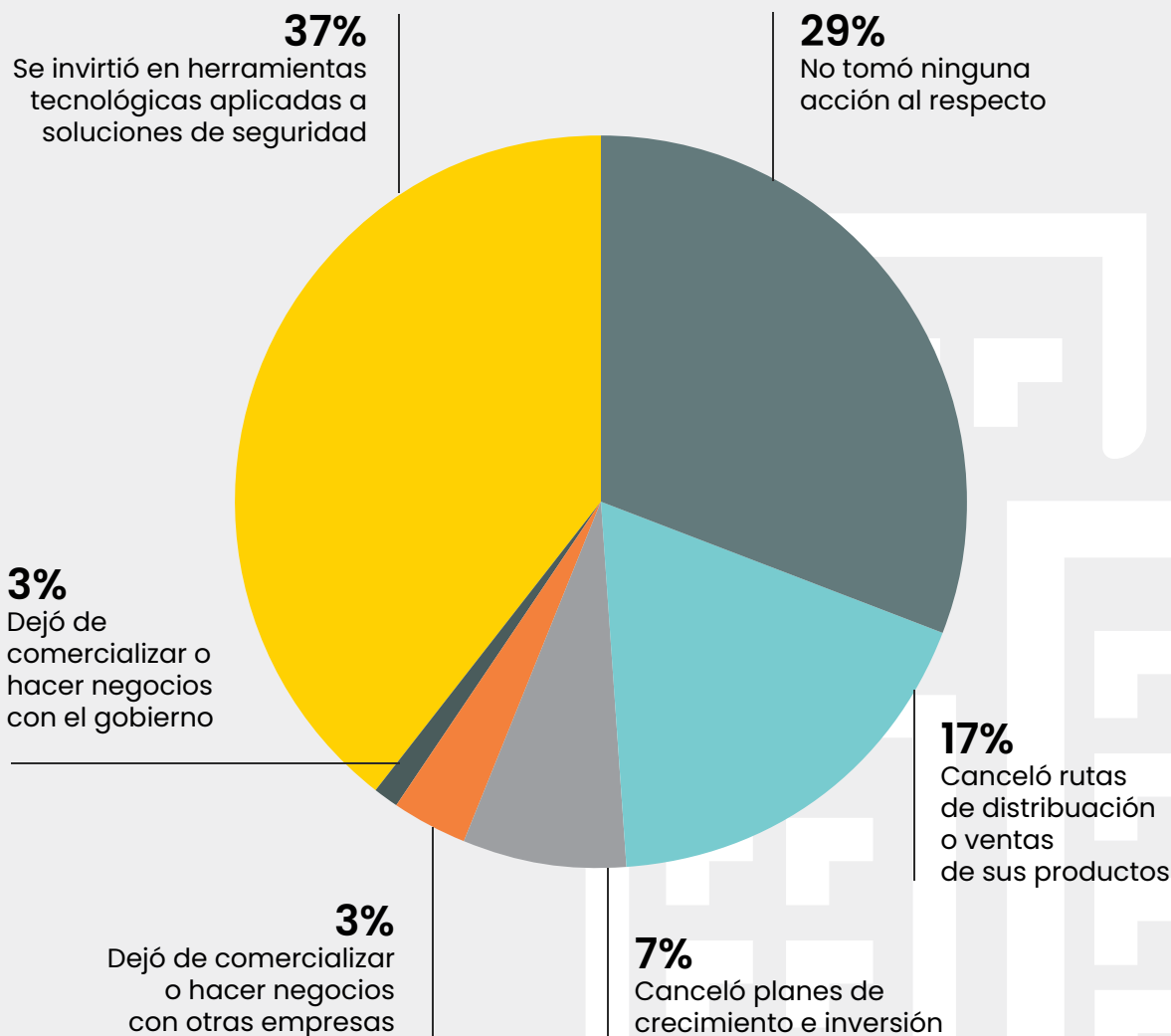


La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) revela que **el 24.6% de las unidades económicas en México fueron víctimas de algún delito durante el año previo**, lo que equivale a 1.2 millones de unidades económicas afectadas de un total de 4.8 millones. **Los sectores más impactados fueron el comercio (27.8%), la industria (19.4%) y los servicios (22.7%).**

El costo total de la inseguridad y el delito en unidades económicas en México se estima en 120 mil millones de pesos, equivalente al 0.67% del PIB nacional.

Las tendencias de inseguridad en México han provocado diversas reacciones por parte de las empresas: ↓ ↓ ↓ ↓

Gráfico 9
Acciones de las empresas ante inseguridad

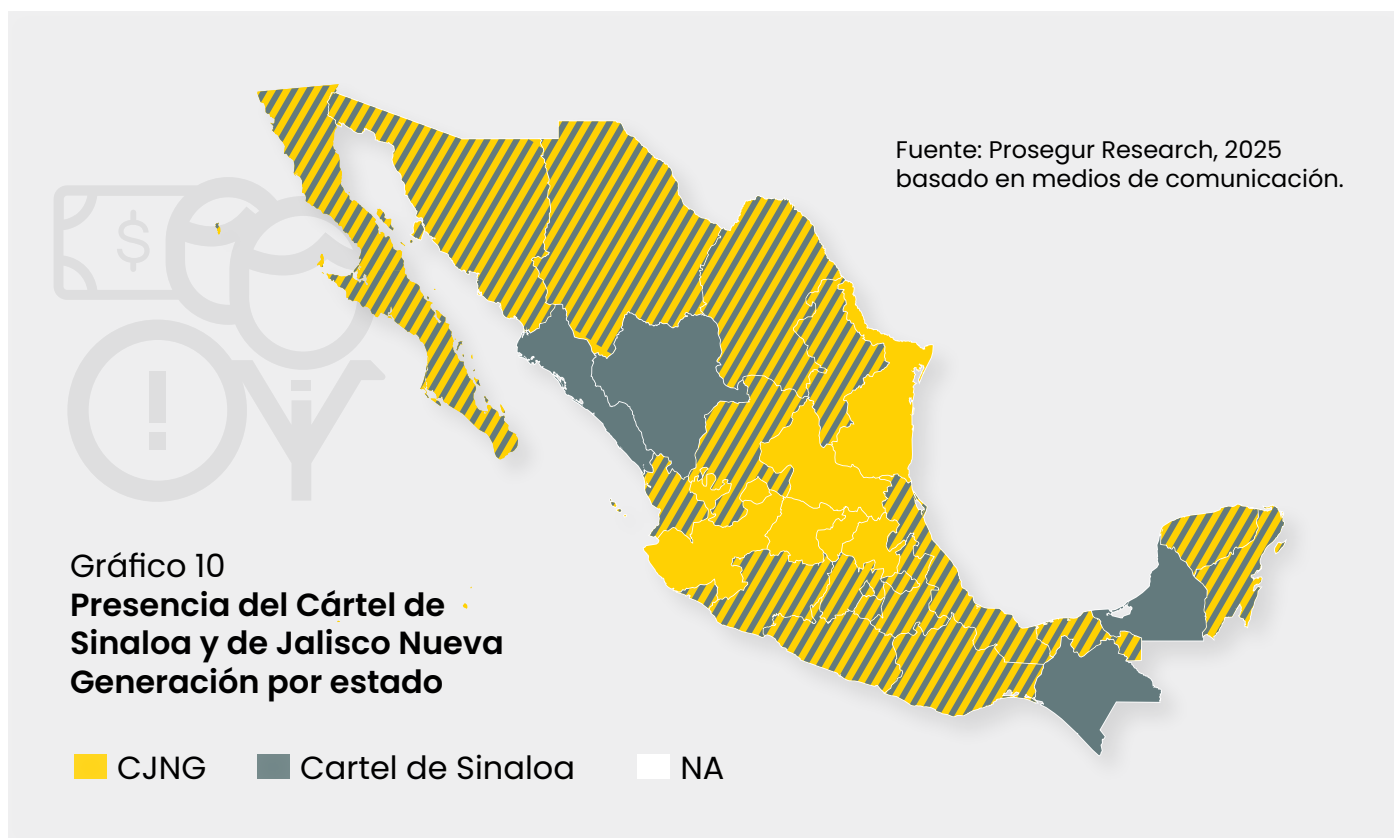


Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en American Chamber of Commerce of Mexico, A. C, 2024

2.1.3. Organizaciones criminales en México

En México actualmente operan dos organizaciones criminales con capacidades transnacionales: el **Cártel de Sinaloa** y el **Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)**. Estos cárteles son considerados los más peligrosos debido a su control sobre los sitios

clandestinos de producción de drogas, las rutas de trasiego dentro y fuera de las fronteras mexicanas y su extenso involucramiento en otras economías ilegales además de los narcóticos.



Ambos cárteles controlan casi todo el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, con un dominio particular en el comercio de drogas sintéticas, mientras que han logrado extender sus operaciones hacia otros puntos en Europa, Asia y Oceanía.

La presencia del Cártel de Sinaloa se ha identificado en 47 países alrededor del mundo; mientras que el CJNG presuntamente cuenta con enlaces y operadores en 40.

Además de los dos cárteles, **entre 150 y 175 grupos criminales de diversos tamaños operan en el país.** Estos subgrupos, que, en algunos casos, están aliados a los cárteles principales, varían desde fuerzas paramilitares importantes hasta pequeñas bandas callejeras.

De acuerdo con una estimación académica reciente, la delincuencia organizada en México suma en sus filas aproximadamente 175,000 integrantes, una “fuerza laboral” que lo colocaría como el quinto empleador más importante del país, incluso por encima de empresas como OXXO o PEMEX. Los cárteles, además, ofrecen “salarios” de hasta MXN 30,000 (aproximadamente USD 1,600, mientras que el salario promedio en México es de MXN 13,000) para reclutar sicarios.

Reconfiguración del tablero criminal en México

Las principales organizaciones delictivas en México se encuentran desde hace unos años en un proceso de recambio generacional, el traslado de liderazgo hacia perfiles más jóvenes, inexpertos y con poca aversión al riesgo han favorecido la escalada de violencia en algunas zonas del país.

Adicionalmente, la captura, a finales de julio de 2024, por parte de Estados Unidos de Ismael “el Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa podría acelerar el proceso de reconfiguración. Este movimiento deja vulnerable al Cártel de Sinaloa, a una lucha de poder interna. La falta de un liderazgo fuerte podría fomentar una **mayor violencia entre las facciones que luchan por el control de territorios clave**. Adicionalmente, la debilidad interna del Cártel de Sinaloa podría ser aprovechada por el CJNG para tratar de aventajar a su principal rival.

2.1.4. Situación de la región del Caribe

Las principales amenazas a la seguridad de la región del Caribe incluyen el tráfico y contrabando de drogas y armas, pesca ilegal, extracción ilegal de recursos naturales, piratería, terrorismo y delitos cibernéticos que afectan la infraestructura marítima. Además, la región enfrenta desafíos con la inmigración ilegal.

En la **República Dominicana**, se reportaron un total de 43 víctimas de homicidio en 2023. La trata de personas también es un problema significativo con 83 reportes, mientras que el tráfico de personas involucra rutas de haitianos en tránsito hacia América del Sur.

El país enfrenta un tráfico considerable de armas y cocaína siendo un importante centro de tránsito regional, con sus seis puertos de contenedores y aeropuertos activos, es un punto de distribución crucial, desde el que también se han detectado embarques con destino a España.



- ▶ Bahamas es una ruta clave para el comercio de cocaína, además la isla sigue considerándose un paraíso fiscal, lo que la hace vulnerable a la evasión fiscal y otras formas de delitos financieros, como los esquemas Ponzi, llevados a cabo por grupos del crimen organizado.
- ▶ Haití presenta altos índices en trata y tráfico de personas, exacerbados por la situación económica y política del país. El tráfico de armas y el comercio de cocaína están estrechamente ligados a la inseguridad y la violencia.

Rutas de Tráfico de Drogas por el Caribe

La región del Caribe alberga una de las rutas más utilizadas para el tráfico de droga en el continente americano. La ruta conocida como “ir de isla en isla” inicia en Venezuela, donde la cocaína es transportada hacia el norte mediante lanchas rápidas y barcos pesqueros, haciendo escalas en varias islas de la región y llegando a Puerto Rico y Florida. La República Dominicana juega un papel crucial como país de tránsito, utilizando contenedores marítimos para enviar cocaína a puertos en Estados Unidos.

La segunda ruta más aprovechada transita por territorios europeos de ultramar en el Caribe. Las islas de Aruba, Curazao y San Martín, junto con Bonaire, San Eustaquio y Saba, forman un complejo sistema de transbordo. Las Islas Vírgenes Británicas, tienen conexiones directas con el Reino Unido, lo que facilita el flujo de drogas hacia Europa.

2.1.5. Conclusiones

En toda la región, las organizaciones criminales han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, involucrándose en tráfico de armas, extorsión, secuestro y otros delitos, lo que ha mantenido altos índices de violencia. La captura de líderes delictivos ha tenido impactos limitados en la reducción del crimen.

En México, la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, por parte de Estados Unidos, ha desencadenado una lucha interna por el poder dentro del cártel, potencialmente aumentando la violencia. Ya hay indicios de que esta situación está siendo aprovechada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para expandir su influencia, intensificando aún más los conflictos entre las organizaciones criminales.

Las organizaciones delictivas en México están en un proceso de reajuste, que podría intensificarse en los primeros meses de 2025, por lo que no pueden descartarse más acciones unilaterales por parte de Estados Unidos como las observadas en julio pasado. Especialmente si se considera que el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, la gestión de las fronteras y el control migratorio son temas de amplia en Estados Unidos.

La región del Caribe se espera que se mantenga en el medio plazo como una ruta destacada para el tráfico de narcóticos, no existe evidencia que permita suponer acciones contundentes ni de los gobiernos locales, ni de la comunidad internacional, para cambiar esta tendencia.



An aerial night photograph of a city, likely San José, Costa Rica, with a large volcano in the background. The city lights are visible, and the volcano is silhouetted against a dark sky with some clouds. A large yellow rectangle is overlaid on the center of the image, containing the text 'América Central' and a large, faint number '2.2'.

América Central

2.2 América Central

Puerto González Díez

2.2.1. Introducción

América Central está conformada por siete países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A pesar de su diversidad cultural y riqueza natural, **la región enfrenta una crisis de seguridad crónica alimentada por problemas estructurales históricos.**

En la primera definición que se dio en 1823 para la Federación Centroamericana ya propone que América Central no sea vista únicamente como puente entre dos regiones, sino también como eje de la relación de las otras dos Américas (norte y sur), cuestión que luego se amplió con su papel clave en la unión interoceánica, tal como asegura ya Granados en su obra de 1986. Esta posición estratégica ha tenido sus luces y sus sombras: múltiples beneficios económicos, sin embargo, también **ha hecho de la región un enclave estratégico para las bandas y grupos de crimen organizado.**

La región, desde que adquirió entidad política como tal, es percibida como un área estratégica, con un

destino geopolítico muy claro: el intercambio mundial. Sin embargo, estas líneas geopolíticas han sido escritas en gran parte desde fuera. Hace algunas décadas hablábamos de potencias extranjeras. Hoy, desde la perspectiva de la geopolítica crítica, esta influencia viene de muchas más fuentes, ocupando gran parte de este espacio los grupos criminales y violentos.

El presente análisis se enfoca desde la teoría foucaultiana del poder y los “microespacios”. En América Central, el diseño territorial, empresarial y delictivo han dado paso a una configuración de microespacios de poder. Estos son muy numerosos en América Central de la mano de numerosas organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha o los cárteles mexicanos, que, superando lo local, se han convertido en grandes conglomerados que actúan como las multinacionales, estableciendo formas, por un lado, de control y, por otro, de resistencia a las instituciones y al aparato tradicional del Estado.



2.2.2.

Dinámicas subyacentes de inseguridad y violencia

La situación de seguridad en América Central ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas. Sin embargo, para entender el origen de la situación actual, se ha de mirar la década de 1980 y 1990, en el marco de la globalización y de las consecuencias de los procesos de pacificación subregionales. Tras largos periodos de conflictos armados internos, la paz alcanzada fue muy efímera y la violencia política fue sustituida por la violencia criminal. **Los grupos de crimen organizado, las bandas y maras supieron ocupar el vacío de poder y seguridad surgido de la desmilitarización prevista en los acuerdos de paz.**

Los siete países son puente natural entre los países productores de cocaína, situados al sur del continente, y el principal consumidor a nivel mundial, Estados Unidos. Pero también son ruta para todo tipo de tráfico hacia el norte: armas, personas, o falsificaciones. **La delincuencia transnacional organizada, bandas y maras han convertido a la región en una de las regiones más violentas del mundo.** Este cambio de modelo fue posible gracias a un telón de fondo muy particular: instituciones débiles y jóvenes, precariedad, economías subdesarrolladas y reformas inexistentes o ineficientes de los sistemas penitenciarios.

Aunque las causas son multifactoriales y no se puede mirar en una única dirección, existen algunos factores y actores que contribuyen de forma clara, directa y significativa en la (in)seguridad y violencia en la región:

Maras y pandillas

Las maras son actores clave en la inseguridad de América Central, especialmente en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), con la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 como principales exponentes. Sus actividades han hecho de esta zona uno de los lugares más violentos del mundo. Son organizaciones criminales predatorias que cuentan con estructuras sociales muy fuertes y arraigadas que tienen como base la violencia (InsightCrime, 2024). **Entre las principales actividades que llevan a cabo se encuentran las extorsiones.**

La MS13 es la más grande de la región, siendo, además, la primera pandilla callejera definida por Estados Unidos como organización criminal transnacional categorizando como terroristas a parte de sus líderes en El Salvador. En la actualidad la MS-13 cuenta en su bastión, El Salvador,

con más del 60% de sus 30.000 miembros en las cárceles del país como consecuencia de la estrategia de seguridad de la administración Bukele.

El impacto de las maras no solo se refleja en las altas tasas de homicidios (por ejemplo, 38 por cada 100,000 habitantes en El Salvador en 2022), sino también en la economía. Las extorsiones, conocidas localmente como renta, vacunas o piso, afectan a pequeños negocios y empresas grandes, limitando el desarrollo económico y aumentando la pobreza. Además, el reclutamiento forzado de jóvenes perpetúa el ciclo de violencia y exclusión social.

Crimen organizado y narcotráfico

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, **por Centroamérica pasa el 80% de la cocaína que anualmente ingresa en Estados Unidos.** Panamá y Costa Rica son los puntos de tránsito de cocaína hacia el norte y Europa más prolíficos de América Central. Si bien ambos han sufrido una disminución de las incautaciones en 2023, Panamá se mantiene como el tercer país de América Latina, por detrás de Colombia y Ecuador, que mayores volúmenes presenta. **El caso costarricense es llamativo pues, a pesar de la disminución, el narcotráfico se relaciona de forma directa con el incremento de la violencia y los homicidios (+41%).**

El narcotráfico en la región está íntimamente ligado al crimen organizado, que incluye redes transnacionales y locales. Los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han formado alianzas con organizaciones centroamericanas para asegurar las rutas de tráfico. El entonces ministro de Seguridad Pública y de Gobernación de Costa Rica, Luis Gustavo Mata, afirmaba ya en 2016 que los cárteles mexicanos habían desplazado a las organizaciones de Colombia.

Colusión y debilidad institucional

La colusión en todos los niveles gubernamentales son un factor debilitador de las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado, contribuyendo a la crisis de seguridad que atraviesa la región centroamericana. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, Nicaragua, Honduras y Guatemala se ubican entre los países más corruptos del mundo, con índices de percepción de corrupción de 17, 23 y 23 sobre 100, respectivamente.

2.2.3.

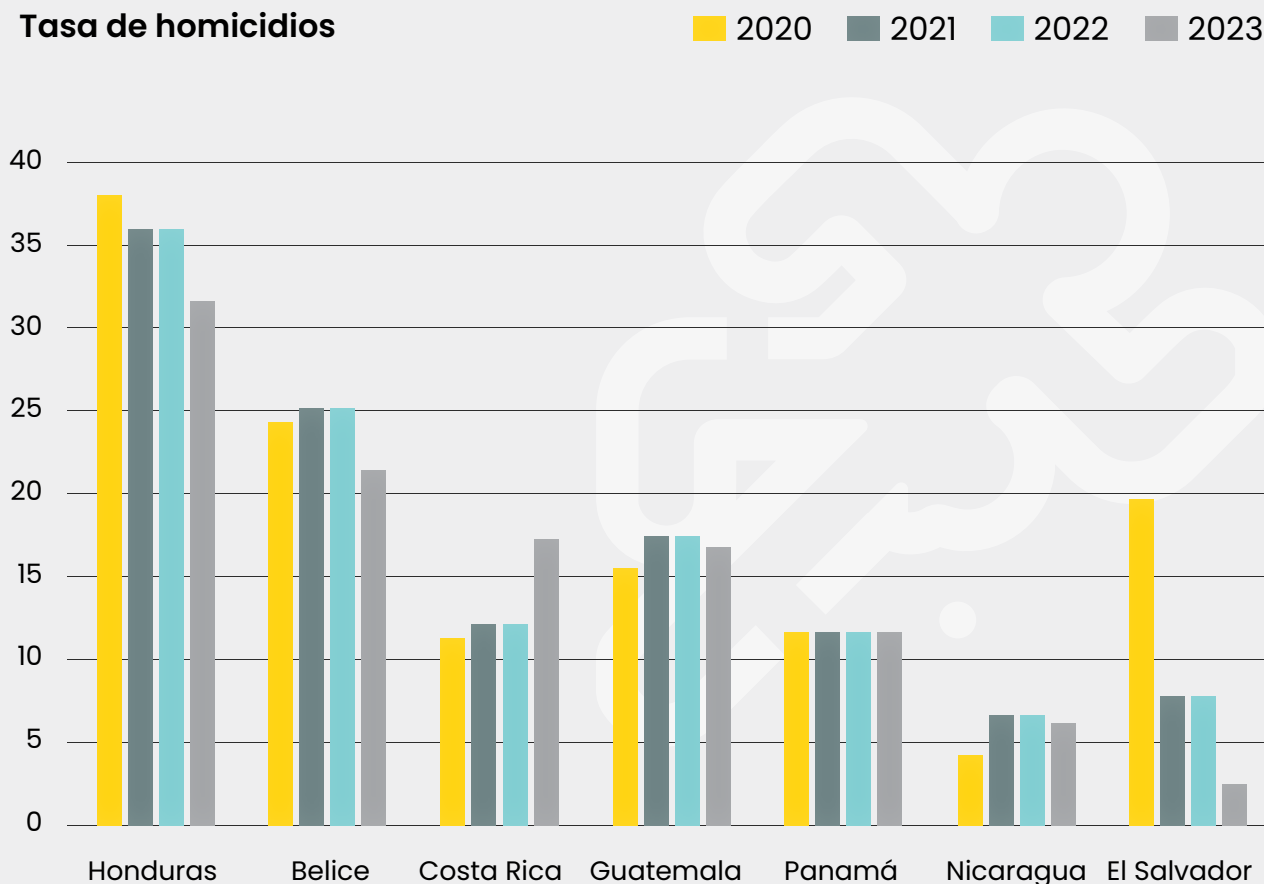
La geografía de la violencia en datos

La situación de seguridad en América Central se caracteriza por los esfuerzos continuos de cooperación regional e innovación en estrategias de seguridad, particularmente en el ámbito ciber y fronteras, mientras persisten desafíos más tradicionales como el crimen organizado o la violencia en algunos países de la región. Algunos autores califican la situación de “guerra híbrida”. La Conferencia de Seguridad Centroamericana (CENTSEC) 2024, celebrada en Guatemala, ha puesto de manifiesto

los esfuerzos regionales para abordar los desafíos de seguridad actuales.

Sin embargo, persisten diferencias significativas en los niveles de seguridad entre los países de la región. Mientras que Costa Rica y Panamá mantienen indicadores de seguridad relativamente favorables, países como Guatemala, El Salvador y Honduras continúan enfrentando altos niveles de violencia y actividad delictiva.

Gráfico 11
Tasa de homicidios



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en datos de InsightCrime



HONDURAS

Honduras presenta un panorama de seguridad complejo. La tasa de homicidios disminuyó un 13% en 2023 y los datos del primer trimestre de 2024 muestran una tendencia similar con una reducción significativa del 18.1% en homicidios respecto al mismo período de 2023. Sin embargo, el país sigue siendo un escenario de violencia con una tasa de homicidios de 31,1, en comparación con el promedio regional de 20,1. **A pesar de los avances, Honduras continúa enfrentando desafíos significativos, sobre todo en lo relativo a la presencia de organizaciones criminales y los elevados niveles de impunidad, por ejemplo, la tasa de impunidad en homicidios alcanzó el 87% en 2022.**

En los últimos años, el gobierno de Honduras ha implementado diversas medidas para abordar dichos desafíos. Una de las medidas más polémicas fue la activación en 2023 de un estado de emergencia, basado en el concepto en la experiencia salvadoreña. Si bien estas estrategias han resultado efectivas en el plazo inmediato,

siguen suscitando críticas desde organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte sobre los riesgos potenciales para los derechos humanos.

Sin embargo, la seguridad presenta desafíos más allá de los delitos de alto impacto. Según datos del Proyecto Regional Infosegura, en 2022 las denuncias por extorsión aumentaron un 153%, alcanzando las 1.824 denuncias, cifra muy similar al máximo histórico alcanzado en 2013 con 1.929. Los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula concentran el 62% de estas denuncias, lo que evidencia que se está dando una distribución geográfica desigual de los delitos. Por su parte, los robos y hurtos continúan siendo una preocupación significativa, aunque disminuyeron un 23.5% en 2022. Los cultivos de hoja de coca en el país también se han incrementado, curstión acompañada de niveles de violencia muy superiores en los departamentos donde se concentran las zonas de siembra y tráfico de drogas como Colón.



BELICE

El contexto de seguridad beliceño se enfrenta a desafíos de seguridad muy significativos, aunque, de forma general, muestra algunas mejoras en comparación con años anteriores.

La tasa de homicidios se situó en 2023 en los 21.5 por cada 100.000 habitantes, un descenso de más del 14% respecto a 2018, uno de los puntos más álgidos de las últimas décadas. Esta tendencia a la baja se mantiene, al menos, desde 2020. Se señala que la comparativa es complicada pues los datos proporcionados por el país no son profusos. Sin embargo, el país ha mejorado sus sistemas de recopilación y análisis de datos criminales, siendo muestra de ello la colaboración entre el Observatorio del Crimen de Belice y el Departamento de Policía.

Las principales causas de violencia en el país son las pandillas locales que operan, en su

mayoría, en la Ciudad de Belice, en actividades como el tráfico de drogas, el contrabando y los robos, participando en el tráfico local de drogas y en robos. Sin embargo, se ha de valorar que la **mayor repercusión que está adquiriendo el país en el comercio ilícito de drogas y armas** está suponiendo la mayor presencia de pandillas, maras y grupos de narcotraficantes mexicanos, lo que complejiza el escenario y suele incrementar la violencia en el largo plazo.

Según los datos proporcionados por PNUD, en 2023 se registró un aumento del 5% en delitos violentos -homicidio, violación sexual, relaciones sexuales ilícitas, robo con violencia, robo y allanamiento-. Entre estos delitos, aquel con mayor incidencia fue el allanamiento o entrada ilegal con fines delictivos, con 628 casos reportados.

COSTA RICA

El caso costarricense es uno de los que más preocupan a nivel regional. **La tasa de homicidios se incrementó alrededor del 40% en 2023, alcanzando su máximo histórico** y situándose en los 17.2 por cada 100,000 habitantes, en comparación con el 12.6 de 2022. Esta escalada ha cambiado de forma drástica la percepción que se tenía del país, ampliamente definido como uno de los más seguros de la región centroamericana, llegando a compararse cada vez más habitualmente con Ecuador.

Gran parte de esta violencia se relaciona de forma directa con el incremento de la presencia de pandillas que se enfrentan por el control de los puertos y rutas que atraviesan el país. Destaca la provincia de Limón como epicentro de la violencia, y de forma concreta el puerto de Moín, uno de los centros clave para el transporte de droga hacia Europa. Sin embargo, las operaciones policiales en la provincia han potenciado el uso de los corredores de las provincias costeras del Pacífico, como Puntarenas y Guanacaste.

Ante esta crisis, en noviembre de 2023, el presidente Rodrigo Chaves anunció un nuevo Plan de Seguridad Nacional que incluye el endurecimiento de las sentencias y un aumento en la presencia

policial. Estas acciones buscan contrarrestar el avance del narcotráfico y el aumento de los asesinatos. Sin embargo, la situación actual está generando una gran preocupación entre la población y el sector empresarial por el posible impacto que tanto estos datos como la percepción puede tener en sectores clave como el turismo. Ha generado temor entre la población y preocupación por el posible impacto en sectores clave como el turismo.

Más allá de los homicidios, los datos revelan un contexto también deteriorado en diversos ámbitos de la seguridad pública. **Costa Rica se ha identificado como un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual**, lo que se materializa en un aumento del 42% en casos de violación sexual en 2023. Además, también **están proliferando los delitos relacionados con la falsificación y el contrabando de productos**, principalmente ropa, cosméticos, dispositivos tecnológicos y productos farmacéuticos, introducidos ilegalmente desde Nicaragua y Panamá, así como el comercio ilícito de bienes sujetos a impuestos especiales, como cigarrillos y bebidas alcohólicas. Se destaca que, en el ámbito ciber, el gobierno declaró una emergencia nacional por los ciberataques a instituciones públicas.



GUATEMALA

Guatemala enfrenta actualmente una compleja crisis de seguridad definida por altos índices de violencia, criminalidad organizada y debilidad institucional. La presencia de organizaciones criminales transnacionales y pandillas locales continúa siendo la amenaza más relevante, especialmente en áreas urbanas y zonas fronterizas.

Guatemala es un punto estratégico de tránsito de bienes ilícitos para los grupos de crimen organizado, lo que exacerba la violencia. A pesar de la sostenida reducción de la tasa de homicidios, 16.7 por cada 100,000 habitantes en 2023, los niveles de violencia siguen siendo superiores a la media regional. Como respuesta, el gobierno guatemalteco ha venido implementando distintas medidas, incluyendo el fortalecimiento

de las fuerzas de seguridad y la colaboración con agencias internacionales.

Más allá de los delitos violentos, Guatemala **enfrenta desafíos significativos en términos de extorsión** por parte de pandillas como MS-13 y Barrio 18, así como por terceros grupos que imitan a las bandas, estimando su impacto económico en aproximadamente \$61 millones anuales. Según datos del Ministerio Público, en 2022 se registraron 9.566 denuncias, un 7% más que el año anterior, de las cuáles el 80% se originarían en el interior de los centros penitenciarios. **Entre las principales víctimas se encuentran los pequeños negocios y el sector del transporte público**, donde se han producido asesinatos tras la negativa a pagar las llamadas “rentas”.

PANAMÁ

A pesar de ser considerado uno de los países más seguros de América Central, **Panamá también cuenta con focos de inseguridad derivados de la criminalidad organizada y violencia en su territorio**, especialmente en zonas urbanas y fronterizas. Si bien la posición geográfica del país lo configura como punto de tránsito para las actividades de los grupos dedicados al narcotráfico, la tasa de homicidios se mantiene relativamente baja en comparación con sus vecinos, registrando 11.5 homicidios por cada 100,000 en 2023. Como indican algunos think-tanks, este estancamiento en tasas bajas parece indicar que, aun cuando tiene presencia el crimen organizado, estos trabajan sin enfrentamientos por el control de las plazas y las rutas.

Sin embargo, en las encuestas de percepción de inseguridad realizadas en el país señalan que el 80% de los encuestados consideró que el crimen

y la delincuencia se han incrementado, siendo el nivel de percepción más alto de los últimos años. Según los datos facilitados por el Sistema Nacional de Estadísticas Criminales, se viene registrando **un aumento de los delitos contra la propiedad (en su mayoría robos y hurtos en zonas urbanas como la capital, Ciudad de Panamá, y Colón)**, aumentando los robos un 19% en los primeros meses de 2024 frente al mismo periodo de 2023. La extorsión, aunque con una prevalencia menor que en el resto de países de la región, mostró un ligero aumento. Aunque no sea posible acceder a los datos, el fiscal Emeldo Márquez, especializado contra la delincuencia organizada, incluyó la extorsión entre los delitos que aumentaron el 2023. Es importante señalar que, a pesar del panorama presentado, **Panamá mantiene las tasas de criminalidad bajas en comparación con el resto de la región.**

NICARAGUA

Se señala que la principal limitación para el análisis del país es la falta de transparencia y publicación de datos por parte de las instituciones. **Nicaragua presenta un panorama de seguridad complejo y controvertido.** Según diversas entrevistas y declaraciones, la tasa de homicidios se sitúa en 6.2 por cada 100,000 habitantes, con una ligera tendencia a la baja, siendo la más baja de Centroamérica. Sin embargo, el análisis de las tendencias sobre crimen organizado resulta muy complicado ante las limitaciones del gobierno hacia medios de comunicación y ONGs.

En base a lo que se señala en fuentes de fuera de la región y del terreno, el Índice de Paz Global 2023 sitúa a Nicaragua en el puesto 123 de 163 países, presentando una ligera mejora. El gobierno ha implementado diversas medidas en el ámbito de la seguridad desplegando fuerzas policiales en todo el territorio nacional. Sin embargo, estas acciones vienen generando la preocupación de organismos internacionales de derechos humanos y libertades civiles ante la posible criminalización de líderes sociales y religiosos.

EL SALVADOR

A la luz de los datos, **El Salvador es el país que más a mejorado sus datos sobre seguridad en toda la región.** La tasa de homicidios disminuyó en el último año casi un 70%, cerrando 2023 con la tasa más baja en las Américas, de 2.4 por cada 100,000 habitantes. Esta reducción contrasta con el contexto de 2015, cuando el país se situaba entre los más violentos no solo del continente, sino también del mundo. En todo caso, es pertinente señalar que un gran número de expertos cuestionan este dato; el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana argumenta que las cifras están muy subestimadas, así como que no se incluyen las muertes de miembros de pandillas y/o durante operaciones de las fuerzas de seguridad.

Las medidas de “mano dura” instauradas por el gobierno de Nayib Bukele han potenciado el debate sobre las estrategias a tomar respecto al desafío de la inseguridad en América Latina. **Mientras que los datos muestran una sustancial mejora de los datos de seguridad a todos los niveles, el modelo es fuertemente criticado** en materia de derechos humanos y estado de derecho. Una de las que más críticas está generando es la implementación del estado de excepción, vigente desde marzo de 2022, que ha resultado en una de las tasas de encarcelamiento más alta del mundo, con 2,303 por cada 100,000 adultos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la duración excesiva del estado de excepción y las detenciones masivas en su marco.





Colombia y Venezuela

2.3 Colombia y Venezuela

Jerónimo Ríos Sierra

Desde hace décadas existen **elementos compartidos en buena parte de las dinámicas delictivas y de (in) seguridad que comparten Colombia y Venezuela, especialmente, en relación con el corredor fronterizo** que, si bien supera los 2.000 kilómetros, particularmente, afecta a los departamentos colombianos de Arauca y Norte de Santander, y los estados venezolanos de El Zulia, Táchira y Apure. No obstante, y a pesar de lo anterior, cada Estado atraviesa por coyunturas particulares que, si bien permiten proponer miradas compartidas, por otro lado, se incardinan sobre realidades particulares, tal y como se verá a continuación.

En el caso de Colombia, un punto de inflexión lo ha marcado el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, suscrito en noviembre de 2016, y que en buena medida ha definido parte de la política de seguridad de los tres últimos Ejecutivos (Ríos, 2024), toda vez que ha transformado buena parte del tablero de la violencia política y el crimen organizado (Ríos, 2022). Lo anterior, en la medida en que el conflicto armado interno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa irresoluto (vigente desde 1964), y en el país operan decenas de estructuras heredadas del paramilitarismo (desmovilizado formalmente en 2006), junto con multitud de pequeñas -y no tan pequeñas- organizaciones armadas relacionadas muy indirectamente con las extintas FARC-EP.

Para julio de 2024 se contabilizan un total de 420 exguerrilleros asesinados, a lo que se suman otros 1.500 líderes sociales, contabilizados desde noviembre de 2016, al tomarse como punto de referencia la firma del Acuerdo con las FARC-EP (Indepaz, 2024). Aun cuando entregaron las armas más de 7.000 combatientes de la guerrilla, y se acogieron a los beneficios de dicho Acuerdo otros 7.000 más, **las dinámicas y tendencias de la violencia en Colombia están lejos de quedar superadas** (Policía Nacional de Colombia, 2024). Desde finales de 2016 y hasta la actualidad proliferaron más de treinta estructuras mal llamadas disidentes de las FARC-EP, toda vez que el 94% de los entonces excombatientes mantiene firme su reincorporación a la vida civil (Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2024). Es decir, **tales estructuras armadas operan, mayormente, en el plano local, íntimamente asociadas al negocio del narcotráfico y la minería**

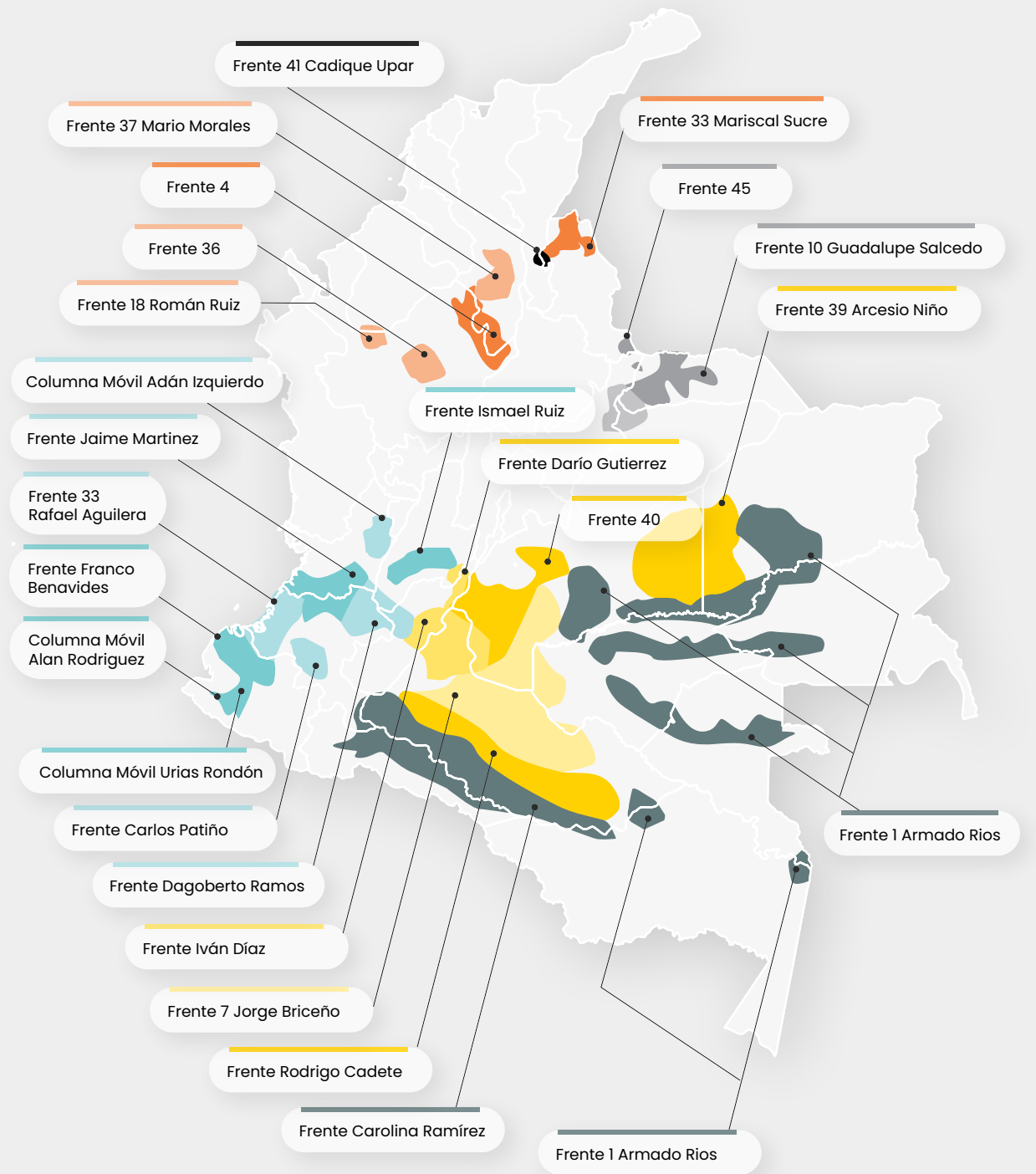
ilícita, y en escenarios en donde, tradicionalmente, las extintas FARC-EP fueron hegemónicas. Así, y aun cuando la mayoría de las estructuras no excede de los 500 integrantes, dos de ellas, como son, sobre todo, el Estado Mayor Central (EMC) y, en menor medida Segunda Marquetalia (SM), han conseguido involucrar miles de efectivos a su causa, enfrentada entre sí, directa o directamente.

Por si fuera poco, **el Clan del Golfo, el heredero más importante del paramilitarismo en Colombia, ha consolidado su posición, sobre todo, en la región Caribe, entrando en disputa con grupos menores de esta misma impronta, pero también con estructuras armadas de naturaleza insurgente**. El resultado no ha sido otro que el de la agitación de marcos de confrontación y disputa, sobre todo, en el nororiente colombiano, sobre el departamento de Norte del Santander, pero también en otros emplazamientos como Antioquia o escenarios del litoral Pacífico, tal y como sucede en los departamentos de Chocó, Cauca o Nariño – y sin perder de vista otras evocaciones transnacionales, por sus negocios en una veintena de países, incluso de fuera de Latinoamérica (Badillo y Trejos, 2023)-.



Gráfico 12
**Territorialidad de la violencia del EMC,
 la principal disidencia de las FARC-EP**

Fuente: Prosegur Research, 2025
 basado en Ideas para la Paz (2023).



BLOQUES ESTADO MAYOR CENTRAL

- Frente 41 Caci que UPAR
- Bloque Magdalena Medio Camarada Gentil Duarte
- Bloque Comandante Jacobo Arenas
- Bloque Oriental Jorge Suárez Briceño
- Bloque Suoriental
- Comando Conjunto de Oriente

Asimismo, no se puede pasar por alto a un tercer actor clave en esta disputa, en y contra el Estado, tal y como es la mencionada guerrilla del ELN, formada en la actualidad por más de 4.000 efectivos y una posición consolidada en los escenarios de mayor densidad cocalera del país -como el nororiente y el suroccidente-. Lo anterior, aun cuando su posición en la geografía de la violencia ha arrastrado consigo diferentes dificultades y tensiones regionales con varios de sus frentes de guerra, dada su naturaleza descentralizada (González, 2021), y hasta el punto de que en 2024 ha experimentado un proceso de fractura con respecto de su Bloque Comuneros del Sur, operativo en el departamento de Nariño.

En la actualidad, por ejemplo, **la tasa de homicidios violentos de Colombia es de 25.7 por cada 100.000 habitantes**, no muy alejada de las 26.04 muertes que, por ejemplo, se contabilizaban en 2016, si bien, de acuerdo con el informe anual de violencia homicida que publica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2024), **ocho de sus ciudades se encuentran entre las más violentas del mundo -Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Palmira, Santa Marta, Sincelejo-**. Igualmente, **evidencia signos de cronificación lo que guarda relación con el negocio de la droga**, de manera que, si en 2016 la superficie cultivada de coca era de 146.000 hectáreas, en 2024 se eleva por encima de las 230.000 hectáreas (UNODC, 2024). Así, y a pesar de los avances del país en algunas reformas políticas y judiciales asociadas al fin del conflicto con las FARC-EP, es posible advertir que **la geografía de la violencia en Colombia se encuentra inalterada, con importantes dificultades para su mitigación.**

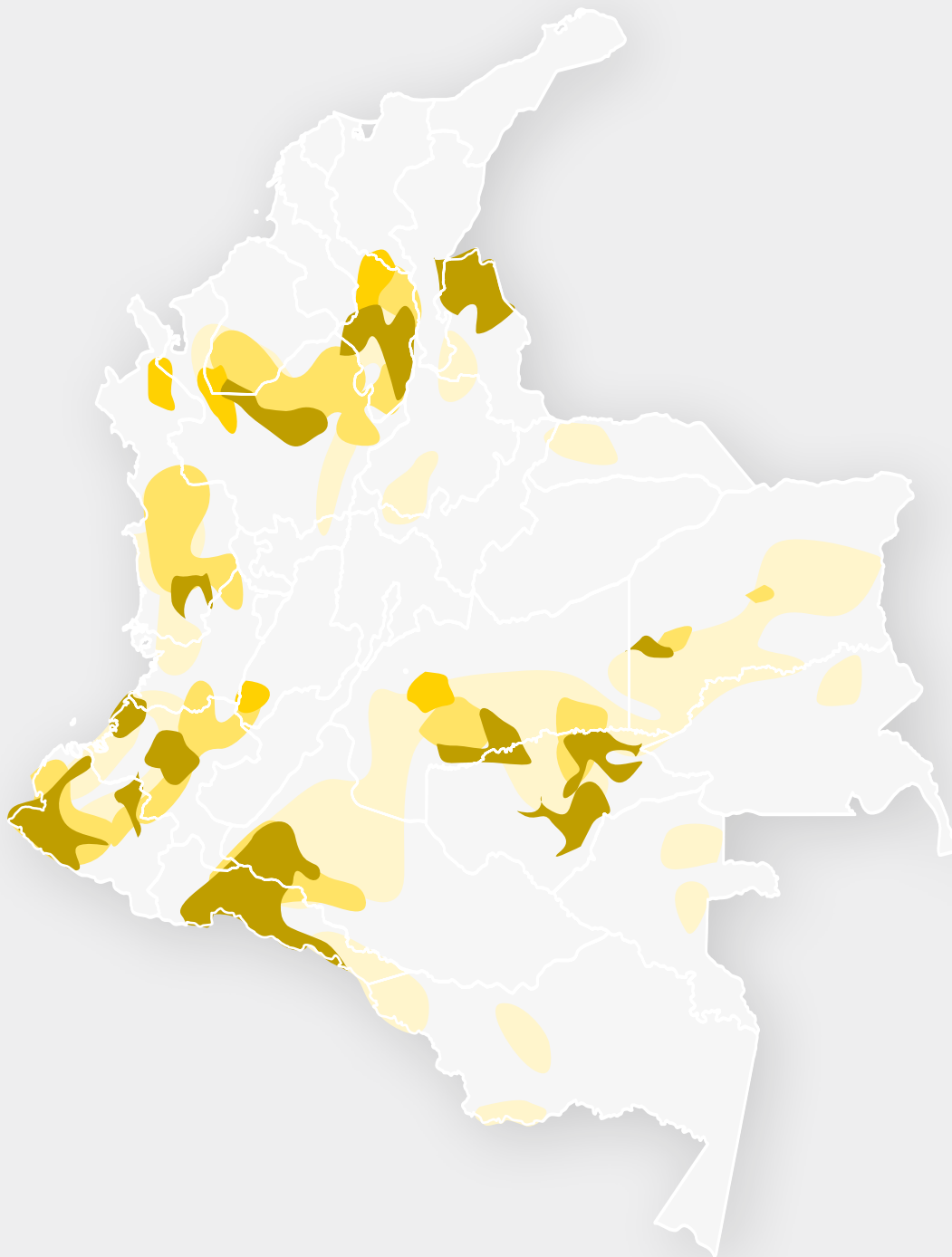
A tal efecto, nueve departamentos -dos del sur (Cauquetá y Putumayo), cuatro del litoral Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño y Valle), dos del nororiente (Arauca y Norte de Santander), junto con Antioquia, concentran tres de cada cuatro muertes violentas contra excombatientes de las FARC-EP o líderes sociales. En los mismos, se concentra más del 85% del total de la coca cultivada en Colombia en los últimos cinco años y es donde se observa un mayor número agregado de estructuras violentas en disputa por los recursos y las rutas de procesamiento y distribución, toda vez que son los escenarios en donde ha sido mayor la proliferación de organizaciones criminales.

De todos escenarios expuestos, tal vez, el de mayor impacto a nivel transnacional sea el que tiene lugar en la **frontera colombo-venezolana**. En sí, desde hace décadas, esta frontera **ha quedado al servicio de las gobernanzas criminales** que involucran a estructuras mayormente colombianas, pero también venezolanas (García Pinzón y Trejos, 2021). Así, en función de cuál sea el punto de la frontera, las dinámicas de las economías ilícitas y sus protagonistas cambian. Es decir, si bien el tráfico de drogas, el contrabando de alimentos y medicamentos o la extorsión son prácticas generalizadas a lo largo de todos los municipios que conforman la frontera, sus responsables cambian. Por ejemplo, al norte, en La Guajira o Cesar hay preeminencia del antiguo frente 33 de las FARC-EP y del ELN, en disputa con el Clan del Golfo, que igualmente controlan buena parte de la actividad criminal que tiene lugar ya en suelo venezolano. Sin embargo, desde la región colombiana del Catatumbo, el actor más importante de Colombia, el ELN, con mucha presencia en los estados venezolanos de Táchira y Apure, mantiene una compleja relación a tres.





Gráfico 13
**Distribución regional
de los cultivos de coca 2013-2022**


Fuente: Prosegur Research,
2025 basado en (UNODC, 2023: 58).




TIPO DE TERRITORIO SEGÚN LA PRESENCIA DEL CULTIVO DE COCA

 Afectado permanentemente
(durante los últimos 10 años)

 Afectado recientemente
(últimos 3 años)

 Afectado intermitentemente
(2013 - 2022)

 Abandonado
(últimos 3 años)

El estado de Táchira es uno de los bastiones del conocido como Tren de Aragua, tal vez, la estructura criminal más importante de Venezuela, concebida desde la cárcel de Tocarón y con actividades ilícitas, también en otros países de la región como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, aparte de Estados Unidos. Aunque existe una gran distorsión en cuanto a sus cifras, alcance y magnitud, hay certeza en lo importante de la prisión para su funcionamiento, y también con respecto a la disputa por el negocio de la droga con diferentes organizaciones criminales, no solo en la frontera, sino también en el mismo suelo colombiano. Al respecto, no conviene pasar por alto hechos tales como las acciones de sicariato perpetradas en Bogotá o Medellín, en 2023 y 2024, y que han motivado declaraciones y responsabilidades cruzadas con organizaciones criminales como Los Paisas, el Clan del Golfo o La Oficina de Envigado. Cuestión aparte está su activismo criminal, también, en otros escenarios tales como Lima (Perú), La Paz, El Alto y Cochabamba (Bolivia) o en la región de Taracapá o Arica (Chile).

Asimismo, en el estado de Apure -y al otro lado, en el departamento colombiano de Arauca), la condición prevalente del ELN se fortalece gracias, en Venezuela, a su relación con las todavía presentes para algunos medios, como InSight Crime (2023), Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Esta formación, habría colaborado en los últimos años tanto con el ELN como con la disidencia de las FARC-EP de SM, a la vez que ha desarrollado operativos en contra, sobre todo, del EMC. No obstante, son muchos los cuestionamientos sobre su vigencia y activismo en la zona, que pareciera quedar subsumida en la estructura misma del ELN. Activismo que, en cualquier caso, en lo que respecta con el departamento de Amazonas, nuevamente, se encuentra controlado, sobre todo, por estructuras armadas colombianas. Allí, la referida guerrilla del ELN encuentra mayores rivalidades, hace unos años con formaciones como Los Puntilleros, y en la actualidad, con algunas estructuras del EMC (Gómez y Ríos, 2022), con histórico arraigo en la región, por la presencia e influencia del otrora Frente de las FARC-EP “Acacio Medina”, creado en 2007, en el marco de la IX Conferencia Guerrillera, y su alto valor en minería ilícita además del resto de economías criminales.

Gráfico 14
Presencia de economías ilícitas y actores criminales en la frontera entre Colombia y Venezuela

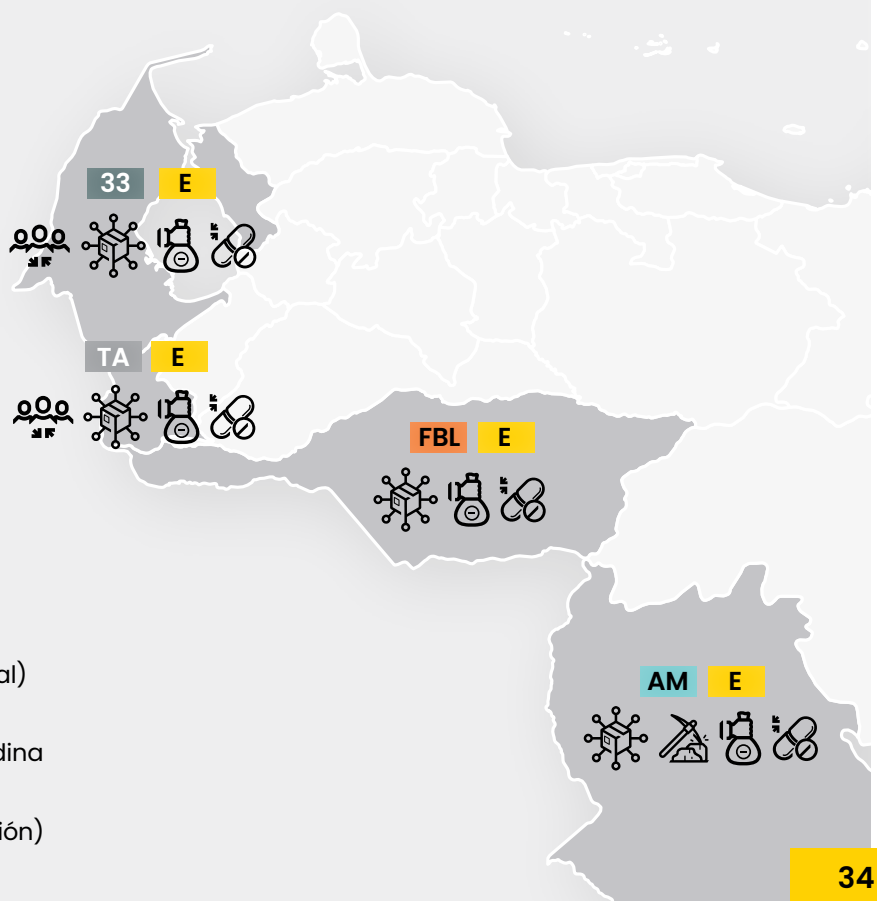
Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en Insight Crime.

ECONOMÍAS CRIMINALES

-  Tráfico de drogas
-  Extorsión
-  Minería ilegal
-  Contrabando
-  Tráfico de inmigrantes

ACTORES CRIMINALES

- E** ELN (Ejército de Liberación Nacional)
- 33** Ex - FARC Mafía Frente 33
- AM** Ex - FARC Mafía Frente Acacio Medina
- TA** Tren de Aragua
- FBL** FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación)



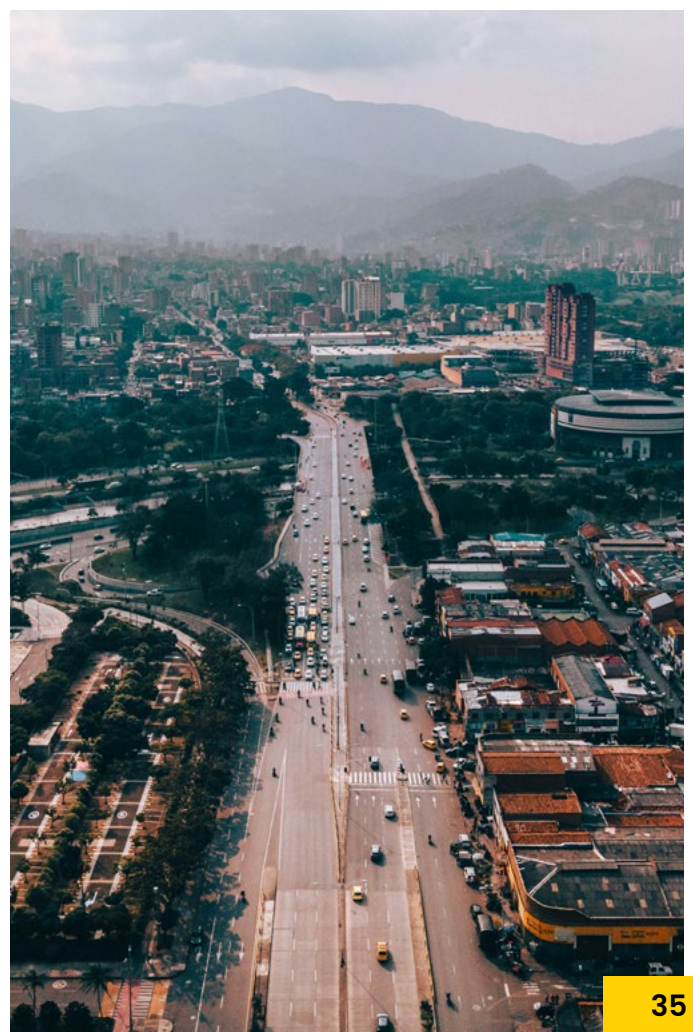
A diferencia de lo sucedido en Colombia este último año, en el que la política de negociación ha sido preeminente de parte del gobierno, en Venezuela, desde el año 2023, se ha intentado el desarrollo de grandes operativos policiales y militares con los que debilitar el crimen organizado acuciante en el país. Sin embargo, la difícil situación económica que atraviesa el país favorece, incluso más que en Colombia, la cooptación de parte de la respuesta estatal a la causa criminal, lo que dificulta y limita la eficacia de los dispositivos de desmantelamiento de dicha delincuencia. Lo anterior, con independencia de que en los últimos meses se hayan dado operativos y muestras de una “mano dura” contra bandas urbanas, redes de narcotráfico y organizaciones delictivas ubicadas en establecimientos carcelarios.

Sea como fuere, los datos y las tendencias recogidas por la mayor parte de fuentes reconoce **una reducción importante en lo que respecta al comportamiento homicida**, de manera tal que si en 2016, la tasa de muertes violentas por 100.000 habitantes era de 56.62, en 2024 se sitúa en la mitad, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (2023) si bien, las fuentes gubernamentales llegan, inclusive, a reducir a un solo dígito este indicador. No obstante, esta tendencia de normalización y estabilización constante de los últimos años también ha llegado a Caracas. Así, la capital presenta unos registros poco confiables, dada la opacidad del gobierno, que sería inferior a 10 muertes cada 100.000 habitantes, lo que supone diez veces menos, por ejemplo, que las estimaciones de World Population Review para 2024.

Llegados a este punto, se observan dinámicas más similares que diferentes en los escenarios de violencia e (in)seguridad que presentan Colombia y Venezuela. **Ambos países se han estabilizado en lo que a niveles nacionales de delincuencia organizada o violencia homicida se trata.** Colombia presenta ciertos visos de inmovilismo, que invitan a cuestionar el dividendo de paz con las FARC-EP, mientras que Venezuela, a pesar de lo cuestionable de sus datos, pareciera que se ha moderado en algunos registros, en parte, a la atenuación de su dramática situación social y económica. Ya desde una mirada de impronta más puramente subnacional, la complejidad de los escenarios exhibe ciertos enclaves hacia los que mirar con preocupación. Para el caso de Colombia, buena parte de los enclaves con mayores niveles de criminalidad organizada vienen siendo los mismos desde la última década. De hecho, es allí donde se concentran algunas violencias particulares, como las asociadas a la población excombatiente desmovilizada, los líderes sociales o la extorsión y el contrabando. Una violencia periférica que, igualmente convive con otras expresiones de violencia urbana, mayormente

organizadas en torno al tráfico de drogas, que deja en cuestionamiento el alcance real de transformación que, al efecto, han supuesto las tres últimas iniciativas gubernamentales de paz -paz territorial, paz con legalidad y paz total.

Derivado de lo anterior, un importante foco de afectación transnacional se encuentra en la región fronteriza colombo-venezolana, en la que estructuras armadas y criminales colombianas, muchas de ellas, provenientes de las violencias recicladas, fortalecidas tras el Acuerdo de Paz y la pandemia, se suman a otras venezolanas, como el Tren de Aragua. Todo el corredor fronterizo, que especialmente integra los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, y los estados de El Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, termina por erigirse en una gobernanza criminal, con un cruce de soberanías compartidas y/o yuxtapuestas, en la que el olvido institucional, la precariedad estructural y la consolidación de economías ilícitas alimentan un particular trinomio de violencia e inseguridad, con consecuencias que igualmente tienen su impacto y afectación sobre otras partes del continente.



REFERENCIAS

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (2024).

ARN en cifras. Corte junio 2024. <https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/ARN-en-cifras.aspx> Consultado el 1 de agosto de 2024.

Badillo, R- y Trejos, L. (2023). Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como grupo armado politizado: un nuevo paradigma del crimen organizado. *Revista Científica General José María Córdova*, 21(42), 327-351.

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2024). Ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Ciudad de México.

González, F. (2021). ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferencia. Bogotá: CINEP.

Indepaz (2024) Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes del Acuerdo asesinados. Bogotá.

InSight Crime (2023) Las FBL: auge y caída de una guerrilla híbrida. <https://insightcrime.org/es/investigaciones/fbl-auge-caida-guerrilla-hibrida/> Consultado el 1 de agosto de 2023.

García Pinzón, V. y Trejos, L. (2021). Las tramas del conflicto prolongado en la frontera colombo-venezolana: Un análisis de las violencias y actores armados en el contexto del posacuerdo de paz. *Colombia Internacional*, 105: 89-115.

Observatorio Venezolano de Violencia (2023). Informe anual de violencia. <https://observatoriodeviolencia.org.ve/informes/informe-anual-de-violencia/> Consultado el 1 de agosto de 2023.

Policía Nacional de Colombia (2024). Estadística delictiva. <https://www.policia.gov.co/estadistica-delictiva> Consultado el 1 de agosto de 2024

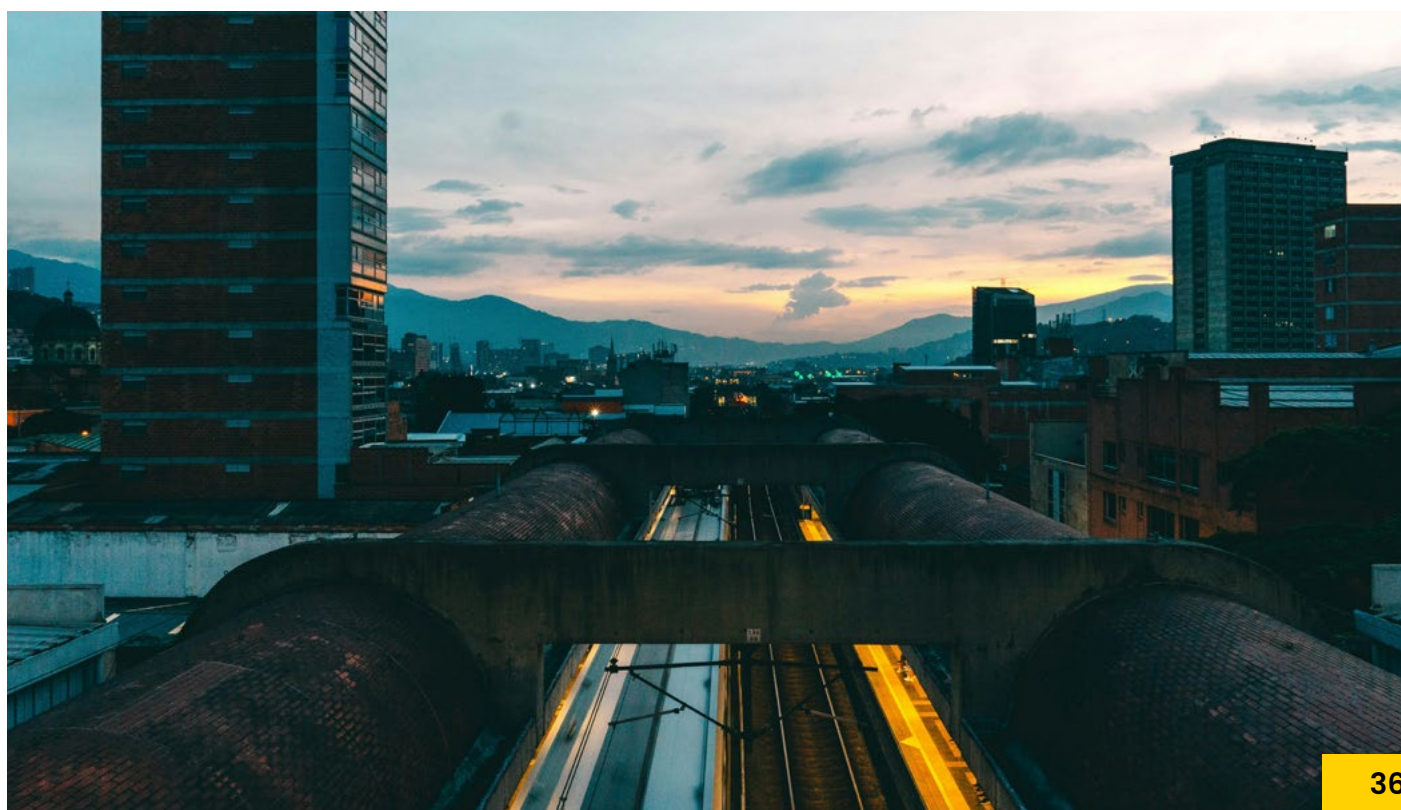
Ríos, J. (2022). Where is Territorial Peace? Violence, Drug Trafficking and Territory: The Killings of Former Guerrilla Combatants and Social Leaders in Colombia (2016-2021). *Partecipazione e Conflitto*, 15(1), 290-314.

Ríos, J. (2024). Las polisemias de la paz en Colombia: paz territorial, paz con legalidad y paz total. *Revista de Estudios Políticos*, 203, 223-250.

Ríos, J. (2024b). Elites y discurso político sobre la paz total en Colombia. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*. En prensa. <https://doi.org/10.1080/08263663.2024.2360885>

Gómez, D. y Ríos, J. (2023). Armed Violence in the Llanos Orientales Region Following the Signing of the Peace Agreement with the FARC-EP in Colombia. *Journal of Strategic Security*, 15(3), 62-79.

UNODC (2024). Monitoreo de cultivos de coca. Colombia 2023. Viena.





Perú, Ecuador y Bolivia

2.4 Perú, Ecuador y Bolivia

Instituto de Criminología y Estudios sobre la violencia

2.4.1.

Situación política general

La región andina ha experimentado cambios relevantes en las tendencias sobre el delito y la violencia criminal en los últimos años, con tendencias al incremento relevante de homicidios, y de las economías ilegales. Esto sucede en un

contexto de inestabilidad política en los países, procesos migratorios que han modificado la composición de la estructura social y un proceso de reacomodo económico posterior a la pandemia por COVID-19.



2.4.2. Homicidios

Los datos

La Clasificación Internacional de los Delitos con fines Estadísticos de las Naciones Unidas define el homicidio intencional como “la muerte ilegalmente infligida a una persona con la intención de causar muerte o lesiones graves” (UNODC, 2015, p.17). Naciones Unidas recolecta cifras oficiales del homicidio a nivel global (United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems – UN-CTS) (UNODC, s/f. a), las que se sistematizan en el dashboard de acceso público ‘dataUNODC- Intentional Homicides’ (UNODC, 2024a).

Se ha buscado estudiar el periodo 2013-2023. Los datos disponibles en el portal de UNODC (2024a) provienen de las fuentes oficiales de cada país. Sin embargo, la producción desactualizada o incompleta de datos, así como la información insuficiente o no disponible es un problema común en los tres países (y en algunos casos con más de una fuente del Estado que reporta datos diferentes a la cifra oficial).

- ▲ Los datos para Bolivia se reportaron por el Ministerio de Gobierno (periodo 2015-2023) (Ministerio de Gobierno de Bolivia, 2023, p.135).
- ▲ Para Ecuador los datos se reportaron por el Ministerio del Interior (hasta 2022) -se completaron los datos con la información del Ministerio del Interior y de la Policía ecuatoriana del 2023 -como describe el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2023) en su análisis sobre los homicidios en Ecuador-. Sin embargo, se constató que “existen inconsistencias entre los datos manejados entre [el Ministerio del Interior y la Policía Ecuatoriana] que, si bien son menores, resaltan la necesidad de estandarizar en un solo sistema y metodología el registro de delitos, incluyendo los homicidios intencionales” (OECD, 2024, p. 7).
- ▲ Para Perú se coleccionaron los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), gestionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática hasta el 2021 (INEI, 2023). Sin embargo, es necesario señalar que hay información policial actualizada al 2023 sobre homicidios dolosos, que muestra una tendencia diferente a la del CEIC (PNP, 2024).



Las tendencias

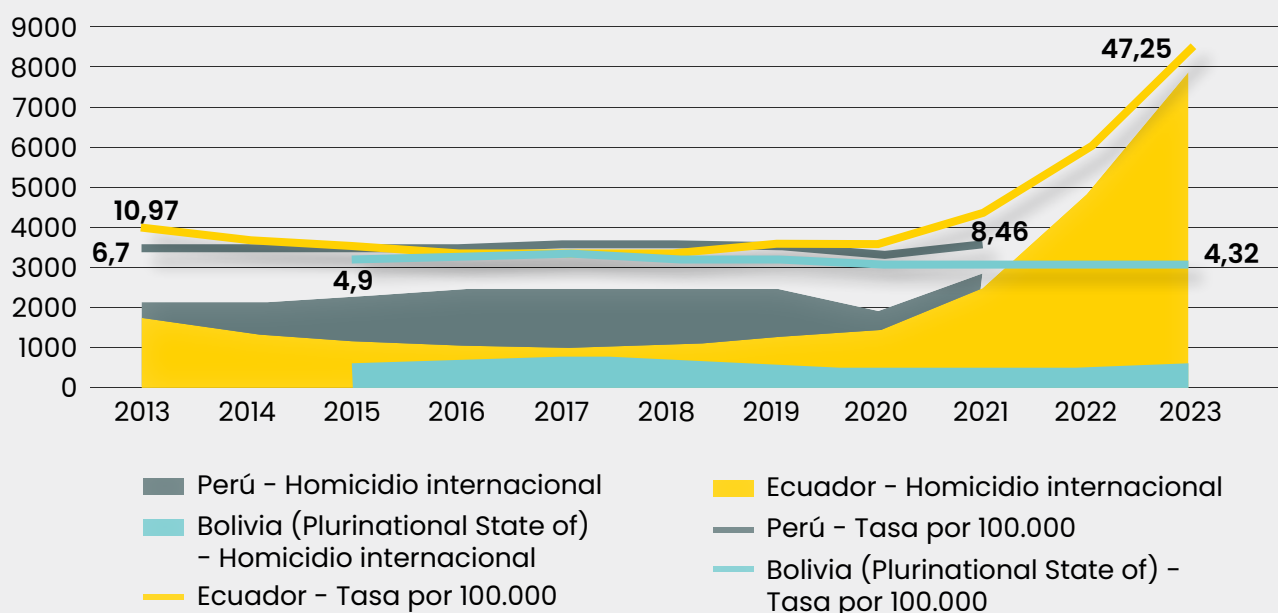
En base a los datos disponibles para el periodo 2013-2023, se describen tres ojivas. **Las ojivas de Ecuador y Perú muestran incrementos de absolutos y tasa, y en el caso de Bolivia, se muestra un descenso.**

- ▲ Bolivia reporta un incremento en su conteo de homicidios hasta el año 2017 (año en el que su tasa de homicidios por 100 000 habitantes fue de 6,53). Para el periodo 2018-2023, la tasa se ha mantenido estable entre 3,46 y 4,95 homicidios por 100 000 habitantes (o 418 a 574 víctimas de homicidio anual).
- ▲ Ecuador reporta una tendencia decreciente hasta el 2016 (con una tasa de 5,83 homicidios por 100 000 habitantes), año desde el cuál se ha mantenido una tendencia al alza, que se radicalizó a partir del 2020; desde entonces, la tasa ecuatoriana de homicidios por 100 000 habitantes ha saltado de 7,8 a 14,02, a 26,99 a 47,25 en el 2023.
- ▲ Perú ha mostrado una tendencia creciente del 2013 (con una tasa de 6,7 por 100 000 habitantes) al 2021 (con una tasa de 8,46 por 100 000 habitantes) que se vio interrumpida por un descenso que empezó en el 2017 y terminó en el 2020.



Gráfico 15
Conteos absolutos de homicidio y tasas por 100 000 habitantes de Bolivia, Ecuador y Perú

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en UNODC (2024a), OECO (2024)



Análisis

Hay un crecimiento radical del homicidio en Ecuador que se reporta desde final de la década pasada. Aunque en menor medida, los datos del CEIC en **Perú reportan también un incremento de la tasa** (aun cuando no se conoce la información para los años 2022 y 2023 y los datos de la Policía sugieran un incremento relevante).

Este claro **incremento en la costa del Pacífico se ha visto desde el 2020, lo que coincide con la etapa posterior al fin de la pandemia por COVID-19, a la reapertura comercial y a la tendencia creciente de las economías ilegales en la región.**

▲ Aunque es un tema que requiere estudios profundos, es necesario pensar en la hipótesis de una relación entre la migración venezolana y la migración de ciertas organizaciones criminales, que

podrían ser un factor en el aumento de tasa. Para ello es necesario analizar el total de homicidios, desagregar los datos por nacionalidad y estudiar la trama desde inicios de la década pasada.

- ▲ Es posible pensar en una **relación entre el aumento del homicidio y la concentración de estos en las ciudades de la costa del Pacífico y en zonas de presencia de economías ilegales** (sobre todo de minería ilegal).
- ▲ Esto es relevante, pues mostraría una **relación entre el crecimiento de la tasa de homicidio y el desarrollo del crimen organizado en la región.** Estos elementos y variables no parecen reducirse ni hay indicios de control, lo que sugiere que la tendencia podría mantenerse en los años siguientes.



2.4.3. Producción y comercio ilícito de cocaína

Los datos

Las Naciones Unidas recolecta datos oficiales de los Estados, en el marco del Informe Mundial de Drogas, sobre oferta y demanda de drogas (prevalencia, incautaciones, laboratorios, pureza, precios, entre otros datos) (UNODC, s/f. b). Estos datos se sistematizan en el dashboard interactivo de acceso público ‘dataUNODC- Drug Trafficking & Cultivation’ (UNODC, 2024b).

Se ha priorizado el análisis del periodo 2015-2023. Los datos disponibles en Naciones Unidas (UNODC, 2024b) para Bolivia se han sistematizado en el marco de los reportes de Monitoreo de cultivos de coca (UNODC, s/f.c); los datos peruanos del Sistema de Información de Lucha contra las drogas (DEVIDA, s/f) son reportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas en sus informes de monitoreo de indicadores de política de drogas.



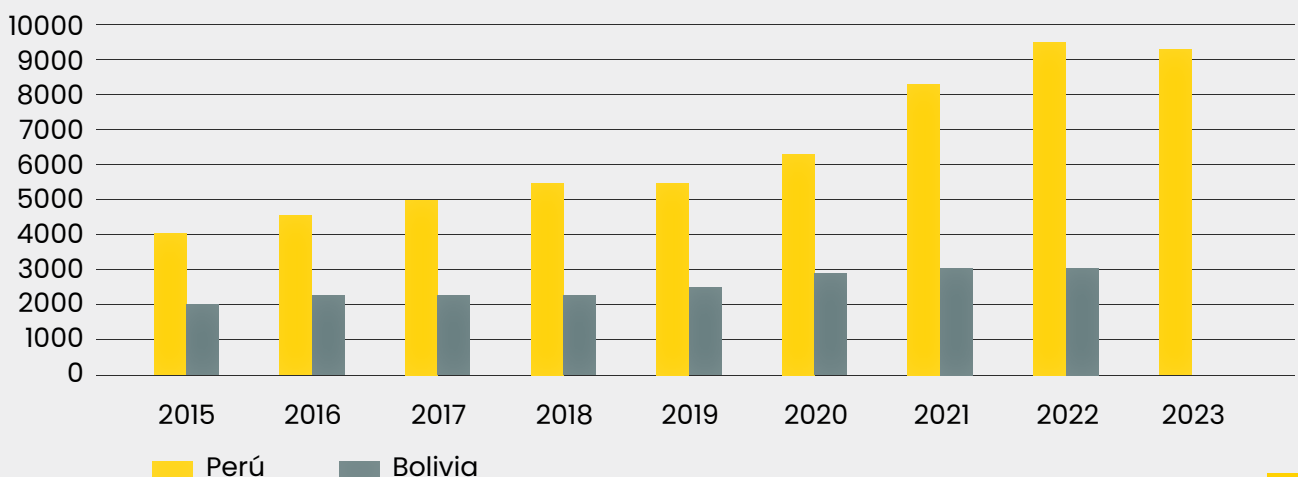
Las tendencias

Bolivia y Perú son dos de los principales productores de hoja de coca en el mundo y la región, han presentado una tendencia creciente en el periodo 2015-2023.

- En el caso boliviano, pese a no disponer de un dato oficial para el 2023, se puede ver un crecimiento estable de cerca del 50% de la superficie cultivada entre el 2015 (20 200 hectáreas) y 2022 (29,900 hectáreas) con un leve retroceso en el 2018.
- En el caso ecuatoriano, si bien se ha aseverado que las plantaciones de hoja de coca son una minoría y hace casi una década que Naciones Unidas dejó de monitorear los indicadores de producción, “Entre enero de 2019 a diciembre de 2022, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas registró la erradicación de 546,184 plantas de coca” (OECD, 2023, p.46).
- En Perú, se ha pasado de cerca de 40 000 hectáreas cultivadas en 2015 a más de 90 000 en el 2023, lo que ha significado duplicar la superficie, al igual que la capacidad productiva de hoja de coca, mayoritariamente destinada al mercado ilícito de la cocaína.

Gráfico 16
Hectáreas cultivadas con hoja de coca en producción en Bolivia y Perú (2015–2023)

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en UNODC (2024a), DEVIDA (2024)



Análisis

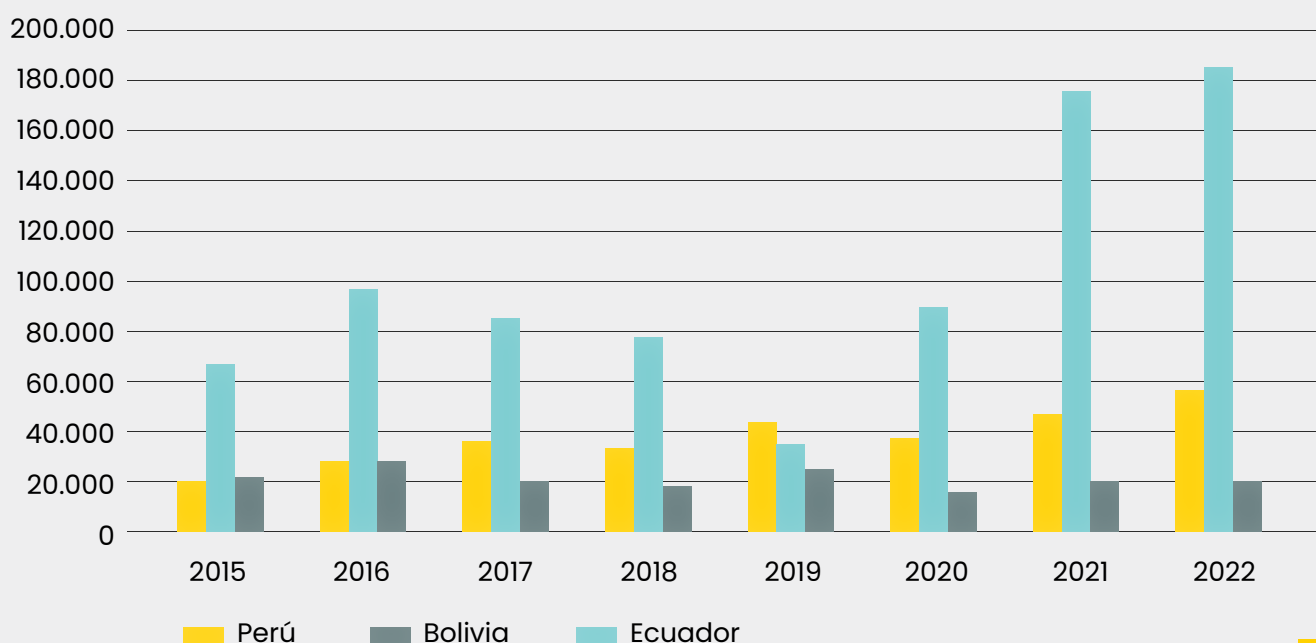
Los datos de incautación son relevantes, pues durante el periodo analizado, se han incautado más de 1200 toneladas de cocaína en los tres países: “La incautación de una sustancia es una acción legal realizada por un organismo encargado de hacer cumplir la ley en la que se toma el control legal de una sustancia controlada” (UNODC 2024b, p.1).

- Si se considera el primer y último año del periodo analizado, **Bolivia muestra una tendencia ligeramente decreciente** – con una incautación total de 170 toneladas (170 782 kg). Perú y **Ecuador muestran una tendencia creciente**: en total se incautó en Perú 300 toneladas (301 868 kg) y en Ecuador 813 toneladas (813 257 kg).
- En promedio, Bolivia incautó 21 toneladas anuales, Perú, 37 y Ecuador 101 toneladas. Salvo en el 2019, que Perú fue el país con un mayor volumen de incautación de cocaína, **Ecuador ha encabezado el volumen de incautaciones, superando holgadamente a Perú y a Bolivia**. Si bien Bolivia incautó un mayor volumen de cocaína que Perú en el 2015 y 2016, esto no vuelve a suceder en el resto del periodo bajo análisis.

- La tendencia creciente de cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína en la región** es clara si comparamos la década anterior con los últimos años. Esto es claro en los países productores como Perú y Bolivia (además de la situación de Colombia). **Esto sugiere la presencia sin retroceso de una economía de la cocaína.**
- En el caso de **Ecuador**, con una producción primaria pequeña, la situación **es la de un punto clave en la ruta hacia el hemisferio norte**. “La principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como la debilidad en los controles integrados de frontera” (OECD, 2023, p.27). Esto “ha provocado una ola de violencia letal, vinculada a grupos delictivos locales y transnacionales, debida a la cual entre 2019 y 2022 se quintuplicaron las incautaciones de cocaína y las tasas de homicidio” (UNODC, 2024c, p.13). **Los puertos y rutas ecuatorianas son de los principales puntos de salida de la cocaína peruana** (UNODC, 2023).

Gráfico 17
Kilogramos incautados de cocaína en Bolivia, Ecuador y Perú (2015–2022)

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en UNODC (2024b)



2.4.4. Tráfico ilícito de madera

Los datos

La tala ilegal es un fenómeno delictivo que implica la recolección, el procesamiento, el transporte, la compra o la venta de madera en contravención de las leyes nacionales e internacionales (Mecanismo de la Unión Europea para la aplicación de leyes, la gobernanza y el comercio forestales, 2019). Son ejemplo de esto la tala ilegal en un área protegida y el comercio de ese producto de madera, así como otras “actividades ilícitas como el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la corrupción de funcionarios gubernamentales y la evasión fiscal [que] pueden generar enormes pérdidas fiscales para los gobiernos” (FAO, s/f).

Sin embargo, “los datos y análisis detallados sobre la tala ilegal [...] no se han rastreado sistemáticamente ni se han informado a nivel mundial” (Banco Mundial, 2019, p.10). el Real Instituto de Asuntos Internacionales del Reino Unido (Chatham House), proporciona estimaciones globales sobre la tala y el comercio ilegal de madera. En su informe más reciente, se muestran datos preocupantes de 2018, que indican que entre el 8% y el 29% del volumen total de la tala y el comercio de madera es ilegal (Hoare y Kanashiro Uehara, 2022). Análogamente,

la estimación superior de Chatham House coincide con la estimación del Basel Institute of Governance (2021, p.3): “hasta el 30 por ciento de la extracción mundial de madera es ilegal, valorada en hasta 150 mil millones de dólares por año”.

Bolivia (INE, 2024) y Perú (SERFOR, 2021; 2022; 2023; 2024) reportan oficialmente datos de madera extraída para el periodo estudiado. De manera que es posible estimar el volumen de madera ilegal. Se dispone de un índice actualizado de tala y comercio ilegal de madera en el Perú (OSINFOR, 2024). De modo que la estimación del porcentaje de ilegalidad de la madera extraída en Bolivia se realizará en función al 29% propuesto por Chatham House (Hoare, et al., 2022, p. 20) y en el caso peruano, el porcentaje de tala y comercio ilegal de madera en el Perú se estimará en función a las tres actualizaciones disponibles del índice oficial para el 2017 (37.1%), 2019 (31.5%), y 2021(20.7%) de acuerdo a los años correspondientes (OSINFOR, 2024, p. 33). Sin embargo, para el caso ecuatoriano no se han encontrado datos oficiales sobre el volumen en metros cúbicos de madera rolliza extraída para el periodo 2015-2023,

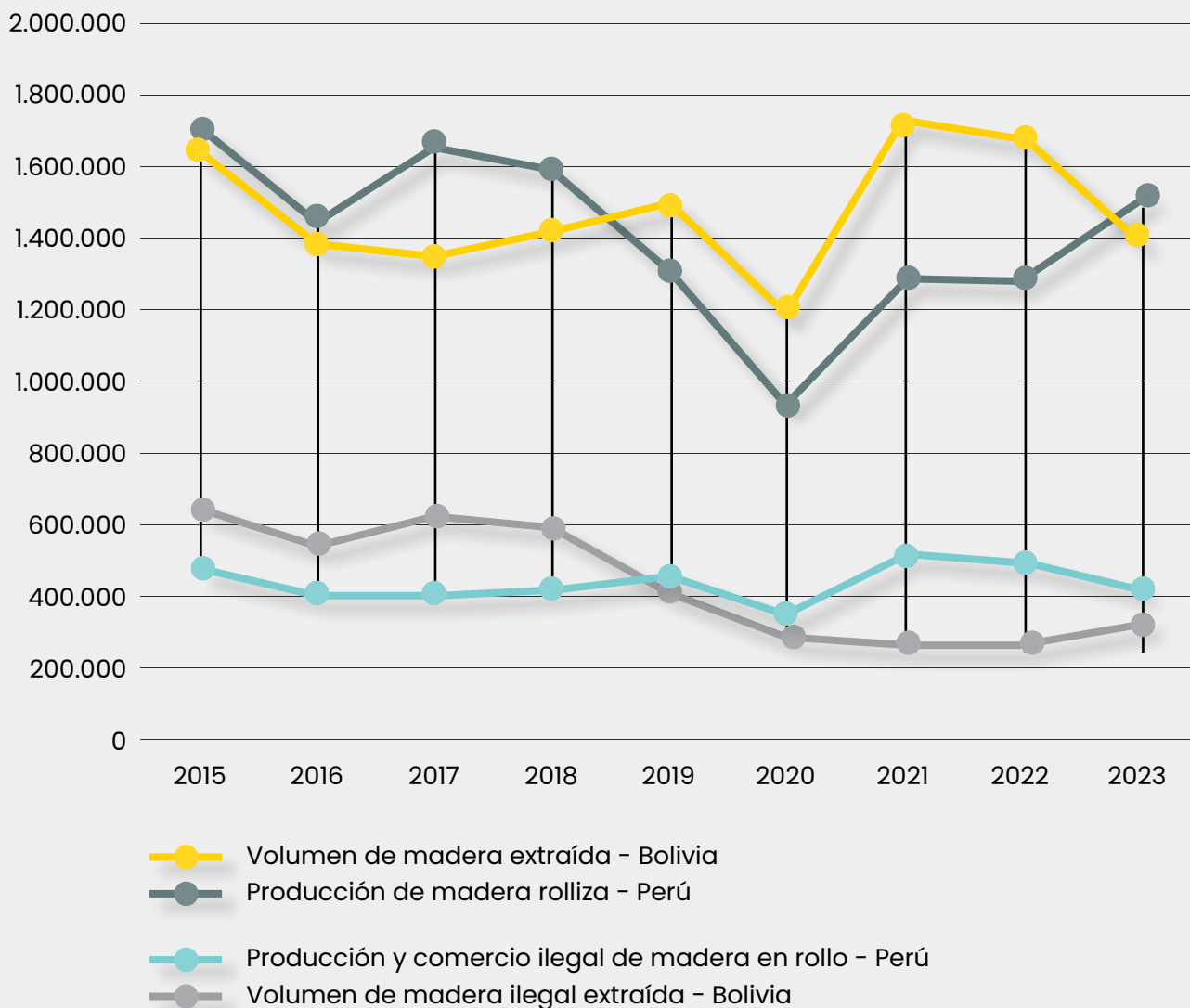


Las tendencias

Los reportes oficiales de Perú y Bolivia dan cuenta de una extracción de 12,721,128 m³, y 13,284,933 m³, respectivamente. Si bien el volumen de extracción total de madera es mayor en Bolivia, se reporta para Perú un total de 3,923,753 m³ de madera ilegalmente extraída y 3,852,630 m³ de madera ilegal para el caso boliviano.

En el caso de ambos países, las tendencias se reducen 10.2% y 14.7, respectivamente para el periodo completo. No obstante, ambas presentan patrones similares en el periodo 2015-2020 (donde ambas caen) y el periodo 2020-2023 (donde ambas aumentan). El año 2020 fue el menor año de producción en ambos casos.

Gráfico 18
Evolución de la estimación de extracción total e ilegal de metros cúbicos de madera en Bolivia y Perú



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en SERFOR (2021; 2022; 2023; 2024), OSINFOR (2024), INE (2024), y Hoare, et al. (2022).

2.4.5.

Minería ilegal de oro

Los datos

Si bien no se encuentra disponible la información oficial de Ecuador, hay informes que señalan que hay diversas zonas con una alta concentración de tala ilegal. Así, WWF-Ecuador señala en un estudio de dos zonas, la extracción ilegal de 207.996 metros cúbicos -la Zona 1 (**Puerto Soldado Monge**) en la provincia de Morona Santiago con 134.145, la Zona 2, conformada por las poblaciones indígenas Waorani ubicadas entre Napo y Pastaza con 20.165 metros cúbicos (WWF- Ecuador, 2022, p. 58). Asimismo, “Según el Ministerio de Ambiente, 1.973 metros cúbicos de balsa se decomisaron el año pasado, es decir, 186% más en comparación con 2019, cuando se incautaron 689 metros cúbicos de este tipo de madera” (Coba, noviembre de 2023)

Por otro lado, tanto el estudio de WWF -que señala en las zonas 1 y 2 se encontró el ingreso de altas cantidades de madera de balsa proveniente de Perú y Colombia (WWF- Ecuador, 2022, p. 58)-, como otros estudios, señalan que, “sin importar que se extraiga de Colombia o de Ecuador, la madera se transporta por vía fluvial o terrestre hasta el vecino Perú. Allí puede mezclarse con cargamentos legales” (Jones y Ramírez, junio de 2021).

Análisis

- ▶ Si bien hay una **tendencia con reducciones porcentuales de la estimación de madera ilegal en Perú y Bolivia**, no hay un dato oficial ni cálculos precisos para determinar el tamaño de esta actividad y mercado. Sin embargo, incluso con el descenso porcentual, se trata de **cerca del 20% de ilegalidad**, que es un porcentaje considerablemente alto.
- ▶ Las tendencias de tala ilegal deben ser estudiadas en comparaciones entre países, no solo por el posible efecto globo, sino por las rutas que la madera sigue para su comercialización internacional. Así, existen datos cualitativos que señalan que **Perú se está convirtiendo en un hub para el lavado de madera proveniente de Ecuador**.
- ▶ Asimismo, es importante considerar la relación entre las dinámicas de extracción y las rutas de la madera ilegal, respecto a las economías de la producción y comercio de cocaína y minerales ilegales.

La minería ilegal es un fenómeno extendido en los países amazónicos y andinos. Si bien hay dificultades para medir este fenómeno, un referente empírico cercano es la medición de contraste entre la unidad de oro (onzas troy, kg, o Toneladas Métricas Finas de oro refinado o de oro concentrado) resultante de procesos minero-metalúrgicos de beneficio y refinamiento reportado formalmente, respecto al reporte de exportaciones.

Al ser información basada en el registro administrativo de actores en contacto con el sistema minero formal, el volumen de extracción de oro y el volumen de oro exportado reflejan únicamente lo que ocurre en el sistema formal. Al respecto, un modelo de estimación empleado por OEA (2021a; 2021b) establece que la brecha amplia entre ambas magnitudes se puede entender como producto de la minería ilegal, mientras que una brecha negativa implicaría que el oro extraído se exporta ilegalmente por fuera del circuito minero formal (OEA, 2021a). Así, para estimar el tamaño de la minería ilegal se procesó información oficial (en kilogramos) de extracción de oro y de exportación de oro de Bolivia, Ecuador y Perú:

- ▶ Extracción de oro. se obtuvo información de fuente oficial sobre onzas troy y gramos extraídos en Perú (BCRPData, s/f; MINEM 2024a), y kilogramos extraídos en Bolivia (MMM, 2021; 2022; 2023; 2024). Ecuador solo reporta formalmente la ‘Contribución del Oro a la Tasa de Crecimiento del PBI’ (Banco Central del Ecuador, 2024) y el tamaño de la recaudación tributaria de la minería formal (Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, 2022). No se ha podido encontrar datos oficiales sistematizados relativos al volumen de oro extraído en territorio ecuatoriano -empleamos datos de fuente secundaria (web de Ojo Público) descrita en Toneladas Métricas Finas-.
- ▶ Exportación de oro. La base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas registra global y mensualmente más del 99% del comercio mundial de mercancías en cerca de 200 países, por producto y socio comercial (Naciones Unidas, 2022). Luego de contrastar los datos de la categoría 7108 de Comtrade (Oro, incluido el oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo), con aquellos oficialmente reportados, se constató que las fuentes oficiales de Bolivia, Ecuador y Perú reportan volúmenes de exportación disímiles en los dos primeros casos y radicalmente disímiles respecto del caso peruano.

En la tabla a continuación se pueden visualizar los datos disponibles en fuente abierta. No es difícil notar que los datos de COMTRADE coinciden cada vez menos con los reportes oficiales. Mientras que Ecuador produjo 91,910 kilogramos de oro en todo el periodo,

Bolivia produjo 293,100, y Perú, 1,102,656 kilogramos. De igual forma, Ecuador exportó 104,908 kilogramos de oro en todo el periodo, Bolivia exportó 296,630, y Perú 1,480,264 kilogramos.

Tabla 1
Datos de producción y exportación aurífera en tres países de la región

	Fuente	Categoría y Unidad de medida	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bolivia	Naciones Unidas - COMTRADE	Exportaciones de Oro (kg)	20,702	19,932	28,745	31,855	38,982	22,605	44,404	64,434	44,626
	Instituto Nacional de Estadística	Exportaciones de Oro (kg)	20,04	19,32	26,57	29,45	39,09	23,51	47,57	52,25	40,83
	Ministerio de Minería y Metalurgia	Producción de Oro (kg)	-	21,9	28,7	31,6	42	23,2	45,7	53,4	46,6
	Estimación MMM-INE	Volumen de oro exportado no explicado (kg)	-	-2,58	-2,13	-2,15	-2,91	310	1,87	-1,15	-5,77
Ecuador	Naciones Unidas - COMTRADE	Exportaciones de Oro (kg)	20,801	7,54	5,093	6,511	7,913	8,092	11,718	19,216	-
	Banco Central de Ecuador	Exportaciones de Oro (kg)	20,801	7,54	5,094	5,616	7,913	8,093	11,719	17,707	20,425
	OJO PUBLICO	Producción de Oro (kg)	20,76	7,68	4,37	4,07	4,46	7,38	10,97	14,99	17,23
	Estimación BCE-Ojo Público	Volumen de oro exportado no explicado (kg)	41	-140	724	1,546	3,453	713	749	2,717	3,195
Perú	Naciones Unidas - COMTRADE	Exportaciones de Oro (kg)	323,516	457,216	504,101	548,821	395,438	348,421	423,52	405,128	-
	Banco Central de Reserva	Exportaciones de Oro (kg)	162,84	168,302	186,086	184,646	174,06	126,065	159,534	160,009	158,722
	Ministerio de Energía y Minas	Producción de Oro (kg)	146,823	153,006	151,964	140,211	128,413	88,054	97,493	96,966	99,726
	Estimación MINEM-BCR	Volumen de oro exportado no explicado (kg)	16,017	15,297	34,122	44,435	45,647	38,011	62,041	63,043	58,996

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en MINEM (2024a), BCRPData (s/f), Ojo Público () BCE (2024), MMM (2021; 2022; 2023; 2024), INE (s/f).

Las tendencias

Las ojivas representan la diferencia entre lo extraído y lo exportado por cada país bajo estudio, realizadas a partir de los datos descritos. Los resultados se expresan en tres líneas evolutivas, una con una mayor acumulación (Perú), y son líneas con menores cantidades (Ecuador y Bolivia):

- El caso boliviano, solamente en el 2020 y 2021 se 2,180 kilogramos de oro exportado que no fue reportado como extraído. En todos los demás años del periodo analizado, Bolivia reporta hasta 16,690 kilogramos de oro extraído que no fue exportado a través de los mecanismos regulares. Hasta el 2022 no se reportaba más de 3000 kilogramos anuales de oro extraído no exportado. Sin embargo, solo en el 2023, se registran 5770 kilogramos de oro extraído que no se exportó por el conducto legal.
- Exceptuando el 2016, Ecuador reporta la exportación de un total de 13,138 kilogramos de oro cuya extracción minera no fue reportada oficialmente. La tendencia del periodo es creciente, aunque en dos etapas: creció de 2017 a 2019, cayó en el 2020, año desde que la tendencia no cesa su expansión.
- La línea evolutiva del caso peruano refleja la enorme cantidad de kilogramos de oro exportados fuera del país que no fueron reportados como extraídos oficialmente en el territorio peruano

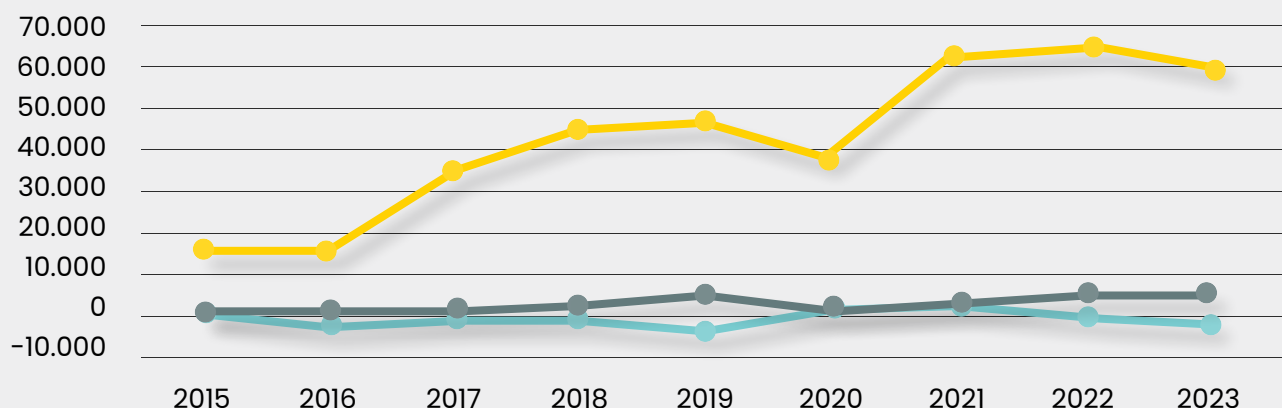
(377,609 kilogramos en todo el periodo bajo estudio). La tendencia claramente creciente en el periodo analizado se interrumpió ligeramente en el 2020 para retomar impulso hasta la actualidad.

Analisis

- Hay una **tendencia general de aumento de la minería ilegal de oro (y otros minerales)**, si se compara los datos de 2015 respecto a los de 2023. Este aumento es claro en Ecuador y Perú, y es posible que los datos expuestos sean considerablemente limitados y conservadores respecto de la realidad.
- Hay evidencia clara de la **participación de grupos armados y del crimen organizado en la extracción de oro y en la cadena de suministro** de este mineral en los países de la región. Esto implica zonas con una alta presencia del crimen organizado y una severa ausencia del Estado que han producido homicidios, extorsiones y delitos patrimoniales graves.
- La situación de expansión de la minería ilegal marcha en una **lógica siminar al crecimiento de otras economías ilegales** (como la de la cocaína y el contrabando, por ejemplo), que parecen manejar rutas y actores similares en la cadena de valor.

Gráfico 19
Estimación anual de brecha entre kilogramos de oro exportado y oro extraído en tres países bajo estudio (2015-2023).

Fuente: Prosecur Research, 2025 basado en MINEM (2024a), BCRPData (s/f), Ojo Público (2024) BCE (2024), MMM (2021; 2022; 2023; 2024), INE (s/f).



2.4.6. Tendencias y alertas

El crecimiento general de las economías ilegales

Aun con las limitaciones de información, existe información suficiente para pensar en **un incremento (tanto del tamaño como de las zonas de influencia de las economías ilegales en conjunto (producción y comercio de cocaína, extracción y comercio ilegal de madera, minería ilegal, entre otras economías como las del contrabando)** si se compara 2015 respecto al 2023. Este crecimiento regional puede estar asociado, al menos, a tres factores que representaron un cambio relevante en ese periodo: 1) la paralización económica generada por la pandemia por COVID-19, cuya consecuente crisis afectó también a las economías ilegales, que han tenido que intensificar sus dinámicas en los años posteriores. 2) La presencia de una gran cantidad de población con necesidad de ocupación por las crisis económicas –lo que incluye a los millones de personas provenientes de Venezuela que se asentaron en los países de estudio en el periodo estudiado-. 3) La demanda internacional creciente de commodities ilegales (como la cocaína).

La presencia de organizaciones criminales

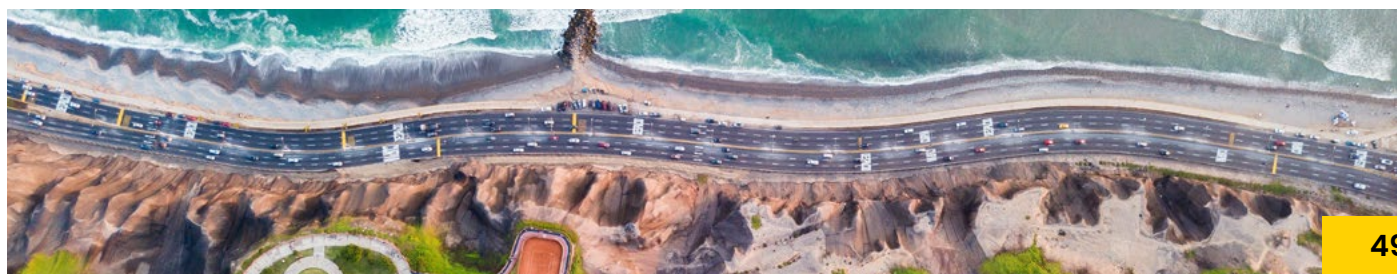
La tendencia es evidenciar tanto por la información policial, datos de investigación cualitativa, y análisis de la composición de actores, la **presencia creciente de organizaciones criminales en varios puntos de la cadena de valor de las economías ilegales en los tres países, sobre todo en Perú y Ecuador.** Organizaciones locales, internacionales y organizaciones compuestas por ciudadanos de varios países (con una amplia y mediática presencia de organizaciones con ciudadanos venezolanos), que genera la hipótesis coherente de una migración que lleva consigo también crimen organizado. Sin embargo, es razonable pensar que estas organizaciones no son la causa del fenómeno, sino el síntoma de un mercado ilegal creciente, una demanda internacional que aumenta, y Estados sin capacidad de control.

La configuración de un escenario regional

La información disponible sugiere que **se está configurando un escenario regional en donde hay ejes de extracción y producción de materias primas ilegales, y ejes de transporte.** En este escenario **Bolivia parece mantener la tendencia de ser un país con más intensidad en la extracción y producción,** pero que, por su propia ubicación geográfica, requiere sacar los productos, sobre todo hacia Perú (aunque en otros casos es un receptor y movilizador de productos hacia Brasil). **Perú en cambio, produce materias primas ilegales y sus puertos son un canal clave del transporte internacional,** generando un hub relevante para el crimen organizado. Un escenario relevante es **Ecuador,** pues si bien no tienen una producción primaria tan radicalmente grande como la de Perú y Bolivia, su ubicación geográfica (y su cercanía a la ruta Venezuela-Colombia) han generado en el país una zona de tensiones relevantes, presencia del crimen organizado, y **disputas por el control de comercio ilegal de tránsito, importaciones y exportaciones.**

El aumento de la tasa de homicidio

Todo lo anterior se indica que **la creciente tasa de homicidio, sobre todo en Ecuador, que es un síntoma claro del desarrollo del crimen organizado.** Este es un tema clave, que representa evidentemente una situación en crecimiento y desborde de la violencia. Sin embargo, es importante entender, que esta es una consecuencia (y no una causa) de una estructura de la violencia y la economía que está cambiando y que requiere una atención inmediata del Estado, pues todo sugiere que se va a mantener. Esto requiere entender las áreas de concentración de la violencia, su relación con las rutas de las cadenas de suministro ilegales y la presencia del crimen organizado.



■ REFERENCIAS

Banco Central del Ecuador (2024). Boletín del Sector Minero Cuarto Trimestre 2023. Subgerencia de Programación y Regulación, Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica, BCE. Recuperado de: <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ReporteMinero042024.pdf>

Banco Mundial (2019). Illegal logging, fishing, and wildlife trade: the costs and how to combat it. Banco Mundial, Global Wildlife Program. Recuperado de: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/482771571323560234-0120022019/original/WBGReport1017Digital.pdf>

Banco Mundial (abril de 2024a). Bolivia: panorama general. El Banco Mundial en Bolivia. BM. Recuperado de: <https://www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview#1>

Banco Mundial (abril de 2024b). Ecuador: panorama general. El Banco Mundial en Ecuador. BM. Recuperado de: <https://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview#1>

Banco Mundial (abril de 2024c). Perú: panorama general. El Banco Mundial en el Perú. BM. Recuperado de: <https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview>

Basel Institute of Governance (2021). Wildlife crime – a learning resource. PART 3: Forest crime and the illegal timber trade. Green Corruption team. Recuperado de: <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2021-05/Part%203%20Timber%20trafficking%2025%20May.pdf>

BBC (diciembre de 2023). El tribunal Constitucional de Bolivia anula la reelección indefinida e inhabilita a Evo Morales para las elecciones de 2025. BBC News Mundo. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/articles/czdljngwq5o>

BCRPData (s/f). Mineros – Oro – Volumen (Miles de Onzas Troy). Exportaciones de productos tradicionales (volumen). Banco Central de Reserva del Perú. Gerencia Central de Estudios Económicos. Periodo enero 2001- diciembre 2021. Recuperado de: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01526BM/html/1985-1/2024-12/>

CEPALSTAT (2024). Ecuador: perfil nacional social-demográfico. Recuperado de: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/perfil-nacional.html?theme=1&country=ecu&lang=es>

Coba, G. (noviembre de 2023). Las mafias de la balsa amenazan a la Amazonía ecuatoriana. Economía. Primicias, el periodismo comprometido. Recuperado de: <https://www.primicias.ec/noticias/economia/tala-ilegal-madera-amazonia-balsa/>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (julio de 2024). CIDH condena intento de golpe de Estado en Bolivia. Prensa de la CIDH. 03 de julio de 2024. Recuperado de: <https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/156.asp>

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA (2024). Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2023. DEVIDA, Lima. 147 pp. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6447242/5639121-superficie-cultivada-con-arbusto-de-hoja-de-coca-monitoreada-en-2023.pdf>

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (s/f). Sistema de Información de Lucha contra las Drogas. SISCOD, DEVIDA, Lima. Recuperado de: <https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/inicio>

Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas – CPI (2021). Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021–2025. CPI, La Paz. Recuperado de: <https://vds.gob.bo/documents/transparencia/estrategia/ESPESTRATEGIA.pdf>

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC (2019). Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. CONASEC, Lima. Recuperado de: <https://www.policia.gob.pe/dirseciu/documentos/Plan%20Nacional%20de%20Seguridad%20Ciudadana%202019-2023.pdf>

Embajada de los Estados Unidos de América (2024). Informe sobre Derechos Humanos 2023: Bolivia. US Embassy. Recuperado de: <https://bo.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/16/2024/04/2023-HRR-BOLIVIA-SPANISH.pdf>

Gootenberg, P. (2003). Entre la coca y la cocaína. Un siglo o más de las paradojas de la droga entre Estados Unidos y el Perú, 1860-1980. Instituto de Estudios Peruanos.

Hoare, A. y Kanashiro Uehara, T. (2022). Establishing fair and sustainable forest economies: Lessons learned from tackling illegal logging. Research Paper, London: Royal Institute of International Affairs – Chatham House. Recuperado de: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2022-09/2022-09-28-fair-sustainable-forest-economies-hoare-kanashiro-uehara_0.pdf

Human Rights Watch (2024). Bolivia: eventos de 2022. HRW. Recuperado de: <https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/bolivia>

Human Rights Watch (mayo de 2024). Ecuador: Abusos luego del anuncio de un ‘conflicto armado’. HRW. Recuperado de: <https://www.hrw.org/es/news/2024/05/22/ecuador-abusos-luego-del-anuncio-de-un-conflicto-armado>

Human Rights Watch. (2020). La justicia como arma: Persecución política en Bolivia. HRW. Recuperado de: <https://www.hrw.org/es/report/2020/09/11/la-justicia-como-arma/persecucion-politica-en-bolivia>

INFOBAE (julio de 2024). Noboa insiste con nuevo estado de excepción en Ecuador tras ser invalidados dos anteriores. Newsroom INFOBAE. Recuperado de: <https://www.infobae.com/america/agencias/2024/07/02/noboa-insiste-con-nuevo-estado-de-excepcion-en-ecuador-tras-ser-invalidados-dos-antiguos/>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (2013). Principales resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (CNPV 2012). Estado Plurinacional de Bolivia. <https://ibce.org.bo/images/publicaciones/Resultados-Censo-2012.pdf>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (2014) Bolivia: población estimada y proyectada por departamento, según años calendario, 2000-2025. INE, Proyecciones de Población: Revisión 2014. Recuperado de: <https://nube.ine.gob.bo/index.php/s/JpQpBknARAJX8Rt/download>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (2024). Cuadros Estadísticos Anuales. Archivo: Bolivia – Volumen de madera extraída, según especie 2006-2022. Recuperado de: <https://www.ine.gob.bo/index.php/medio-ambiente/recursos-forestales-cuadros-estadisticos/>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (s/f). Cuadros Estadísticos Mensuales. Archivo: Bolivia – Exportaciones Oro según Año y Mes, 1990-2024. Recuperado de: <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/hidrocarburos-mineria/mineria-cuadros-estadisticos/>

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2023). Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2023. INEI, Lima, Perú. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Est/Lib1926/libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (s/f). Población estimada y proyectada por sexo de tasa de crecimiento promedio anual, según año calendario, 1980-2024. Recuperado de: https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/proy_02-ok.xlsx

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2023). Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno, 2021. Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Est/Lib1927/libro.pdf

Jones, K. y Ramírez, M. (junio de 2021). Mafias de la madera en frontera de Ecuador capitalizan demanda de balsa. Insight Crime. Recuperado de: <https://insightcrime.org/es/noticias/mafias-madera-frontera-ecuador-capitalizan-demanda-balsa/>

Ley 45 Ley de Minería de 2009. Última modificación 24 de noviembre de 2011. Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_mineria.pdf

Mecanismo de la Unión Europea para la aplicación de leyes, la gobernanza y el comercio forestales. (2019). What is illegal logging? FLEGT, VPA Africa-Latin America. Recuperado de: <http://www.euflegt.efi.int/illegal-logging>

Migration Policy Institute (octubre de 2023). Ecuador hace malabares con la creciente emigración y los desafíos para acomodar la llegada de venezolanos. MPI. Recuperado de: <https://www.migrationpolicy.org/article/ecuador-emigracion-migracion-venezolanos#:~:text=Los%20475.000%20venezolanos%20en%20Ecuador,de%20Colombia%2C%20Per%C3%BA%20y%20Brasil>

Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador (2020). Plan de Acción Nacional sobre el uso de Mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro en Ecuador y de Pequeña Escala de Oro en Ecuador, Conforme la Convención de Minamata sobre Mercurio. Mayo 2020. Recuperado de: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/NAP-Ecuador-May2020-ES.pdf

Ministerio de Energía y Minas – MINEM (2024a). Archivo de Producción Minera. MINEM. Periodo 2001-2023. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/5472883-produccion-minera>

Ministerio de Energía y Minas – MINEM (2024b). Anuario Minero 2023. Reporte Estadístico. MINEM, Lima, Perú. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6682903/5804716-anuario-2023.pdf>

Ministerio de Gobierno (2022). El Plan Sectorial de Desarrollo integral para Vivir Bien Sector: Seguridad Ciudadana 2021-2025. Ministerio de Gobierno, La Paz. Recuperado de: <https://www.mingobierno.gob.bo/sites/default/files/2023-09/PLAN%20ESTRAT%3%89GICO%20DE%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20PARA%20VIVIR%20BIEN%20%20SECTOR%20SEGURIDAD%20CIUDADANA%202021-2025%20Y%20RM%20N%C2%B0154-2022.pdf>

Ministerio de Gobierno de Bolivia (2023). Dossier de Estadísticas en Seguridad Ciudadana 2017-2022. Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD). Recuperado de: https://www.mingobierno.gob.bo/sites/default/files/2023-12/Dossier_Seguridad_Ciudadana.pdf

Ministerio de Interior de Ecuador (2024). Datos Históricos del 2014 al 2023 referente a la Operación Estadística de Homicidios Intencionales. Base de datos descargable. Recuperado de: <https://datosabiertos.gob.ec/dataset/homicidios-intencionales/resource/36b055c8-e10c-4e57-ba25-3046ca5ef15d>

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (2022a). El Plan Sectorial de Desarrollo integral para Vivir Bien Sector: Justicia 2021-2025. La Paz, Bolivia. Recuperado de: https://www.justicia.gob.bo/cms/files/PSDI-ParaVivirBien_rg0djrvc.pdf

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (2022b). Política Plurinacional contra la Trata de Personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos 2021-2025. La Paz, Bolivia. Recuperado de: https://www.justicia.gob.bo/files/vjdf/trataPersonasTr%C3%A1fico2021_2025.pdf

Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia (2021). Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2020. Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Recuperado de: <https://mineria.gob.bo/documentos/anuario2020.pdf>

Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia (2022). Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2021. Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Recuperado de: <https://mineria.gob.bo/revista/pdf/20220418-13-45-40.pdf>

Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia (2023). Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022. Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Recuperado de: <https://mineria.gob.bo/revista/pdf/20230322-15-01-44.pdf>

Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia (2024). Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2023. Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Recuperado de: <https://mineria.gob.bo/revista/pdf/anuario2023.pdf>

Ministerio del Interior de Ecuador (2019). Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana 2019-2030. Ministerio del Interior de Ecuador, Quito. Recuperado de: <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/plan-nacional-min-interior-web.pdf>

Ministerio del Interior de Ecuador (2023). Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y la Violencia. Ministerio del Interior de Ecuador, Quito. Recuperado de: <https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/119.-Diseno-de-la-Estrategia-Nacional-de-Seguridad-Ciudadana.pdf>

Ministerio del Interior de Ecuador (2023). Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030. Ministerio del Interior de Ecuador, Quito. Recuperado de: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/PLAN-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-CIUDADANA-Y-CONVIVENCIA-SOCIAL-PACIF%CC%81FICA-2019-2030-1_compressed.pdf

Ministerio del Interior de Perú – MININTER (2022). Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. MININTER, Lima. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3290003/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20Multisectorial%20-%20Seguridad%20Ciudadana%202030.pdf?v=1656015453>

Ministerio del Interior de Perú – MININTER (2021). Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030. MININTER, Lima. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2442716/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20frente%20a%20la%20Trata%20de%20Personas%202021..pdf?v=1637169621>

Ministerio del Interior de Perú – MININTER (2020). Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023. Mininter, Lima. Recuperado de: <https://observatorio.mininter.gob.pe/sites/default/files/documento/archivos/DWP%20-%20POLITICA%20DE%20LUCHA%20CONTRA%20EL%20TERRORISMO.pdf>

Ministerio del Interior de Perú – MININTER (2019). Política Nacional Multisectorial de lucha contra el Crimen Organizado 2019-2023. MININTER, Lima. Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/473340/PLC_MININTER.pdf?v=1578605291

Naciones Unidas (2022). UN Comtrade Database. Exportaciones de “7108 - Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo (desde Ecuador, Bolivia y Perú para el periodo 2015-2023)”. Trade Data Preview de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas (2023). Informe sobre la construcción de la democracia intercultural en el Estado Plurinacional de Bolivia (2009-2022). Naciones Unidas Bolivia. Recuperado de: <https://bolivia.un.org/es/261270-informe-sobre-la-construcci%C3%B3n-de-la-democracia-intercultural-en-bolivia>

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado – OECO (2023). Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador. 2019-2022. Policía Nacional del Ecuador, PADF. Recuperado de: <https://oeco.pdf.org/wp-content/uploads/2023/07/EVALUACION-SITUACIONAL-NARCOTRAFICO-ECU-2019-2022-.pdf>

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado – OECO (2024). Boletín Anual de Homicidios Intencionales en Ecuador. Análisis de Estadísticas Finales del Año 2023. PADF, INL. Recuperado de: <https://oeco.pdf.org/wp-content/uploads/2024/04/OECO.-BOLETIN-ANUAL-DE-HOMICIDIOS-2023.pdf>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2023). Global Report on Cocaine 2023. Local dynamics global challenges. Crim.Just, UNODC. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2024a). UNODC Research - Data Portal – Intentional Homicide. Recuperado de: https://dataunodc.un.org/sites/dataunodc.un.org/files/metadata_intentional_homicide.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2024b). UNODC Research - Data Portal – Drug Trafficking & Cultivation. Recuperado de: https://dataunodc.un.org/sites/dataunodc.un.org/files/metadata_drug_trafficking_and_cultivation.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2024c). World Drug Report 2024. Special Points of Interest. UNODC. Recuperado de: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (s/f. a). Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal (UN-CTS, por sus siglas en inglés). Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Data-collection/Doc_1_ExploratoryNote_UN_CTS_Spanish.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (s/f. b). The Annual Report Questionnaire (ARQ). UNODC. Recuperado de: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/arq.html>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (s/f.c). UNODC and illicit crop monitoring. UNODC. Recuperado de: <https://www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2015). Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos. Versión 1.0. Viena, UNODC. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUR (junio de 2024). Bolivia: Más apoyo internacional para fortalecer la democracia. ACNUR. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/06/bolivia-more-international-support-urged-bolster-democracy>

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUR. (junio de 2022). Una evaluación a personas refugiadas y migrantes venezolanas en Ecuador revela sus necesidades más críticas. ACNUR Comunicados de prensa. Recuperado de: <https://www.acnur.org/noticias/comunicados-de-prensa/una-evaluacion-personas-refugiadas-y-migrantes-venezolanas-en>

Open Democracy (2022). La sentencia de Jeanine Áñez destaca la politización de la justicia en América Latina. Open Democracy. Recuperado de: <https://www.opendemocracy.net/es/sentencia-jeanine-anez-politizacion-justicia-america-latina/>

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR (2024). Estimación del índice y porcentaje de tala y comercio ilegal de madera en el Perú 2021. Policy Brief. Presidencia del Consejo de Ministros. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6516466/5683472-policy-brief-estimacion-del-indice-y-porcentaje-de-tala-y-comercio-ilegal-de-madera-en-el-peru-el-2021.pdf>

Organización de Estados Americanos (junio de 2024). Concluye la 54ª Asamblea General de la OEA. Centro de Noticias de la OEA. Comunicado de Prensa. 28 de junio de 2024. Recuperado de: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-040/24

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. (s/f). 2. Illegal activities in the forest sector and their root causes. FAO. Recuperado de: <https://www.fao.org/4/a0146e/A0146E06.htm>

Organización de los Estados Americanos (2021a). Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Perú. Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. OEA. DDOT. Recuperado de: <https://www.oas.org/es/sms/ddot/docs/Tras-el-dinero-del-oro-ilicito-El-caso-de-Peru.pdf>

Organización de los Estados Americanos (2021b). Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Ecuador. Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. OEA. DDOT. Recuperado de: <https://www.oas.org/es/sms/ddot/docs/Tras-el-dinero-del-oro-ilicito-El-caso-de-Ecuador.pdf>

Organización Internacional para las Migraciones – OIM (2021). Monitoreo de Flujo de Población venezolana en Bolivia, Ronda 1. Recuperado de: https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/DTM_Bolivia_Ronda1_%28V8%29.pdf

Pérez, A. y Arroyo, M. (abril de 2024). Oro Sucio: compañías exportadoras de Ecuador en la mira de las autoridades. Ojo Público. Recuperado de: <https://ojo-publico.com/5031/oro-sucio-companias-exportadoras-ecuador-la-mira-autoridades>

Policía Nacional del Perú. (2024). Anuario Estadístico Policial 2023. División de Estadística. PNP, Lima. Recuperado de: <https://www.policia.gob.pe/estadisticopnp/documentos/anuario-2023/2.%20ANUARIO%20PNP%202023.pdf>

R4V. (2024). RMRP 2024. Plan de Respuesta Regional Refugiados y Migrantes. UPDATE. Capítulo Ecuador. Recuperado de: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. (2021). Anuario Forestal y de Fauna Silvestre 2010- 2020. SERFOR. Recuperado de: <https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/929>

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. (2022). Anuario Forestal y de Fauna Silvestre 2021. SERFOR. Recuperado de: <https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/943>

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. (2023). Anuario Forestal y de Fauna Silvestre 2022. SERFOR. Recuperado de: <https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/948>

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. (2024). Anuario Forestal y de Fauna Silvestre 2023. SERFOR. Recuperado de: <https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/969>

WWF- Ecuador (2022), “Análisis del Sistema de Explotación de la Balsa y sus Impactos Socio Económicos y Ambientales en Territorios Indígenas de Amazonía”.; Illanes, J.; Kawarim, T.; Samaniego, C.; Sierra, R.; Para el proyecto: Aumento de la Capacidad de Ejecución y Cooperación para Combatir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre y de Madera en la Región Andes-Amazonas.

Zevallos-Trigoso, N.; Mujica, J. y Campos-Vásquez, C. (2024). Amenazas a la seguridad del Estado en Ecuador. Análisis de la situación general. Prosegur Research, Instituto de Criminología. Recuperado de: https://www.prosegurresearch.com/dam/jcr:0d29c565-b6cb-41c4-8d29-0ba16f1f908f/Informe_Ecuador.pdf



2.5 Brasil

Jose María Blanco Navarro

Brasil, la nación más grande de América Latina, enfrenta desafíos profundos y persistentes en materia de seguridad pública. A lo largo de 2024, **las dinámicas de criminalidad y violencia han continuado evolucionando, con algunos avances en la reducción de homicidios, pero también con el recrudecimiento de otras formas de criminalidad**, como el crimen cibernético y el crimen organizado. Este capítulo examina en profundidad el estado actual de la seguridad en Brasil, haciendo uso de los datos más recientes del “Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2024” y el “Atlas de la Violencia 2024”, así como otros estudios relevantes. Además, se analizan las respuestas del Estado y las tendencias emergentes que están configurando el futuro de la seguridad en el país.

2.5.1.

Contexto General de Seguridad

Diversos estudios e informes aportan contexto para tener una visión, siempre relativa, del contexto de seguridad en Brasil. El Índice de Paz Global de 2024 sitúa a Brasil en el puesto 131 de 163 países (ordenados de más a menos seguros). Entre los aspectos más negativos **destaca las altas tasas de homicidios y crímenes violentos, la sobreocupación de las prisiones y las manifestaciones violentas.**

Por otra parte, en términos de crimen organizado, el Global Organized Crime Index (2023) revela que varios países latinoamericanos ocupan los primeros lugares a nivel mundial, destacando la presencia de redes criminales transnacionales que abarcan tráfico de drogas, armas, extorsiones, secuestros y lavado de dinero. Brasil aparece en el puesto 22 de un total de 193 países analizados, siendo el cuarto de América Latina (tras Colombia, México y Paraguay). Según World Population Review, 17 de las 50 ciudades más peligrosas en el mundo son brasileñas. Estos datos evidencian un entorno de inseguridad crónica que afectan tanto a la población como al tejido empresarial.



2.5.2. Criminalidad: Tipologías y Tendencias

Violencia contra las personas

En 2024, Brasil continúa lidiando con una situación de seguridad pública compleja y multifacética. El descenso en la cifra de homicidios es parte de una tendencia más amplia observada en los últimos años, que muestra una reducción constante en los homicidios en varias regiones del país. Sin embargo, **las disparidades regionales siguen siendo significativas, con zonas como el norte y el nordeste registrando tasas muy superiores a la media nacional.**

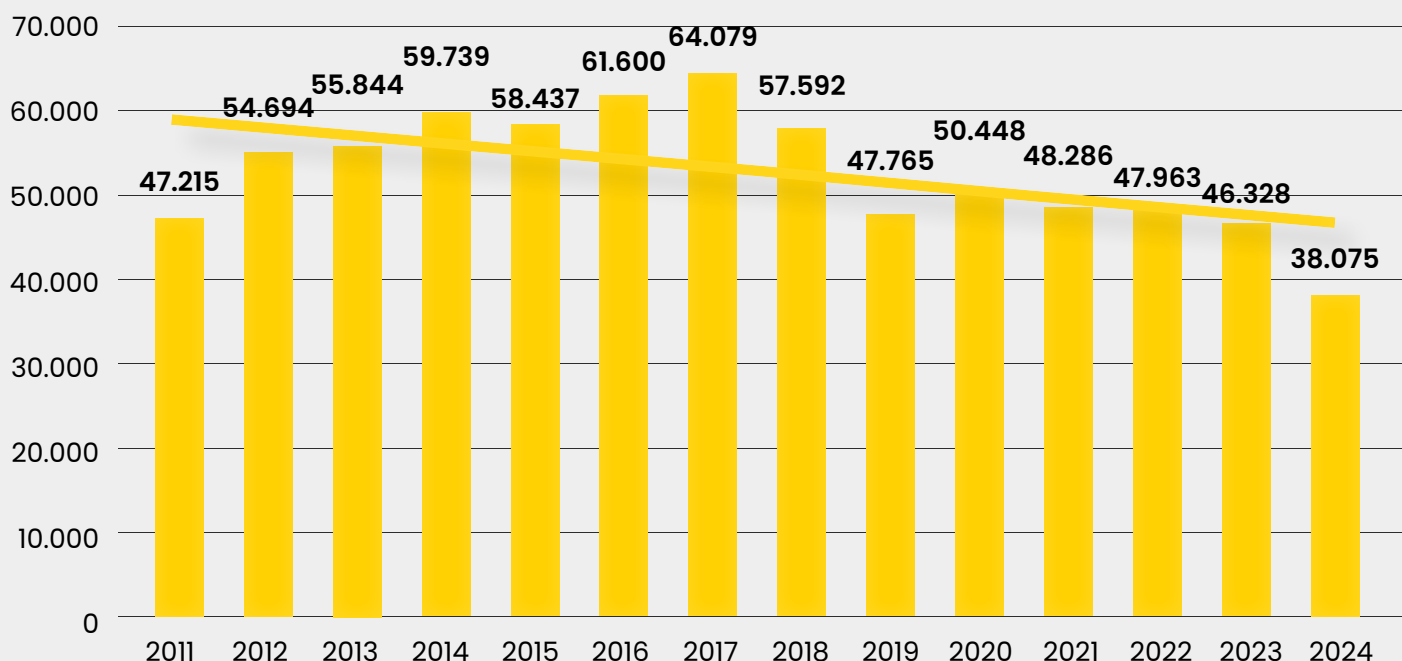
Brasil registró 38.075 homicidios en el año 2024, una caída del 6% frente a las 40.768 muertes violentas contabilizadas en 2023, según indicó el Ministerio de Justicia, siguiendo la disminución observada en años

anteriores. Esto posiciona al **año 2024 como uno de los más seguros en términos de homicidios desde al menos 2011.**

El Atlas de la Violencia 2024 señalaba, sobre el año precedente, que las tasas de homicidios varían drásticamente entre diferentes regiones y ciudades. Por ejemplo, en el estado de São Paulo, la tasa de homicidios es notablemente baja, situándose en 12 por cada 100,000 habitantes, lo que contrasta con estados del Nordeste como Bahia y Ceará, donde las tasas superan los 45 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estas disparidades reflejan las diferentes estrategias y capacidades de los gobiernos estatales para abordar la

Gráfico 20
Homicidios

Fuente: Prosecur Research, 2025 basado en el Gobierno de Brasil



Delitos contra la propiedad

violencia y el crimen. **La concentración de homicidios en estas regiones está estrechamente vinculada a la presencia de facciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV),** que operan con relativa impunidad en áreas donde el Estado tiene una presencia limitada.

En contraste, estados como São Paulo han logrado implementar políticas de seguridad más efectivas, lo que ha llevado a una reducción sostenida en los homicidios. Estas políticas incluyen la utilización de tecnología avanzada para la vigilancia, una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad, y programas sociales que abordan las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales.

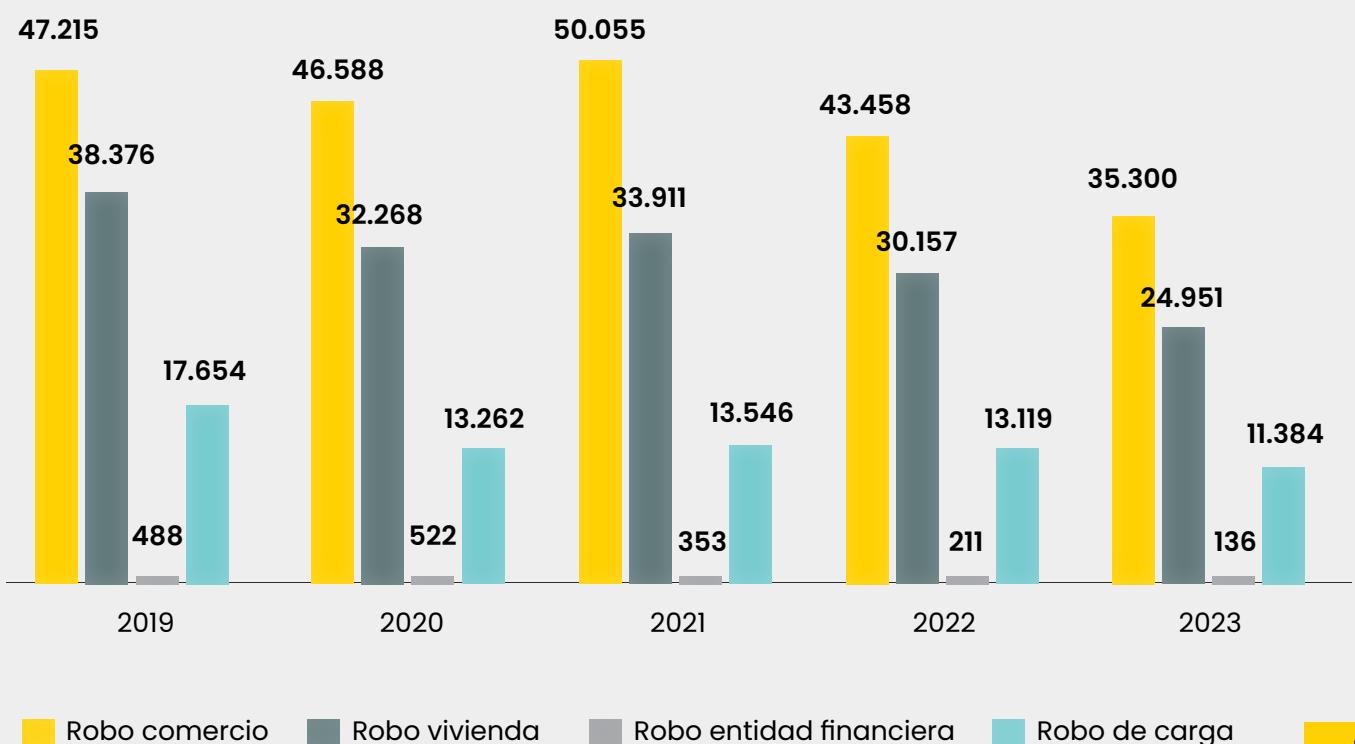
Otro aspecto preocupante es el aumento en la letalidad policial. Mientras que los homicidios generales han disminuido, las muertes causadas por intervenciones policiales han aumentado, lo que sugiere un enfoque de “mano dura”.

La reducción en homicidios, y también en delitos contra la propiedad en los últimos años, no ha cambiado la percepción de inseguridad entre la población. A pesar de la disminución en las cifras de homicidios, **más de un tercio de los brasileños cree que la violencia ha aumentado desde el último cambio de gobierno.** Este sentimiento se ve exacerbado por la prevalencia de otros tipos de delitos, como robos callejeros, y la constante cobertura mediática de incidentes violentos, incluidos enfrentamientos entre la policía y el crimen organizado.

Los delitos contra la propiedad, incluidos los robos y asaltos, siguen siendo un problema grave en las principales ciudades de Brasil. En el primer semestre de 2024, se ha registrado una ligera disminución en los casos de robo en comparación con el mismo periodo de 2023. A pesar de esta **mejora, las tasas de criminalidad en ciudades como Río de Janeiro y São Paulo siguen siendo altas, especialmente en lo que respecta al robo de vehículos y asaltos a mano armada.**

Gráfico 21
Robos

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en el Gobierno de Brasil



Cibercriminalidad

Tras la pandemia de COVID-19, se ha observado una reconfiguración significativa en los crímenes patrimoniales en Brasil. El aumento de los fraudes electrónicos y estafas en línea ha superado los niveles pre-pandemia, mientras que los robos y asaltos han migrado, en parte, hacia el entorno digital. Este cambio refleja un ajuste en las tácticas criminales, con una **disminución de ciertos delitos físicos y un incremento en los delitos virtuales**.

El crimen cibernético ha emergido como una de las principales preocupaciones de seguridad en Brasil en 2024. Durante los primeros seis meses del año, se han reportado más de 600,000 incidentes de cibercrimen, un aumento del 15% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este incremento refleja la creciente dependencia del país en las tecnologías digitales y las vulnerabilidades inherentes a su infraestructura de ciberseguridad.

El aumento del crimen cibernético, con un crecimiento proyectado del 40% para 2024, destaca la necesidad urgente de mejorar la infraestructura de ciberseguridad del país para proteger a las empresas y ciudadanos de amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

Los ataques de phishing, el fraude financiero y los ataques de ransomware son algunas de las formas más comunes de cibercrimen en Brasil, al igual que en el resto del mundo. A medida que las empresas y los individuos adoptan cada vez más servicios digitales, la protección contra estas amenazas se ha convertido en una prioridad para el gobierno y las instituciones financieras. Sin embargo, la respuesta hasta ahora ha sido insuficiente, con grandes brechas en la protección y la detección de amenazas.

2.5.3.

Crimen Organizado

El crimen organizado es uno de los mayores desafíos de seguridad en Brasil. Las principales organizaciones criminales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), continúan expandiendo su influencia tanto a nivel nacional como internacional. En 2024, estas organizaciones no solo controlan el tráfico de drogas y armas en Brasil, sino que también han diversificado sus actividades ilícitas para incluir el tráfico de personas, la minería ilegal y cualquier oportunidad que se pueda convertir en negocio rentable.

El PCC ha evolucionado desde su fundación en 1993 en el sistema penitenciario de São Paulo hasta convertirse en una organización criminal que opera como un Estado paralelo. El PCC no solo controla el tráfico de drogas, sino que también establece su propio sistema de leyes y gobierno en las áreas bajo su influencia, desafiando la autoridad del Estado.

Narcotráfico y corrupción

El narcotráfico sigue siendo la principal fuente de ingresos para las organizaciones criminales en Brasil. En el primer semestre de 2024, la Policía Federal incautó un 10% más de cocaína que en el mismo periodo de 2023, lo que refleja tanto el aumento de las operaciones de tráfico como los esfuerzos intensificados de las fuerzas de seguridad para combatir estas actividades.

El narcotráfico sigue siendo el principal motor de la violencia en Brasil, con las facciones criminales como el PCC y el CV disputando el control de rutas



de drogas tanto nacionales como internacionales. Se estima que **el tráfico de drogas es responsable de aproximadamente el 75% de los homicidios en el país.**

Brasil juega un papel crucial en el tráfico global de drogas, especialmente de cocaína. La cocaína que transita por Brasil proviene principalmente de Colombia, Perú y Bolivia, los tres mayores productores de esta droga en el mundo. Las rutas de tráfico de cocaína cruzan principalmente por la Amazonia, utilizando las redes fluviales y áreas remotas para el transporte. El puerto de Manaus es un punto de tránsito importante, así como los puertos de Belém, Itajaí, Santos en São Paulo y Río de Janeiro. Estas drogas se dirigen principalmente a Europa, África y, en menor medida, Asia. **Europa es el principal destino de la cocaína que sale de Brasil,** con puertos en España, Portugal y Bélgica sirviendo como puntos de entrada clave. También se observa un flujo creciente hacia África Occidental, desde donde la droga es luego transportada hacia Europa y otros destinos.

Las facciones criminales brasileñas, colaboran con cárteles mexicanos y mafias europeas para el transporte de cocaína desde Brasil hacia otros mercados. Han perfeccionado diversas estrategias para

ocultar la cocaína en cargamentos legales, utilizando contenedores de productos agrícolas, químicos y otros bienes exportados desde Brasil. Las fuerzas de seguridad han incrementado las inspecciones y el uso de tecnología avanzada para detectar estos envíos, aunque la magnitud del comercio dificulta el control total.

El rol del sistema penitenciario

El sistema penitenciario brasileño sigue siendo un foco de criminalidad. No es únicamente un lugar donde las organizaciones criminales reclutan nuevos miembros, sino también donde planifican y coordinan sus operaciones. Las condiciones deplorables, la sobrepoblación y la falta de control efectivo en las prisiones brasileñas han permitido que estas organizaciones fortalezcan su poder e influencia tanto dentro como fuera de las cárceles.

A lo largo de 2024, se han intensificado los esfuerzos para reformar el sistema penitenciario, incluyendo la separación de los líderes criminales de la población general y la mejora de la seguridad interna. Sin embargo, estas medidas han tenido un éxito limitado.



Diversidad regional

La región Norte de Brasil, que incluye la vasta y remota Amazonia, enfrenta desafíos únicos en términos de seguridad pública, exacerbados por su geografía,

aislamiento y presencia de fronteras internacionales. Los temas clave en esta región incluyen: ↓ ↓ ↓

Tráfico de drogas y rutas Internacionales

El norte de Brasil, especialmente los estados de Amazonas y Pará, se encuentra en la ruta de tránsito de cocaína desde los países productores de coca en los Andes (Colombia, Perú y Bolivia) hacia los mercados globales. Las rutas fluviales a través del Amazonas y los puertos en Manaus son utilizadas para el transporte de drogas.

Presencia de grupos criminales y guerrillas

En las zonas fronterizas, como la triple frontera con Colombia y Perú, hay una presencia creciente de grupos criminales y guerrillas que operan en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estas áreas son particularmente difíciles de controlar debido a su inaccesibilidad y la falta de presencia estatal efectiva. Brasil y Colombia comparten una extensión fronteriza de 1,645 kilómetros, Perú y Colombia de 1,626 kilómetros, mientras que Brasil y Perú de 2,822 kilómetros.

La deforestación y la minería ilegal

A menudo controladas por organizaciones criminales, son problemas graves en la Amazonia, amplificando el ecosistema criminal, más allá de los impactos en el medio ambiente y en las comunidades locales.

Debilidad institucional

La región norte sufre de una debilidad institucional crónica, con infraestructuras de seguridad pública muy limitadas y una alta tasa de corrupción, lo que permite que las actividades ilícitas florezcan con relativa impunidad.

2.5.4.

Respuestas del Estado: fuerzas de seguridad y políticas públicas

El gobierno brasileño ha implementado una serie de estrategias para mejorar la seguridad pública en 2024. La militarización de la seguridad pública ha sido una de las respuestas más prominentes, especialmente en estados como Río de Janeiro. Estas operaciones **han involucrado a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado en las favelas y otras áreas conflictivas.**

Militarización y operaciones de seguridad

La militarización de la seguridad pública en Brasil, al igual que en otros países de Centroamérica y Sudamérica, ha generado un intenso debate. Por un lado, ha permitido a las fuerzas de seguridad llevar a cabo operaciones a gran escala contra las facciones criminales en zonas donde la policía local no tiene suficiente capacidad para actuar. Por otro lado, estas operaciones han sido criticadas por su enfoque represivo y las violaciones de derechos humanos.

En 2024, el gobierno ha continuado con esta estrategia, pero también ha comenzado a explorar enfoques alternativos que incluyen la inversión en programas de prevención de la violencia y la mejora de la coordinación entre las fuerzas policiales y comunitarias. A pesar de estos esfuerzos, **la percepción pública de inseguridad sigue siendo alta, lo que refleja una desconfianza generalizada hacia la capacidad del Estado para garantizar la seguridad.**

Reforma del sistema penitenciario

Brasil enfrenta un déficit de 174.436 plazas en su sistema penitenciario, según un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La población carcelaria del país asciende a 663.906 personas, mientras que la capacidad de las instalaciones es de solo 488.951 plazas. Cifras que hacen de **Brasil la tercera mayor comunidad carcelaria del mundo.**

Diversas iniciativas se han orientado a abordar el hacinamiento en las prisiones, las malas condiciones en los centros de detención y las violaciones de derechos fundamentales. Un logro notable del sistema penitenciario brasileño, según el director de Inteligencia Penitenciaria de la Secretaría Nacional de Políticas Penales de Brasil, es **su capacidad para anticipar y controlar disturbios y motines.** La inteligencia penitenciaria juega un papel crucial en identificar posibles rebeliones y en la rápida intervención para prevenir desórdenes mayores. Este enfoque proactivo ha permitido mantener un mayor control y estabilidad dentro de las prisiones.

La colaboración internacional y el uso de tecnologías muestran algunos resultados positivos en la gestión penitenciaria de Brasil. El rastreo electrónico y la recopilación de datos detallados sobre los reclusos han permitido mejorar la seguridad y la eficacia del sistema.

Las reformas, como la separación de líderes criminales de la población general, la mejora de la seguridad interna y el fortalecimiento de la rehabilitación, han sido difíciles de implementar de manera efectiva debido a las complejidades del sistema.



Integración y coordinación de las fuerzas de seguridad

Una de las estrategias más efectivas adoptadas por el Estado brasileño en 2024 ha sido la **mejora en la integración y coordinación de las fuerzas de seguridad a nivel federal y estatal**. La implementación de sistemas avanzados de geointeligencia y la mayor cooperación interinstitucional han permitido respuestas más rápidas y efectivas a las amenazas de seguridad, especialmente en lo que respecta al crimen organizado y los delitos violentos.

Estas mejoras han sido particularmente notables en los estados que han logrado reducir significativamente sus tasas de criminalidad, como São Paulo. La clave de su éxito ha sido una combinación de tecnología avanzada, gestión eficiente de los recursos policiales y una mayor involucración de las comunidades locales en los esfuerzos de seguridad.



2.5.5. **Tendencias emergentes y perspectivas futuras**

A medida que Brasil avanza en 2024, se observan varias tendencias emergentes que están configurando el panorama de la seguridad en el país. Estas tendencias no solo reflejan los cambios en los patrones de criminalidad, que responden a tendencias regionales e incluso globales, sino también las respuestas del Estado y la evolución de las percepciones públicas sobre la seguridad.

Avance del crimen cibernético

El **crimen cibernético continúa en expansión**, con un aumento proyectado del 40% en los ataques cibernéticos para finales de 2024. Este incremento se debe en gran parte a la creciente digitalización de la economía y la vida cotidiana en Brasil, lo que ha creado nuevas oportunidades para los cibercriminales. Las brechas en la infraestructura de ciberseguridad del país representan un desafío significativo.

Expansión del crimen organizado

Se espera que las **organizaciones criminales brasileñas continúen expandiendo sus operaciones tanto a nivel nacional como internacional**. Estas organizaciones están diversificando sus actividades ilícitas, involucrándose en el tráfico de personas, la minería ilegal y otros negocios altamente lucrativos. La cooperación internacional será esencial para enfrentar estas amenazas emergentes, ya que las actividades de estas organizaciones trascienden las fronteras de Brasil.

Percepción de inseguridad y realidad

A pesar de la disminución en las tasas de homicidios y otros delitos, la percepción de inseguridad entre la población sigue siendo alta. Esta **disonancia entre la realidad objetiva y la percepción pública** se debe a varios factores, incluidos la cobertura mediática sensacionalista, la prevalencia de delitos menores y la persistente desconfianza en las instituciones de seguridad. Abordar esta brecha entre percepción y realidad será crucial para mejorar la confianza pública y fortalecer la cohesión social.

2.5.6.

Conclusión

Brasil enfrenta un panorama de seguridad complejo y en evolución en 2025. Aunque las tasas de homicidios han mostrado una tendencia a la baja y se han logrado algunos avances en la lucha contra el crimen organizado, persisten desafíos significativos. La corrupción, la desigualdad y la percepción pública de inseguridad siguen siendo barreras importantes para la mejora de la seguridad pública en el país.

Las políticas de seguridad deberán continuar evolucionando para abordar estos desafíos de manera integral. Esto incluye no solo la represión del crimen, sino también la implementación de políticas integrales y económicas que aborden las raíces de la criminalidad. Además, la cooperación internacional y la integración de nuevas tecnologías serán esenciales para enfrentar

las amenazas emergentes, como el crimen cibernético y la expansión del crimen organizado. Los avances realizados en 2024 son alentadores, pero deberán ser sostenidos y ampliados para lograr un impacto duradero en la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad en todo el país.

Otro de los grandes desafíos en reforzar la presencia estatal en las áreas más afectadas y mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia, a efectos de limitar la capacidad de grandes grupos de crear feudos criminales. Además, es crucial implementar programas de desarrollo socioeconómico en estas regiones para reducir la influencia de estos grupos.





Argentina y Chile

2.6 Argentina y Chile

Carolina Sampó

2.6.1. Argentina

Desde hace años, en Argentina, los temas de seguridad pública se posicionan al tope de las preocupaciones de la ciudadanía, compartiendo esa valoración con el alza del costo de vida (la inflación) y el desempleo. En tal sentido, **las propuestas en materia de seguridad han constituido uno de los ejes centrales de las propuestas electorales de los principales partidos políticos.**

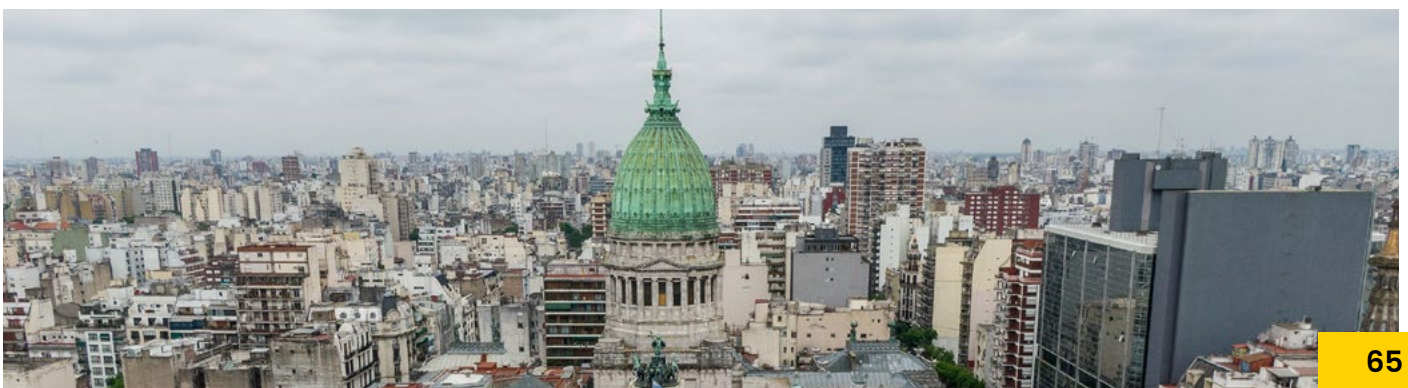
En este contexto, en los últimos meses se observa cierta mejora en el panorama nacional en esta materia, según se desprende de ciertos datos cuantitativos. Uno de los aspectos en que se registra esa mejora atañe a los homicidios intencionales, es decir, dolosos (salvo mención expresa, en adelante la referencia será a este tipo de homicidios, no a los de tipo culposo). De acuerdo con los números del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del ministerio de Seguridad, durante el primer semestre del 2024 esos delitos **se redujeron a nivel nacional un 10,6 %, en relación con igual período del año 2023.**

Esa baja, que en términos absolutos significó más de un centenar de vidas, llevó a la cartera de Seguridad a proyectar una tasa anual de 4 homicidios cada cien mil habitantes para el año 2024. De concretarse la proyección, esa cifra constituirá una notoria mejora

respecto al año anterior, cuando la citada tasa fue de 4,4 (2046 homicidios) y representó un aumento del 3,6% respecto al año 2022. Además representaría la tasa más baja del corriente siglo, ya que entre los años 2001 y 2021 oscilo entre los 5 y 6 homicidios cada 100 mil habitantes, de acuerdo con un reporte global sobre esas dos décadas elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Desde una perspectiva geográfica, **en el año 2023 el 90 % de los homicidios ocurrieron en el 10% del territorio**, que agrupa 193 municipios que congregan el 70% de la población del país. Entre esos municipios se incluyen los del **Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario, Santa Fe y Mar del Plata** (SNIC, 2024).

Por otro lado, en ese lapso, el 57,4% de los homicidios dolosos fueron ejecutados con armas de fuego, mientras que el 25,5% fueron cometidos con arma blanca. El 82% de las víctimas fueron varones, contra un 17,6% mujeres. En el 88% de los casos fueron personas mayores de edad. Otro dato importante: el 57,6% ocurrieron en la vía pública, y el 29.1% en domicilios particulares, producto de cuadros de violencia intrafamiliar (SNIC, 2024).



A la hora de identificar los factores que incidieron en la notoria caída de los homicidios intencionales durante el primer semestre del presente año, el ministerio de Seguridad no ha proporcionado demasiados detalles, aunque ha subrayado tres elementos:

- ▶ Una drástica reducción interanual (-60%), en el primer semestre, de los homicidios en la ciudad de Rosario, uno de los epicentros de la criminalidad organizada asociada primordialmente al tráfico y comercialización de drogas ilegales.
- ▶ Un trabajo interinstitucional entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, para cooperar y coordinar tareas en zonas específicas, identificadas a través de diferentes medios.
- ▶ Producto de lo anterior, el despliegue de fuerzas federales en áreas focales de alta delincuencia, y su empleo de manera articulada con policías locales.

En lo referente a la ciudad de Rosario, ubicada a unos 300 km al norte de la capital del país, en la provincia de Santa Fe, sus altas tasas de violencia se tradujeron en 260 homicidios intencionales en el año 2023, en más de un 80% de los casos con empleo de armas de fuego. Esa cifra representó el 65% de los homicidios cometidos en todo el territorio provincial y equivalió a 19,8 homicidios cada cien mil habitantes, casi cinco veces el promedio nacional.

Con ese contexto, el 18 de diciembre los gobiernos nacional y provincial anunciaron conjuntamente la Operación Bandera, que incluyó el despliegue de personal federal. Tres meses más tarde del inicio de este operativo, ante una nueva ola de violencia, el gobierno informó que elementos de las fuerzas armadas se sumarían al esfuerzo contra la violencia, aunque desempeñando tareas de naturaleza logística, compatibles con la legislación vigente.

Otra importante mejoría en materia de seguridad se registró en el campo de los **secuestros extorsivos**, que proliferaron en la década pasada, incluyendo la llamada modalidad “express”: en un robo de vehículos se lo obligaba al conductor a retirar dinero de los cajeros automáticos o se presionaba a su familia para que pagara un rescate. Estos delitos alcanzaron un **mínimo histórico en 2023** (una docena de casos en los primeros nueve meses) y, en consecuencia, en octubre de ese año se cerró la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), creada en 2016 por el ministerio público, para investigar ese tipo de delitos. Aunque en líneas generales la situación de seguridad

de la Argentina ha mejorado en el presente año, esta evolución no se ha registrado en todos los aspectos. Tal es el caso de los robos (cuando media violencia contra la víctima) y hurtos (sin violencia). Los lugares más comunes para estos delitos suelen ser las calles, el transporte público y los espacios urbanos densamente concurridos y transitados.

Los robos y hurtos no parecen haber disminuido a nivel nacional. Uno de los rubros más importantes ha sido el de los automotores, según indica el Sistema Integrado Sofía, una base de datos alimentada por las compañías de seguros. Computando tanto robos a mano armada, como hurtos de vehículos detenidos en la vía pública, su sustracción creció 28% en el año 2023, saltando de 158 a 201 casos cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con su distribución geográfica, el 9% de esos delitos aconteció en la ciudad de Buenos Aires, contra un 58% en el llamado Gran Buenos Aires y un 33% en el resto del país. En el área del conurbano, Lanús fue el distrito más complicado, seguido por Morón y Tres de febrero. En términos interanuales, los incrementos de casos fueron del 42% en ciudad de Buenos Aires, 32% en Gran Buenos Aires (32% Norte, 33% Oeste y 30% Sur), y 17% en el interior del país.

Aunque los móviles para el robo o hurto de automóviles son variados, mayormente las unidades terminan en desarmaderos ilegales para la comercialización de autopartes, son utilizadas para cometer otros delitos o acaban como “mellizos”, es decir, son vendidos con otros datos en mercados de la región menos regulados y controlados que el argentino.



La persistente crisis socioeconómica no es ajena al **aumento de la participación de menores de edad en hechos delictivos**. La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presentó su informe estadístico anual, que reflejó un cuadro de situación extremadamente preocupante:

- ▶ Durante 2023, 1767 niños, niñas y adolescentes (NNyA) tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores: un 7,5% más que en 2022. El 71% no había tenido otras causas con anterioridad, porcentaje menor al 74% registrado en el período anterior.
- ▶ De ese total, 9 de cada 10 fueron varones, principalmente de 16 y 17 años (54,5%), en su mayoría de nacionalidad argentina (94,8%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (55,8%) y la ciudad de Buenos Aires (45,2%).
- ▶ En total se registraron 2197 causas, un 7,9 % más que en 2022. Predominaron los delitos contra la propiedad (83%), principalmente distintas modalidades de robos.
- ▶ El 92,3% de las causas se abrieron en dependencias policiales de la ciudad de Buenos Aires.

La mención a la ciudad de Buenos Aires permite agregar que allí se registraron durante el año 2023 alzas del 15% tanto en robos como en hurtos. Según el mapa del delito que elabora el ministerio de seguridad local, entre los robos que más subieron se encuentran aquellos perpetrados con armas de fuego, con un 6,8% interanual. En sentido opuesto, un importante descenso (12%) fue el que se observó en materia de “motochorros”, neologismo que refiere a robos con uso de una motocicleta. En cuanto a los hurtos, o sustracción de bienes sin uso de violencia, se estima

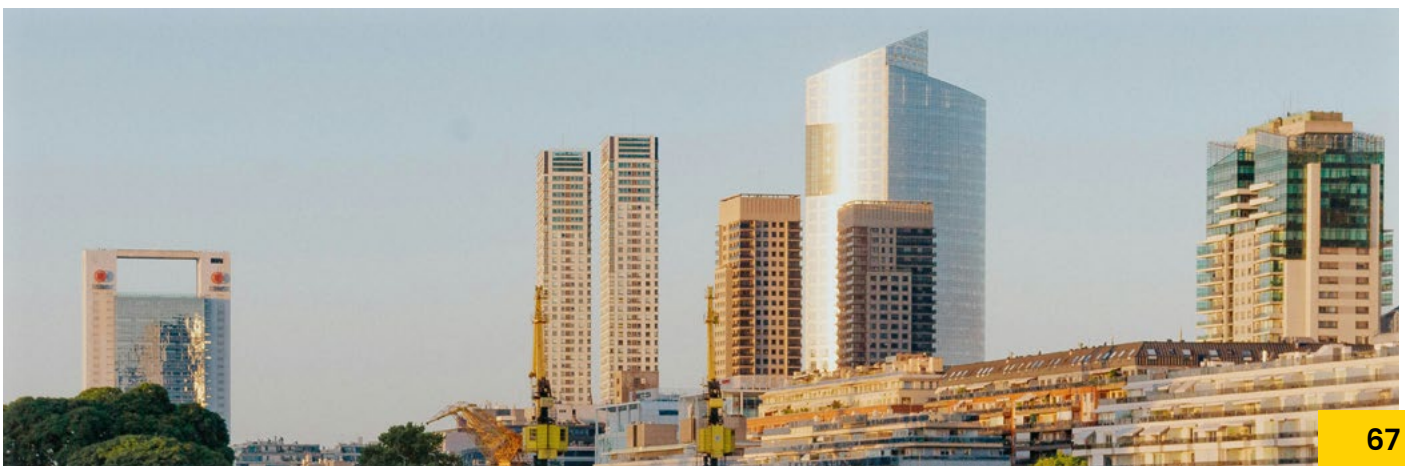
que -al menos- una parte del aumento respecto a 2022 podría estar vinculado con una campaña activa del gobierno local para facilitar las denuncias.

También aumentaron en todo el país los femicidios: de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), en 2023 hubo 250 víctimas fatales directas de este tipo (245 mujeres cis y 5 mujeres trans/travestis), un 10,6% más que en 2022, cuando se registraron 226 casos. Además, esa cifra es superior al promedio de femicidios correspondiente al decenio 2014 (fecha de inicio del RIMJA)-2023: poco menos de 245 asesinatos anuales.

El Registro, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indica una tasa actual de 1,05 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres. En promedio, en el país, en el año 2023 se registró una víctima directa de femicidio cada 35 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 32 horas (incluyendo también a las víctimas de femicidio vinculado).

Desde una perspectiva etaria, en 2023 el promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 38,3 años. El 26% de ellas tenía entre 25 y 34 años, mientras un 24% tenía entre 35 y 44 años al momento del hecho; 22 asesinadas eran niñas y adolescentes menores de 18 años, y otras 28 eran adultas mayores, de 60 años y más.

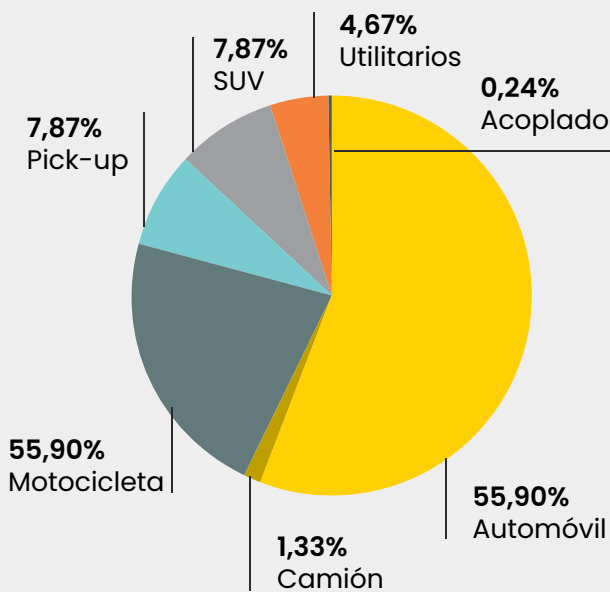
Según su nacionalidad, el 93% de las víctimas directas de femicidio era de nacionalidad argentina y apenas 15 eran migrantes internacionales. Solamente 7 de las mujeres asesinadas estaban en situación de prostitución y 6 en situación de calle; 3 pertenecían a pueblos originarios y 2 estaban detenidas en instalaciones policiales cuando fueron ultimadas. Otro dato importante: en el 44% de los casos, la víctima convivía con el homicida, situación que se vincula con los cuadros de violencia intrafamiliar mencionados en párrafos anteriores.



A corto y mediano plazo, la intención del Poder Ejecutivo es mejorar de manera nítida el cuadro de seguridad pública existente, a nivel nacional. La estrategia para alcanzar ese objetivo incluye la cooperación entre la Nación y las provincias, y el empleo coordinado de fuerzas federales y locales. También contempla el incremento cuantitativo y la mejora cualitativa de los medios a disposición de las cinco fuerzas federales. A tal efecto, se ha previsto un aumento del 19% del presupuesto del ministerio de Seguridad para el año 2025.

Simultáneamente, se pretende contar con un marco normativo más eficiente. Concretamente, en materia de crimen organizado, para enfrentar a algunas de sus manifestaciones (narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos, trata de personas, entre otros). El gobierno elaboró la llamada Ley Antimafia, que el Congreso aprobó a comienzos del mes de octubre. De acuerdo con esta novedad legislativa, la mera pertenencia a una organización criminal será castigada con penas de entre 8 y 20 años de prisión. Además, cualquier miembro de la entidad recibirá la misma pena que el delito más grave cometido por cualquiera de sus integrantes, ya que todos son considerados partícipes necesarios para el acto delictivo.

Gráfico 22
Participación de robos por categoría de vehículos 2023



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en CESVI.

Gráfico 23
Plan Bandera (localidad rosario)
SINC – 2023

HOMICIDIOS DOLOSOS

138

Semana 30
- Año 2023

56

Semana 30
- Año 2024

52

42%
Variación

EN ZONAS DE DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS FEDERALES

50

Semana 30
- Año 2023

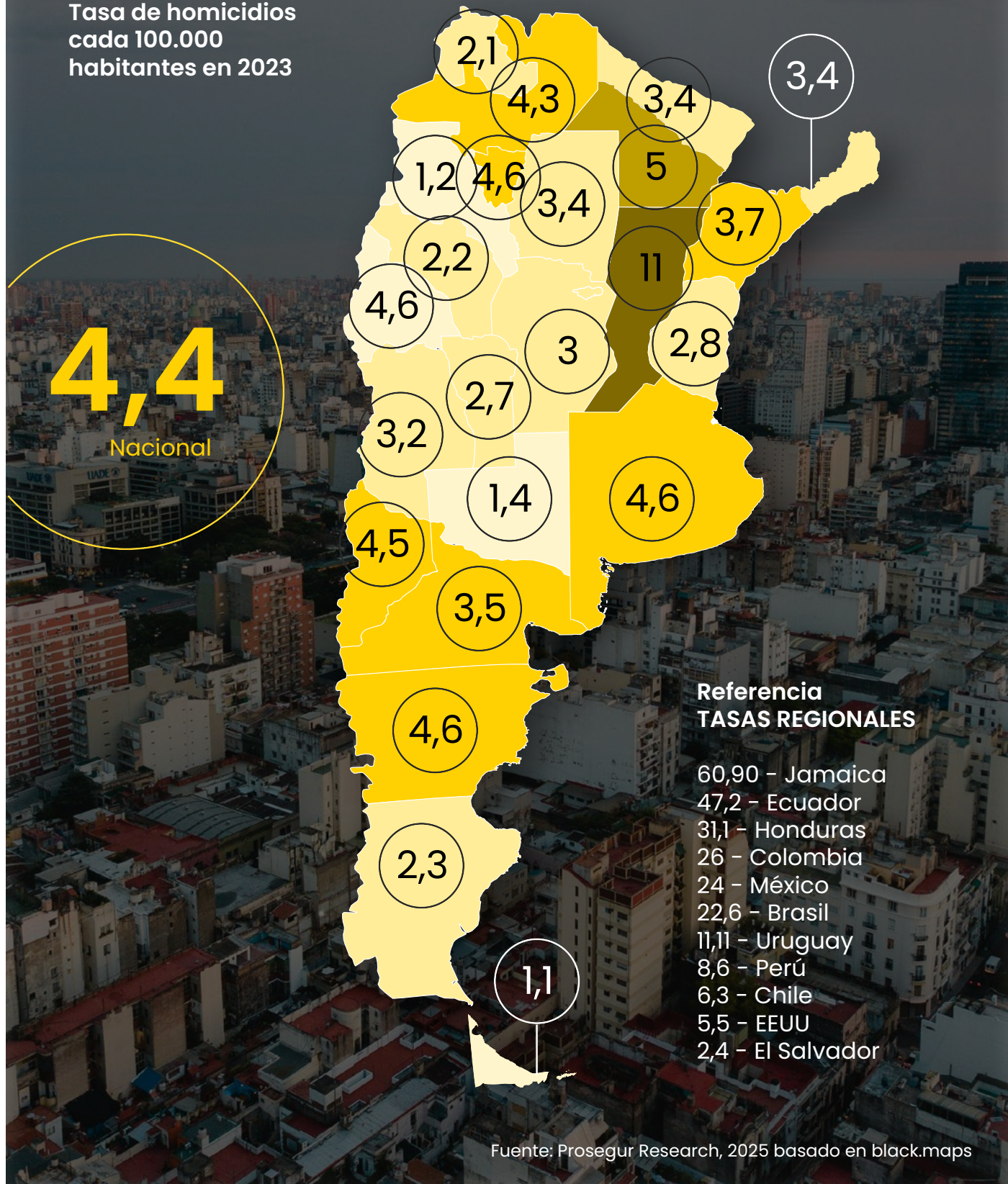
14

Semana 30
- Año 2024

-72%

Variación

Gráfico 24
Tasa de homicidios
cada 100.000
habitantes en 2023



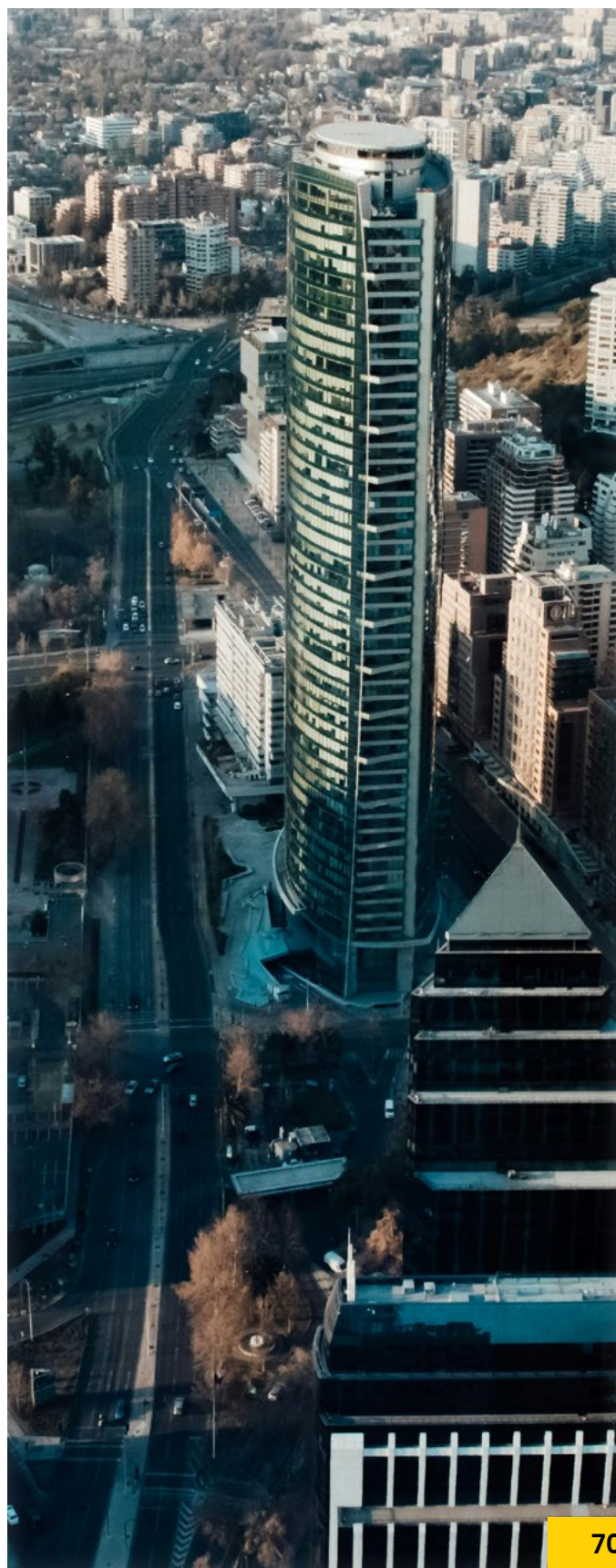
2.6.2. Chile

A juzgar por sus datos numéricos, no sólo en términos absolutos sino también en relación con años anteriores, y por la percepción de su opinión pública, **Chile está atravesando una importante crisis en materia de seguridad.** En lo referente a homicidios intencionales, o sea, dolosos, el Informe de Homicidios Consumados correspondiente al año 2023 indica **una tasa de 6,7 asesinatos cada 100 mil habitantes. Una tasa superior a la registrada en los tres países limítrofes: Argentina, Perú y Bolivia.**

Empero, esa cifra representa **una mejoría del 6% respecto a los resultados del año 2022** y significa un quiebre en la tendencia al alza que se venía registrando desde 2016. Siempre de acuerdo con los datos de la cartera de Interior y Seguridad Pública, la baja interanual de víctimas de homicidios intencionales fue de 1330 a 1248. Los casos bajaron en 11 de las 16 regiones del país, aunque se mantuvieron estables en la Región Metropolitana.

- ▶ El 89% de las víctimas de este tipo de delitos fueron hombres y el 82,5% chilenos.
- ▶ Del total de fallecidos, 54,3% registraba condenas penales, cinco puntos más que en 2022 cuando un 48,3% de las víctimas tenía prontuario.
- ▶ Sobre los mecanismos usados para cometer los homicidios, el primer lugar lo ocupan las armas de fuego con un 52,3% y luego las armas blancas con un 31%.
- ▶ El 41,3% de los homicidios ocurrieron en un marco interpersonal, como violencia intrafamiliar, mientras un 36,9% estuvo asociado a actividades de grupos organizados
- ▶ La proporción de homicidios con imputado es inferior al 60%. Sobre este punto, una hipótesis es que en muchos casos de asesinato no intervienen conocidos entre sí, pues son manifestaciones de crimen organizado.

Precisamente, los especialistas en seguridad pública de Chile parecen coincidir en que buena parte de los homicidios responden a una **presencia creciente de estructuras criminales, particularmente ligadas al narcotráfico, que están disputando el control de distintos territorios entre ellos y frente a grupos extranjeros.**



El análisis puede ser llevado más allá de los homicidios intencionales para enfocar en la categoría, más amplia, de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS). Esta designación agrupa también hurtos; lesiones leves; lesiones graves; robos con fuerza; robos con violencia o intimidación; robos de/desde vehículo motorizado; robo en lugar habitado y no habitado, y violaciones. De acuerdo con los datos publicados por el Centro de Estudios y Análisis de Delito (CEAD), en 2023 la situación en materia de DMCS con excepción de homicidios, arrojó un total de 2581 eventos cada cien mil habitantes, con los siguientes datos relevantes:

- ▲ Los **delitos con mayor ocurrencia fueron hurtos**, con 647,5 casos cada cien mil habitantes.
- ▲ Se registran 411,4 robos con violencia o intimidación cada cien mil habitantes.
- ▲ Tanto los hurtos como los robos crecieron levemente respecto al año anterior.
- ▲ La mayor parte de estos eventos acontecieron en las **regiones Metropolitana y del norte del país**.

En materia geográfica, los incrementos delictuales fueron mayores en la llamada Macrozona Norte, que comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Por este amplio territorio discurren importantes flujos migratorios ilegales y de droga. También se destacan, en la zona central del país, las regiones Metropolitana (sobre todo Santiago, Puente Alto y Maipú) y Valparaíso (en especial la ciudad del mismo nombre y Viña del Mar).

Más allá de los datos empíricos, en el plano subjetivo, en relación con el cambio y aumento de delitos más violentos, **la ciudadanía chilena experimentó una creciente sensación de inseguridad**. En este sentido, los estudios realizados por una prestigiosa empresa de sondeos de opinión, sobre un universo de análisis de 29 países, indicaron que Chile ocupa el primer lugar en la percepción de incremento de la delincuencia en el barrio durante el último año. De acuerdo con ese relevamiento, dos de cada tres chilenos consideran que ha aumentado la delincuencia en su barrio (68%), resultado que duplica el promedio mundial (34%).

En similar sentido, el Índice de Paz Ciudadana, dossier elaborado por la Fundación Ciudadana que mide el nivel de victimización (cantidad de hogares en que algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses) y la proporción de personas

con alto temor al delito, arrojó tasas de 36,6% y 30,5% respectivamente.

La victimización fue más alta en la región del Gran Santiago que en otras ciudades del país; por otro lado, fue mayor en hogares de niveles socioeconómicos medio y bajo. Por otra parte, la proporción de personas con temor alto al delito alcanzó la cifra más alta desde que se inició el registro hace 23 años.

A todo lo anterior se suman los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), elaborada por el organismo estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y difundidos a fines del año 2023, que arrojan una percepción de inseguridad del 90,6%, casi cuatro puntos más que en el ejercicio anterior. Esta es la percepción de inseguridad más alta desde el retorno a la democracia hace más de tres décadas. Geográficamente, los mayores índices de temor ante el delito se observan en regiones del norte del país y la Región Metropolitana.

Según la ENUSC, en la percepción de la ciudadanía chilena, los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) que más aumentaron entre los años 2022 y 2023 fueron -en orden decreciente- robo de objetos o autopartes; hurtos; robo con violencia o intimidación; robo por sorpresa; robo con fuerza en la vivienda, y robo de vehículo.

Las últimas actualizaciones sobre la situación de la seguridad pública en Chile muestran que, hacia mediados del año 2024, seis de cada 10 ciudadanos piden que la prioridad del gobierno sea reducir la delincuencia, antes que el impulso a la economía. Por su parte la encuesta "Plaza Pública" que lleva adelante la principal empresa de opinión pública del país (CADEM) dio a conocer que un 75% de los habitantes piensa que la delincuencia en el país ha aumentado en los últimos tres meses.

Un dato relevante es que casi la tercera parte de los encuestados asoció el alza del delito con el "aumento de la inmigración". Sobre esto, diversos sondeos de opinión indican que, sobre todo en los últimos seis o siete años, buena parte de la ciudadanía vincula los factores "inmigración" y "delincuencia", considerando que el crecimiento de la población migrante se traduce en su mayor participación en la comisión de delitos. En líneas generales, las estadísticas de la Defensoría Penal Pública (DPP) no corroboran esa apreciación, indicando la subrepresentación de la población extranjera en el número de condenados por delitos a nivel general. Empero, se observa un aumento en la representación de este sector, especialmente en delitos vinculados con el tráfico y comercialización de drogas ilegales.

Paraguay y Uruguay



2.7 Paraguay y Uruguay

Carlota López Bascuñana y Puerto González Diez

2.7.1.

Paraguay y Uruguay en la Encrucijada Latinoamericana

Uruguay y Paraguay no se encuentran entre los países más violentos o con mayor criminalidad de América Latina y el Caribe, situándose ambos entre los diez países con menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. No obstante, a nivel general, en los **últimos años vienen registrando un deterioro del contexto de seguridad** que motiva que la inseguridad sea uno de sus principales desafíos.

Ambos países se configuran como **ubicaciones clave para el comercio internacional de cocaína** si bien no son de los países con mayor número de incautaciones en la región; en 2023 ocuparon el sexto y el quinto puesto de menores decomisos de América del Sur. Su **proximidad con países productores** -como Bolivia en el caso de Paraguay- y que sean ampliamente utilizados por grupos criminales para su transporte hacia Europa y África -como Brasil- han favorecido que la criminalidad organizada utilice estas localizaciones como enclaves para llevar a cabo sus actividades criminales, para las redes y rutas del narcotráfico y otros productos, así como para la **corrupción o el lavado de dinero**. A pesar de ello, cada país cuenta con una serie de características específicas que explican sus dinámicas internas y su importancia regional. Mientras que **Paraguay se configura como un país de distribución de productos ilegales** y gran actividad del crimen organizado por su proximidad a Bolivia, Brasil y Argentina, la **posición geográfica de Uruguay** ha favorecido que el puerto de **Montevideo sea un punto de paso de nuevas rutas de comercio ilícito, lo que está potenciando, en parte, un incremento de su incidencia delictiva**.

Paraguay ocupa el cuarto país a nivel mundial con mayor índice de criminalidad organizada en 2023, de acuerdo con el ranking de Global Initiative

Against Transnational Organized Crime. Esta situación está motivada en gran medida por la **operación de grupos criminales en su territorio** dedicados al tráfico de drogas y otros mercados ilícitos -como el de la marihuana, los cigarrillos o las armas-, su ubicación entre Brasil -con la que comparte 1.367 km.- Bolivia y Argentina, los altos índices de corrupción o la infiltración criminal en las estructuras del estado. El país es un enclave para la distribución de la cocaína producida en Bolivia y Perú y está próximo a grandes mercados consumidores como Argentina y Brasil. Además, estos países juegan un doble papel, ya que son localizaciones donde se transportan sustancias ilícitas por sus fronteras terrestres y a través de **la hidrovía Paraguay-Paraná** para alcanzar los puertos de Montevideo y Buenos Aires situados en el Atlántico. También es uno de epicentros mundiales del **cultivo de marihuana**, con especial incidencia en los **departamentos norteros fronterizos con Brasil**, pues este país es su principal mercado, seguido de Argentina y, en menor medida, Bolivia. En 2023 la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay decomisó cerca de 6.000 toneladas de esta sustancia con valor de 180 millones de dólares.

Uruguay se ha ido configurando en los últimos años como un enclave logístico del comercio a nivel regional en América del Sur en todas sus vertientes -incluidos los mercados ilícitos-. Esta condición es fruto de su **proximidad a Argentina y a Brasil y al puerto de Montevideo**, que se erige como su principal activo, situado en la bahía del Río de la Plata, punto de salida al mar de Paraguay y clave para las rutas de droga transatlánticas. Estas características han favorecido que organizaciones criminales internacionales hayan incrementado en los últimos años sus operaciones a través del puerto y las costas uruguayas. En 2023

Rutas ilícitas en la región

se incautaron en el país 3,3 toneladas de cocaína, si bien en los últimos años en operaciones policiales en puertos europeos se han decomisado cargamentos que han transitado a través de este enclave que superan ampliamente esta cifra. Otro de los aspectos en los que Uruguay ha ganado peso es su papel en el **blanqueo de capitales** procedente del crimen organizado. Grupos criminales han aprovechado sus políticas fiscales flexibles y su limitada inversión histórica para prevenir, detectar y enjuiciar estos ilícitos para penetrar en los mercados financieros legales.

Las rutas del 'Cono Sur' son utilizadas de forma cada vez más habitual para el comercio ilícito internacional, fruto del aumento del control portuario y en las rutas tradicionales -especialmente en Colombia, Perú y Brasil-, lo que ha favorecido la búsqueda trayectos alternativos y no tan utilizados históricamente, como la hidrovía Paraná-Paraguay o el puerto de Montevideo. Emplean vías terrestres, aéreas y acuáticas -fluviales y marítimas- para transportar todo tipo de productos, como drogas, armas o cigarrillos. En los últimos años estas rutas han sido utilizadas de forma muy habitual para el transporte de cocaína con destino a África y a Europa.

Gráfico 25
Rutas ilícitas de la región

- Ingreso aéreo
- Ingreso terrestre
- Ingreso fluvial

Bolivia

Paraguay

Argentina

Brasil

Uruguay

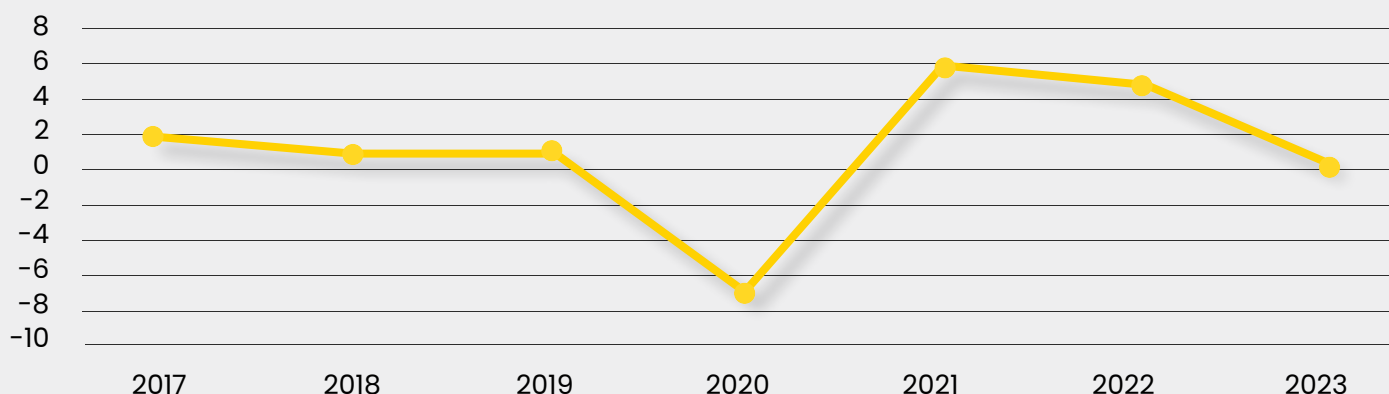
Triple frontera como enclave estratégico para el crimen organizado

Paraguay es un enclave para las rutas de distribución de cocaína desde Bolivia hacia Brasil por vía terrestre y aérea, así como hacia Argentina y Uruguay a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, siendo los departamentos del norte y del este las áreas más utilizadas. Respecto a **Uruguay**, además de las llegadas mediante la **hidrovía al puerto de Montevideo** y del transporte terrestre por el **paso fronterizo argentino-uruguayo de Concordia-Salto**, también es habitual el **transporte aéreo**, bien mediante pistas clandestinas o mediante el lanzamiento de cargamentos menores sin que las aeronaves lleguen a aterrizar. Los estados del **norte, Artigas, Salto y Paysandú**, son los puntos de llegada más habituales.

La **Triple Frontera** entre **Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay)** es una zona fronteriza que cuenta con numerosas infraestructuras logísticas que conectan con todo el mundo y **es utilizada de forma habitual por el crimen organizado** para sus actividades, como narcotráfico, lavado de dinero, falsificación, contrabando o tráfico de personas. También se ha vinculado con actores islamistas radicales, como Hezbolá, que utilizan la región para financiar sus actividades y como localizaciones de entrenamiento. El epicentro de esta dinámica criminal se sitúa en la ciudad paraguaya, que cuenta con la presencia y operación de **multitud de grupos criminales de diversas nacionalidades**, entre los que destacan los brasileños **Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV)**. La corrupción, la porosidad fronteriza y la debilidad institucional para hacer frente al contexto son factores que han favorecido que esta zona sea uno de los centros neurálgicos de la criminalidad y de los mercados ilícitos de la región suramericana.



Gráfico 26
Evolución del % de variación del PIB en Uruguay (2017-2023)



2.7.2. Uruguay

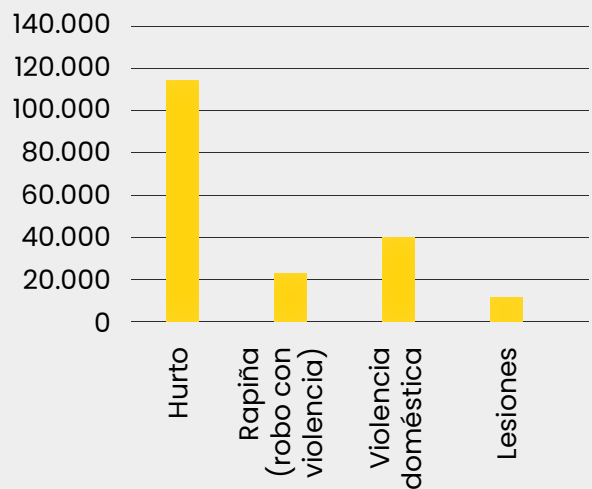
A nivel político y social, las **insuficientes tasas de crecimiento económico** para converger con el PIB de países desarrollados y el **incremento de la brecha de desigualdad y pobreza infantil** se configuran como los **principales desafíos de Uruguay en los próximos años**. La **movilización social se ha ido incrementado año a año**, siendo las cuestiones **sociales, laborales y políticas**, como la corrupción, la crisis del agua, la **inseguridad** o las medidas adoptadas por el Gobierno las que motivan la convocatoria de la mayoría de las protestas en el país.

Uruguay en el espejo de la criminalidad. Datos y tendencias recientes

Uruguay se mantiene como uno de los países más seguros de América Latina. El World Citizenship Report de 2024 situó al país en el puesto 32 de 157, ocupando el primer puesto de los países latinoamericanos. **La delincuencia común y el crimen a pequeña escala se configuran el mayor problema para la seguridad**, siendo los delitos más recurrentes los hurtos, las rapiñas (robos con violencia), la violencia doméstica, las lesiones y los homicidios. Si bien a nivel general en los últimos años las cifras de los principales ilícitos se han mantenido - con ligeros repuntes -, en los **últimos dos años se viene registrando un incremento de las tasas de los delitos de alto impacto**, como los homicidios. En 2023, la **tasa de homicidios se situó en 10,7 por cada 100.000 habitantes** (con 381 casos), por debajo de la media de la región (20), pero por encima de países como Chile (4,5) o Perú (3,2).

Montevideo concentró en 2023 el **55% de los homicidios a nivel nacional, siendo el epicentro de la criminalidad común y de los delitos de alto impacto en el país**. Los estados fronterizos con Brasil, como

Gráfico 27
Delitos con mayor incidencia en Uruguay en 2023

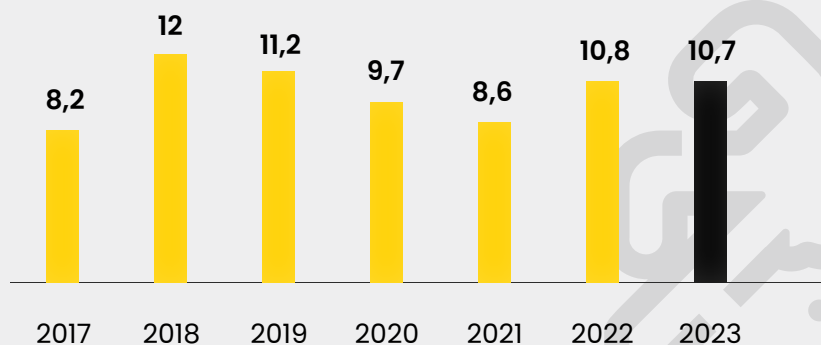


Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en Ministerio del Interior de Uruguay

Rivera o Rocha, así como Durazno -ubicado en el interior- también presentan tasas altas de criminalidad, en gran medida asociadas al **contrabando y el tráfico de drogas**.

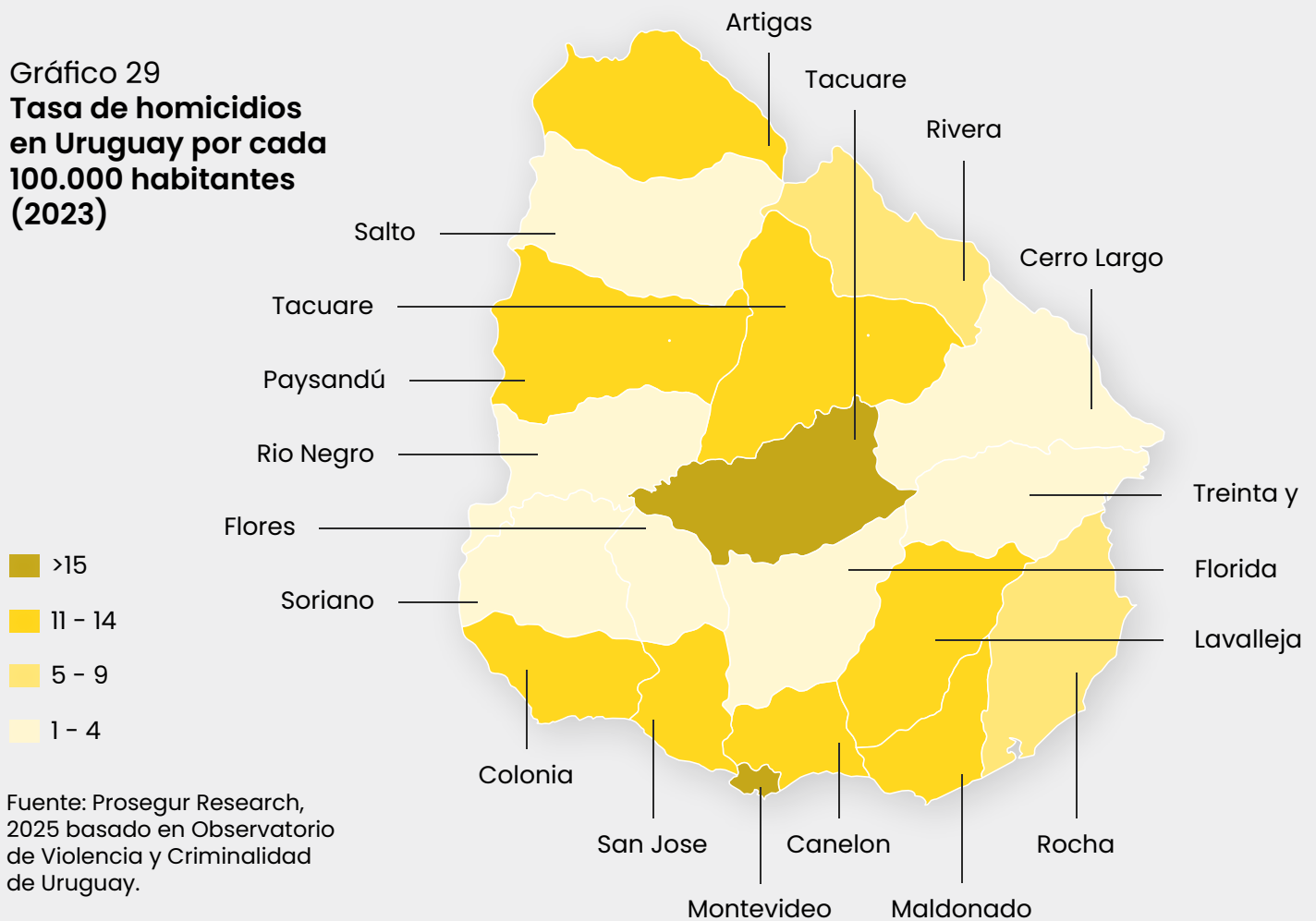
Las empresas en Uruguay son a menudo objeto de ilícitos, aunque son los delitos menores como hurtos y robos sus principales amenazas. Respecto a los **ciberdelitos mantienen una tendencia creciente contra todo tipo de sectores y bajo múltiples modalidades**, como intrusiones, ransomware, malwares o fraudes cibernéticos. En el **primer semestre de 2024**, las autoridades uruguayas detectaron **4772 incidentes de ciberseguridad, un aumento del 122% respecto al mismo periodo de 2023**. Por su parte, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información concluyó en un informe en abril de 2024 que **solo el 21% de las empresas encuestadas** -aproximadamente 600- considera haber **tomado medidas suficientes para protegerse contra estos incidentes**.

Gráfico 28
Evolución de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes de Uruguay



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en Ministerio del Interior de Uruguay

Gráfico 29
Tasa de homicidios en Uruguay por cada 100.000 habitantes (2023)



Crimen organizado y violencia: realidades ocultas y desafíos emergentes

El **incremento de la criminalidad** en los últimos años, especialmente la violenta, responde a varios factores entre los que destacan la **disputa entre grupos locales -principalmente clanes familiares- por el territorio y el control de tráfico de drogas a pequeña escala**. Estos realizan sus operaciones prioritariamente en Montevideo, Canelones y San José, donde han aumentado los ajustes de cuentas y los asesinatos. Los expertos apuntan que actualmente no cuentan con capacidades suficientes para enfrentarse directamente y a mayor escala con el Estado y no se ha podido demostrar, hasta el momento, que tengan vínculos con organizaciones transnacionales de mayor envergadura.

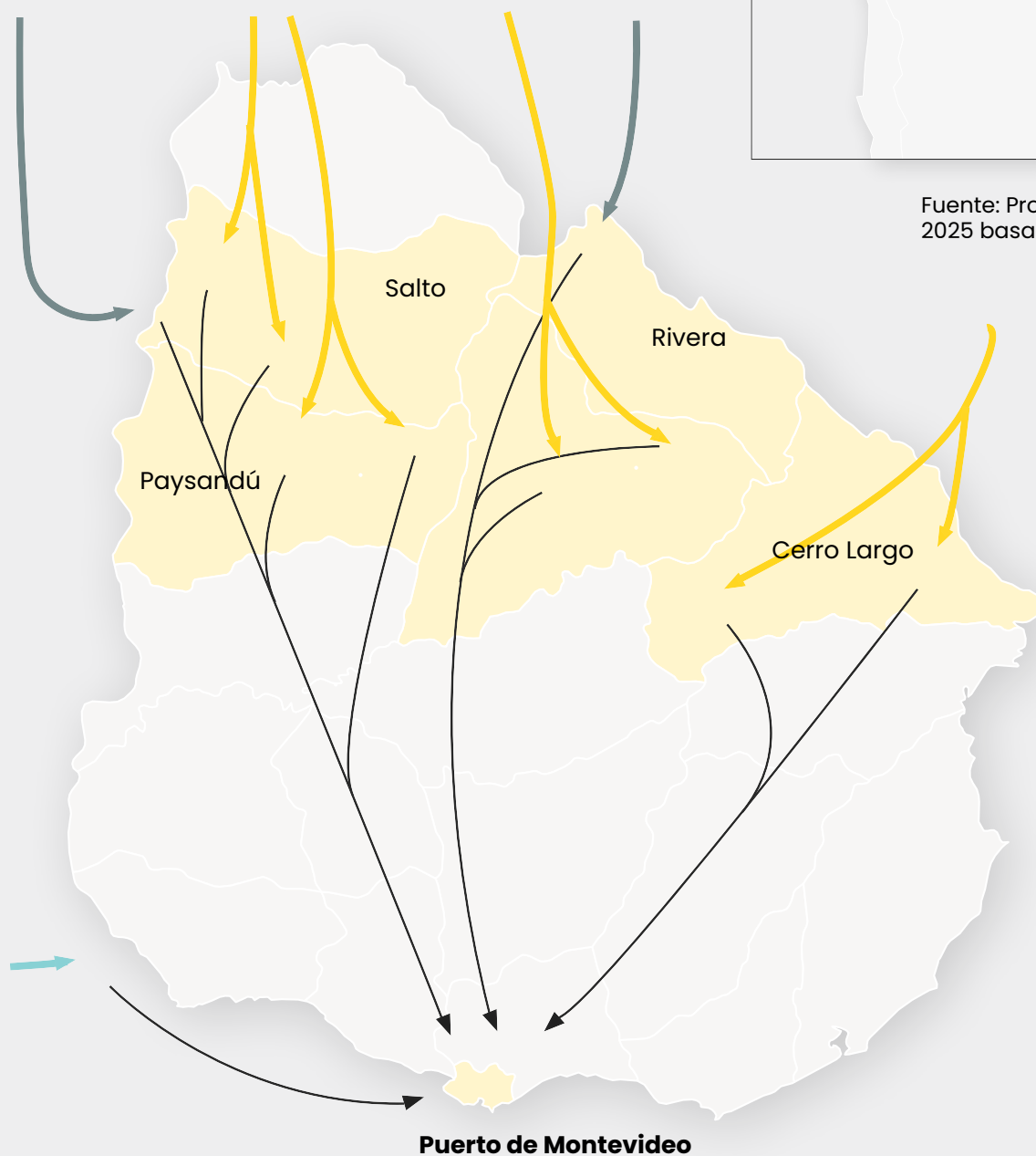


Respecto al crimen organizado, **el principal actor es el grupo brasileño - Primer Comando da Capital (PCC)-, que ha incrementado sus operaciones en los territorios fronterizos uruguayos y en el puerto**

de Montevideo, como punto de salida de la cocaína hacia Europa y África. Entre 2019 y 2023, la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay decomisó 11,4 toneladas por un valor superior a los 700 millones de dólares.

Gráfico 30
Rutas del narcotráfico en Uruguay

→ Ingreso aéreo → Ingreso terrestre → Ingreso fluvial



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en CERES.

Por otro lado, **Uruguay ha ganado importancia como enclave para el lavado de dinero** procedente del crimen organizado. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo publicó en septiembre de 2023 un informe sobre el aumento anual constante en las investigaciones sobre el lavado de dinero del “narcotráfico y delitos conexos”, pasando de 1597 casos en 2018 a 3021 en 2022. La utilización de los diferentes sectores económicos de Uruguay **para blanquear las ganancias económicas del narcotráfico** y el incremento de la **utilización del puerto de Uruguay** para trasladar droga se configuran como potenciadores de la probabilidad de que el crimen organizado incremente el número de actividades en el país, favoreciendo la violencia y la criminalidad ante potenciales enfrentamientos entre grupos por el control del territorio y de las rutas.

Uruguay también es un **enclave muy relevante para el contrabando de armas**, como país intermediario entre Argentina y Brasil y favorecido por la alta demanda de los grupos criminales como el PCC o el CV. En 2023 Interpol llevó a cabo una macrooperación en América Latina en la que se incautaron 100.000 piezas de munición en Uruguay, la mayor en la historia del país.

En el **sector empresarial de Uruguay** existe una **percepción creciente de inseguridad derivado del aumento de los delitos**, lo que ha llevado a **empresarios y directivos a adoptar medidas preventivas ante casos de robo, extorsión, o incluso secuestro** -aunque su prevalencia es baja-. Los **robos y hurtos en comercios y oficinas** tienen una incidencia cada vez mayor, en 2024 se superó en un 112% los casos ocurridos en viviendas en 2023 y constituyendo una de las principales amenazas para el sector. Por su parte, aunque las **prácticas extorsivas no están extendidas a nivel nacional ni son generalizadas**, sí se producen casos a nivel local en aquellas áreas donde la presencia y el control de las bandas es alta. A modo de ejemplo, en los barrios con mayor incidencia delictiva de Montevideo, las actividades de los clanes familiares incluyen el pago de cantidades económicas por parte de residentes y comerciantes. Finalmente, el hecho de que Uruguay se posicione como enclave para el blanqueo de dinero de organizaciones criminales favorece que en el sector empresarial se infiltren y proliferen compañías y comercios vinculados con estas prácticas.

Gráfico 31 Presencia y operación de los principales los grupos criminales en Uruguay

Clanes familiares locales.

Tienen presencia mayoritariamente en Montevideo y en menor medida en los departamentos próximos, como Canelones o San José. Se disputan el control territorial de sus zonas de influencia para llevar a cabo actividades de narcomenudeo y de forma ocasional extorsión.

Primer Comando da Capital (PCC).

Es la organización criminal más grande de Brasil y tiene presencia en numerosos de países, incluido Uruguay. Su principal actividad es el narcotráfico a gran escala desde Brasil y Paraguay hasta África y Europa. Actualmente, se ha reportado su presencia en los departamentos fronterizos Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, así como operaciones a través del puerto de Montevideo.

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en información publicada en medios de comunicación.

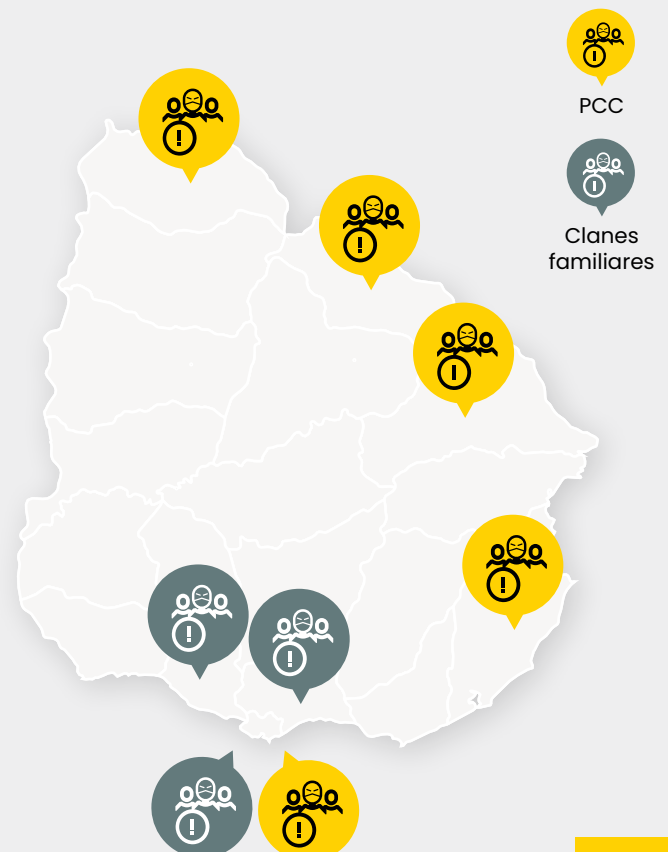
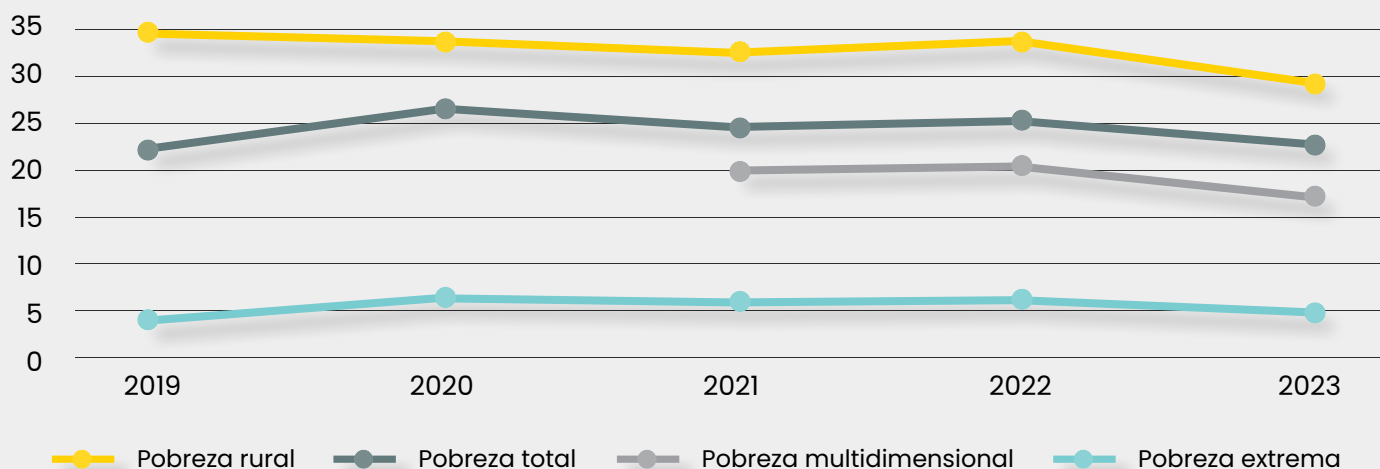


Gráfico 32
Evolución de las tasas de pobreza en Paraguay

Fuente: Prosecur Research, 2025
basado en Instituto Nacional de
Estadística de Paraguay (INE).



*Los datos sobre pobreza multidimensional suelen ser menos frecuentes y específicos para todos los años.

2.7.3. Paraguay

Paraguay mantiene una **relativa estabilidad política** a pesar del creciente malestar ciudadano por los **altos niveles de corrupción** y la cada vez mayor actividad del **crimen organizado** en el país. Las **elevadas tasas de pobreza y de desigualdad**, especialmente en las áreas rurales, contrastan con el **crecimiento económico sostenido** en los últimos años, impulsado por la recuperación del sector agrícola y ganadero y el aumento de la producción hidroeléctrica.

La paradoja paraguaya. Los números de la criminalidad

La **situación de seguridad en Paraguay es paradójica**, ya que los **delitos vinculados con la delincuencia común y las tasas de homicidios** presentan unos niveles relativamente **bajos**, aunque en aumento, para la región latinoamericana, mientras que es el **cuarto país a nivel mundial con mayor índice de crimen organizado**. En este sentido, el Índice de Paz Global de 2024 elaborado por el Instituto Economía y Paz sitúa al país en el puesto 77 de 163, con un nivel medio, y

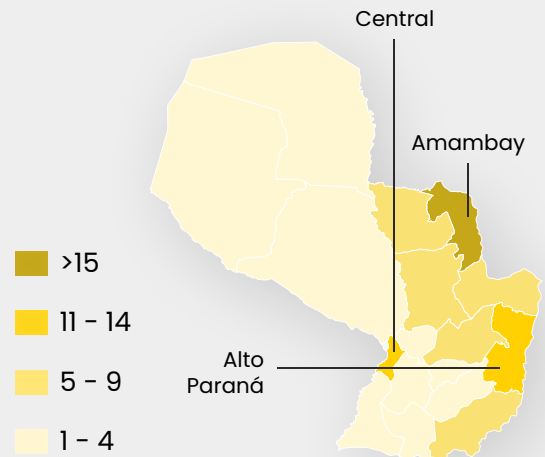
quinto a nivel regional, con mejores posiciones que países como Perú, Brasil o Colombia. En la misma línea lo califica el índice World Citizenship Report 2024, en el que el país alcanza el puesto 77 de 157. La Encuesta de Victimización de 2023 publicada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay apunta como explicación a estas cifras que las **organizaciones criminales tratan de actuar de forma discreta y en parte ajenas a la población civil** a través de actividades como el tráfico ilegal de drogas, de armas o el lavado de dinero.

Los **delitos que mayor número de denuncias** registran son la **violencia familiar, los hurtos y los robos**. Estos tienen una incidencia más alta en los departamentos Central, donde se encuentra la capital, Asunción, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Cordillera. Estas cifras contrastan con las elevadas tasas que registran los **delitos de alto impacto en departamentos fronterizos**, especialmente del este, con amplia presencia y actividad del crimen organizado. Mientras que los **homicidios en Paraguay presentaron una incidencia baja en comparación con otros países de la región en 2023**, con una tasa

de 5,3 por 100.000 habitantes, su incidencia en 2022 fue superior en departamentos fronterizos como **Amambay (43,5)**, **Concepción (20,5)**, **Alto Paraguay (21,5)** o **Canindeyú (24,6)**, donde la violencia y actividad de grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas como el tráfico de armas es muy alta. **Ciudad del Este, en la Triple Frontera, y Pedro Juan Caballero son las ciudades con mayores índices de inseguridad**, donde los delitos cometidos están vinculados principalmente al tráfico de drogas o contrabando.

Por su parte, las empresas en Paraguay enfrentan crecientes desafíos, especialmente en términos de ciberseguridad. Con el avance de la digitalización, el país ha visto un aumento en los ciberataques y delitos informáticos. Esto ha llevado a un incremento en las inversiones en tecnología de seguridad por parte del sector privado, pero la falta de infraestructura adecuada y de un marco regulatorio sólido sigue siendo una preocupación central. Además, las empresas deben enfrentar riesgos asociados a la extorsión por parte de grupos criminales.

Gráfico 33
Porcentaje de homicidios dolosos por departamento en Paraguay 2019-2024*



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en Ministerio Público de Paraguay.

Gráfico 34
Evolución de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes (2018-2023)

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en Ministerio Público de Paraguay.

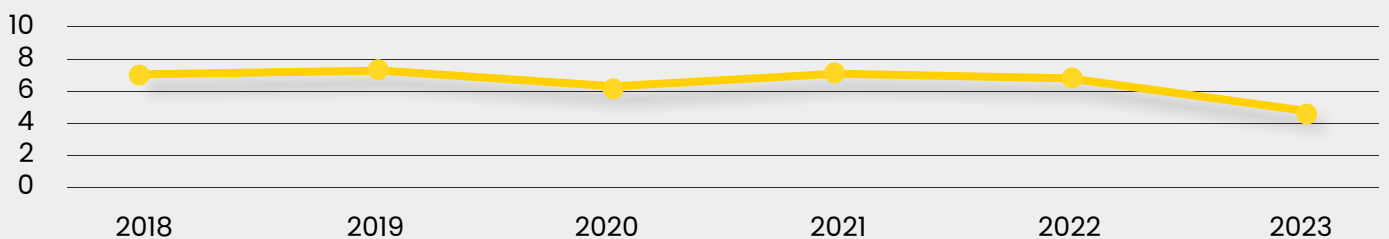
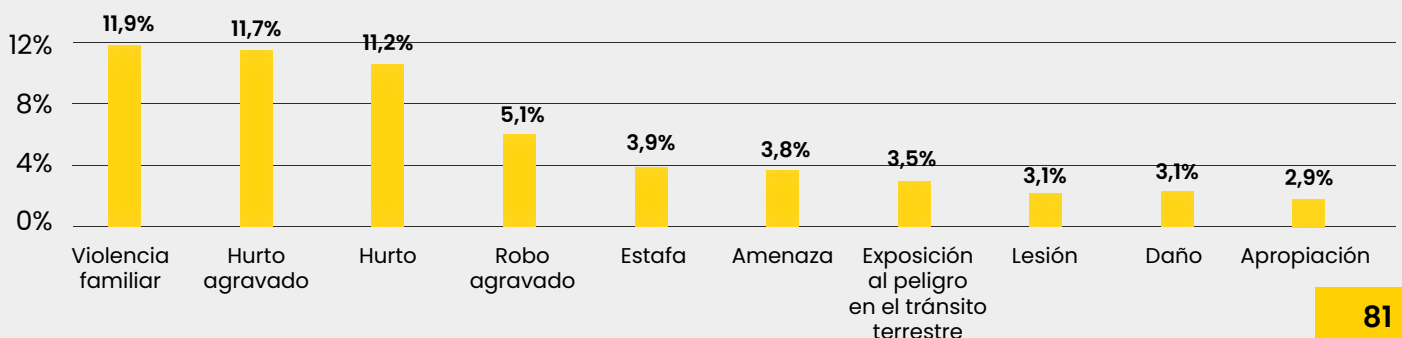


Gráfico 35
Porcentaje de delitos más frecuentes en paraguay en 2023

Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en Ministerio Público de Paraguay.



Paraguay y crimen organizado: entre fronteras y nuevos desafíos

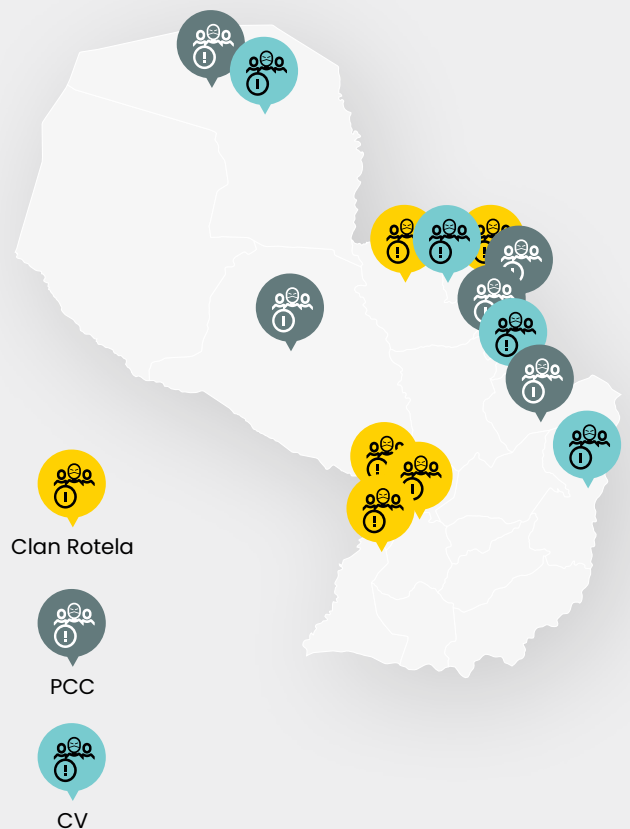
En 2023, el Índice de Crimen Organizado situó al país como el cuarto con mayor incidencia a nivel mundial, por detrás de Myanmar, México y Colombia. **El crimen organizado en Paraguay está estrechamente vinculado con el narcotráfico** y es clave para la distribución de drogas en América del Sur. Actúa como un importante corredor para el tránsito de cocaína desde países productores como Bolivia hacia Brasil y los puertos de Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), con dirección a otros continentes. Además, es **uno de los principales productores de marihuana de la región**, con grandes plantaciones en áreas rurales y de difícil acceso, particularmente en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Caaguazú. Otras actividades ilícitas en Paraguay incluyen el sicariato, el tráfico de armas, cigarrillos, productos falsificados y contrabando, siendo Ciudad del Este en la Triple Frontera el principal punto neurálgico.

El crimen organizado se distribuye mayoritariamente en departamentos del este como Alto Paraná, fronterizo con Brasil, y especialmente Amambay, que limita con Bolivia y Brasil, donde actúan grupos criminales transnacionales como el PCC y el CV. Estos operan con amplia impunidad y se enfrentan por el control del territorio y las rutas de tráfico ante la corrupción, los limitados recursos de los cuerpos de seguridad y la falta de control estatal. Además de organizaciones internacionales, operan grupos paraguayos como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que, aunque relativamente pequeño, ha sido responsable de secuestros y atentados violentos en el norte del país o el clan Rotela, inicialmente dedicado al microtráfico, pero que se ha ido expandiendo hasta controlar actualmente algunas rutas del narcotráfico y prisiones. La capacidad del Estado para enfrentar a estos actores ha sido limitada, incrementando la sensación de inseguridad en la población.

El auge de la violencia ha impactado al sector empresarial, obligando a las empresas a reforzar la seguridad o incluso a parar sus operaciones debido al aumento de robos, extorsiones y secuestros, tanto en zonas rurales como en grandes urbes -siendo **Asunción la ciudad más afectada por la criminalidad**, concentrando cerca de un tercio de todos los delitos del país. Su ocurrencia está afectando tanto a la economía local como a la percepción internacional de Paraguay derivado de la “economía paralela” de los mercados

ilícitos. Según informes de la Policía Nacional, en el país se producen cuatro asaltos cada hora y un robo de vehículo cada cuatro horas. En 2024 han aumentado la exigencia a autoridades y figuras políticas de medidas concretas para hacer frente a la inseguridad por parte del sector empresarial como la Cámara de Empresarios o el Club de Ejecutivos.

Gráfico 36
Presencia y operación de grupos criminales por departamento en Paraguay



Fuente: Prosegur Research, 2025 basado en información publicada en medios de comunicación.

Principales grupos criminales en Paraguay



Primer comando capital (PCC)

Organización brasileña con más presencia en Paraguay. Tiene su base de operaciones en Pedro Juan Caballero (San Pedro), aunque cuenta con presencia en los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay, Presidente Hayes y Central. Realiza todo tipo de actividades ilícitas como tráfico de cocaína y marihuana, de armas o contrabando de cigarrillos.



Comando Vermelho (CV)

Organización brasileña con amplia presencia en Paraguay. Junto con el PCC controla el comercio de cocaína y de marihuana del país. Tiene presencia a lo largo de la frontera brasileña, aunque su centro de operaciones se encuentra en Capital Bado.



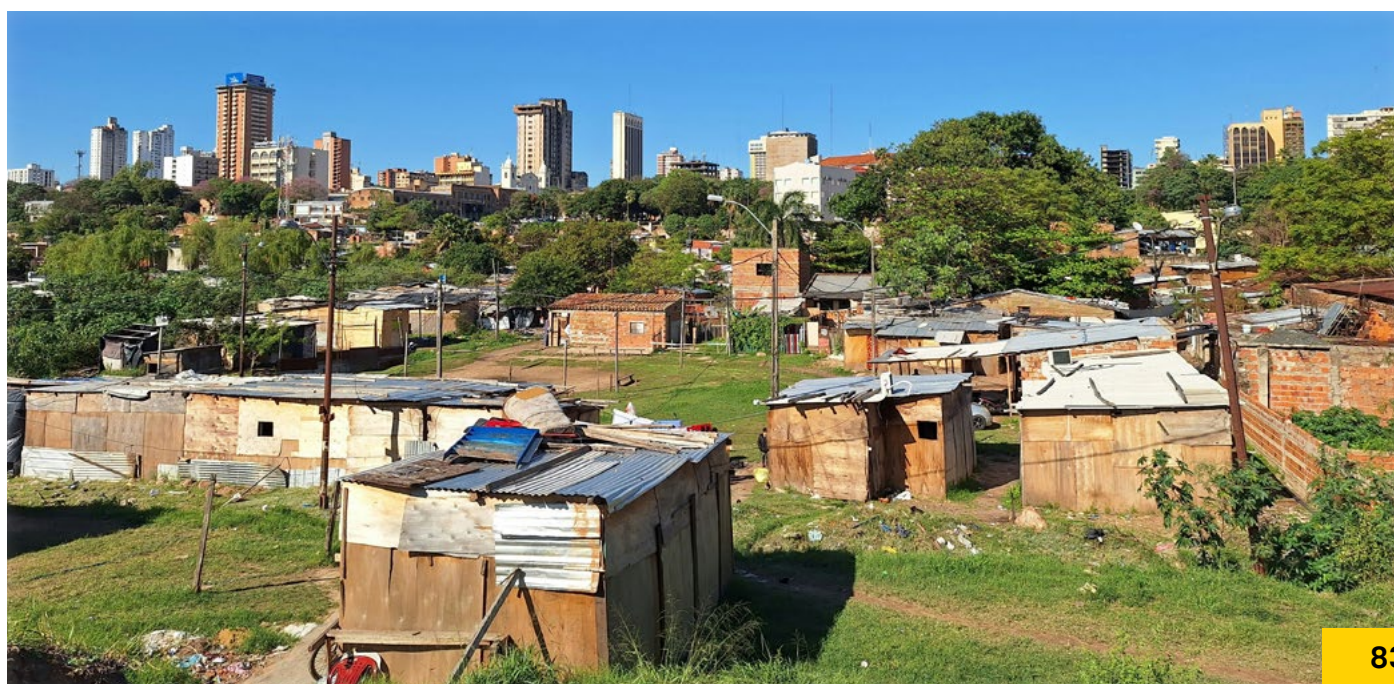
Ejército del pueblo paraguayo (EPP)

Es un grupo guerrillero que se encuentra asentado en la zona este del país. Según medios y fuentes gubernamentales, brindan protección a cultivos y pistas de aterrizaje, llevan a cabo secuestros y cobran “impuestos revolucionarios” a empresarios y grupos criminales.



Clan Rotela

Organización de carácter familiar paraguaya. Inicialmente se dedicaba al microtráfico de drogas en Asunción y Concepción, si bien ha ido adquiriendo poder y control territorial en los últimos años hasta ser una de las principales organizaciones a nivel nacional. Tiene presencia permanente en Cordillera, Central y Concepción e intermitente en Pedro Juan Caballero. Controla parte del tráfico de drogas y de las prisiones del país y actualmente se encuentra enfrentado con el PCC.





Conclusiones

3. Conclusiones

Para abordar la violencia en América Latina, es necesario un enfoque multidimensional que incorpore tanto las causas estructurales como la adecuación de las respuestas institucionales que permiten controlar la expansión de economías criminales. También **es esencial fortalecer la cooperación internacional, dado que muchas de las actividades criminales que afectan a la región tienen un carácter transnacional.**

La violencia y criminalidad en América Latina son fenómenos complejos y multifacéticos que han evolucionado a lo largo de las décadas y su persistencia en la región tiene implicaciones profundas tanto

a nivel local como global. Este desafío involucra una combinación de factores económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos que han creado un entorno propicio para el desarrollo de grupos criminales extremadamente poderosos y resilientes. A pesar de los numerosos diagnósticos, planes y estrategias elaborados por gobiernos nacionales y organismos internacionales, el problema sigue siendo difícil de abordar, principalmente debido a la falta de un enfoque integral y una ejecución eficaz de las políticas de seguridad.

Destacamos, en esta primera edición del “Anuario de Seguridad en América Latina” diez focos de atención:



3.1.

Un problema complejo y perverso

La violencia y criminalidad en América Latina son problemas complejos o perversos, es decir, que no tienen soluciones claras o lineales, y que las intervenciones pueden generar consecuencias imprevistas, incluso contrarias a los fines perseguidos.

Una de las características de los problemas complejos es que no se pueden resolver con enfoques tradicionales ni con la simple aplicación de más recursos. Estos problemas están interrelacionados con otros factores que se retroalimentan entre sí, creando un ciclo vicioso de violencia, pobreza, desigualdad y debilidad institucional. Adicionalmente, fenómenos como la criminalidad tienen una naturaleza sistémica: los riesgos se interrelacionan y retroalimentan, como, por ejemplo, se percibió durante la pandemia, que sirvió de potenciador de determinadas tipologías delictivas.

Además, **el crimen organizado en la región ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia**, reinventándose constantemente para aprovechar nuevas oportunidades económicas y sociales y responder a las medidas represivas de los gobiernos. Este carácter adaptativo y evolutivo convierte el problema en un fenómeno "perverso", donde cada solución parcial genera nuevas manifestaciones del problema, como la diversificación de actividades ilícitas, la internacionalización del narcotráfico o la expansión y desplazamiento a otras geografías.

3.2.

Diagnósticos sin ejecución ni financiación: “un brindis al sol”

Existe abundantes diagnósticos y estudios sobre la seguridad en América Latina, tanto a nivel local como regional, elaborados por gobiernos, organismos internacionales y expertos en seguridad. Sin embargo, el gran problema no reside en la falta de conocimiento sobre el fenómeno, sino en la **incapacidad de hacer accionables estos diagnósticos de manera efectiva**. A menudo, estos planes de seguridad no se acompañan de un plan de ejecución claro ni de la financiación necesaria para su implementación, lo

que los convierte en “brindis al sol”. De forma general, los gobiernos latinoamericanos enfrentan una falta de recursos financieros y humanos, así como una débil capacidad institucional para hacer frente a la magnitud del problema. En algunos casos, incluso, la implementación de políticas de seguridad está condicionada por intereses políticos a corto plazo, lo que lleva a la adopción de medidas de urgencia en lugar de soluciones sostenibles a largo plazo que ataquen frontalmente las causas y no los efectos. La falta de continuidad en las políticas dificulta aún más el avance.

3.3.

Medidas integrales: económicas, sociales y de seguridad

La criminalidad y la violencia en América Latina no son una consecuencia de la falta de presencia policial; son el resultado de factores sociales y económicos profundamente enraizados, como la exaltación de la violencia, la desigualdad extrema, la exclusión social y la falta de oportunidades laborales y educativas. Para abordar de manera efectiva el problema de la inseguridad, **es esencial adoptar un enfoque integral que no se limite a las respuestas represivas o defensivas, sino que también promueva el desarrollo económico y social de las comunidades más afectadas.**

El primer pilar de una estrategia integral debe ser la promoción de oportunidades económicas legítimas. El desarrollo económico no puede ocurrir sin una infraestructura adecuada para atraer inversiones y generar empleo: carreteras, medios de transporte, energía, agua y saneamientos, internet y conectividad. En algunos países las economías locales están muy poco diversificadas, dependen en gran medida de un único sector o industria, lo que las hace extremadamente vulnerables a la crisis económica o a la explotación por parte de redes criminales. La diversificación económica es clave para crear economías locales más resilientes, que puedan ofrecer una amplia gama de empleos en diferentes sectores.



Además de las medidas económicas, cualquier enfoque integral para reducir la criminalidad debe incluir un componente social fuerte (educación y sanidad como claves) que aborde las desigualdades y proporcione a las comunidades las herramientas necesarias para prosperar. La exclusión social, la falta de acceso a servicios básicos y los altos índices de deserción escolar contribuyen directamente al crecimiento del crimen organizado, ya que crean un entorno en el que el Estado está ausente y el crimen organizado llena el vacío proporcionando empleo y protección.

3.4. Políticas diferenciadas según la tipología de grupos delictivos

Uno de los principales errores que se han cometido en las estrategias de seguridad en América Latina, y que aún persiste en muchos contextos, es la **aplicación de políticas generales para combatir todo tipo de criminalidad y delincuencia, sin tener en cuenta las diferencias estructurales, operativas y geográficas** que existen entre los diversos tipos de grupos criminales. La delincuencia organizada no es homogénea, y su composición, modus operandi, objetivos y tácticas varían significativamente según el tipo de organización, el contexto en el que opera y las conexiones internacionales que pueda tener.

Por ello, es crucial que las políticas de seguridad sean diferenciadas y adaptadas a la naturaleza de cada tipo de grupo. No es lo mismo combatir a las maras en Centroamérica, que enfrentarse a los cárteles de narcotráfico en México, a las milicias urbanas en Brasil o lidiar con las insurgencias y paramilitares en Colombia y Venezuela. Cada uno de estos grupos tiene dinámicas particulares que deben abordarse con estrategias específicas.

3.5. La necesidad de desarrollar una cultura de seguridad nacional y fortalecer las instituciones de inteligencia y policía en América Latina

Una de las principales problemáticas en algunos países de América Latina es la fragilidad institucional y la falta de una cultura de seguridad que permita enfrentar de manera eficiente y sostenida la amenaza del crimen organizado. Esta debilidad estructural no solo es evidente en los altos niveles de criminalidad, sino también en la **difícultad de los estados para anticipar, prevenir y desarticular redes criminales, muchas de las cuales operan tanto en el plano local como en el ámbito transnacional**. Las estructuras a nivel nacional en ocasiones no disponen de las capacidades para atender a los fenómenos regionales y locales, que tienen su propia historia, cultura y geografía. Igualmente sucede a nivel internacional, donde se precisa elevada interacción regional e internacional.

La inteligencia es fundamental no solo para la recolección de información, sino también para el procesamiento, análisis y conversión de esa información en insights operativos que puedan guiar las decisiones estratégicas y tácticas en el combate contra las redes criminales.

Esto implica una transformación en la forma en que los gobiernos recogen, analizan y utilizan los datos, así como la integración de herramientas tecnológicas avanzadas y metodologías cuantitativas y cualitativas, que permitan adelantarse a las dinámicas criminales en lugar de simplemente reaccionar a los eventos. Es la vía para **avanzar desde modelos reactivos a modelos más preventivos y anticipatorios**.

Dado que el crimen organizado en América Latina opera cada vez más a nivel transnacional, **la cooperación entre los países de la región y con actores internacionales es fundamental**. Los grupos criminales, como los cárteles, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y las redes de contrabando, no respetan fronteras, lo que significa que los esfuerzos individuales de cada país serán insuficientes si no se complementan con cooperación regional e internacional. Pero para poder cooperar, para poder compartir información de valor, es preciso disponer de estructuras internas para ello.

3.6.

Policía, justicia y prisiones: una cadena debilitada

La cadena de seguridad pública en América Latina depende de la **interacción efectiva entre tres pilares fundamentales: el sistema policial, el sistema judicial y el sistema penitenciario**. Sin embargo, en una parte importante de la región, los tres pilares, o al menos uno de ellos, están gravemente debilitados, lo que crea una situación insostenible donde el crimen organizado opera con relativa impunidad:

- ▲ **Policía:** en muchos países, las fuerzas policiales están mal equipadas y mal entrenadas. Además, en algunas zonas, la policía es incapaz de controlar el territorio debido a la presencia dominante de los grupos criminales.
- ▲ **Justicia:** los sistemas judiciales de América Latina son a menudo lentos e ineficaces, lo que permite que los delincuentes eviten ser procesados o reciban penas mínimas. La impunidad es un problema endémico, y muchos jueces y fiscales se ven presionados o intimidados por los grupos criminales, lo que impide una verdadera aplicación de la ley.
- ▲ **Prisiones:** lejos de ser centros de rehabilitación, las cárceles en América Latina han sido cooptadas por los grupos criminales, que operan desde su interior y continúan dirigiendo redes de narcotráfico, extorsión y secuestro. El hacinamiento y las malas condiciones de vida en las prisiones solo agravan el problema, creando un ambiente fértil para la radicalización y el reclutamiento de nuevos miembros para las organizaciones criminales.

3.7.

Casos de éxito: experiencias locales y regionales

La historia de la lucha contra el crimen y la violencia en América Latina ha estado marcada por intentos recurrentes de aplicar soluciones generales o “recetas universales” para un problema que es, por su propia naturaleza, profundamente contextual y diverso. A lo largo de las últimas décadas, una lección que ha emergido con claridad es que **las soluciones más eficaces y sostenibles para combatir el crimen organizado y la violencia en la región no siempre provienen de grandes planes nacionales o enfoques globales, sino de iniciativas locales y regionales**, adaptadas a las características específicas de cada comunidad.

Al examinar los casos de éxito en la reducción de la violencia en ciudades y regiones de América Latina, surge un patrón claro: aquellas estrategias que han logrado resultados sostenibles han sido aquellas que han tenido **en cuenta las dinámicas locales, han involucrado a las comunidades, han utilizado un enfoque multidimensional y han priorizado tanto la prevención como la represión**. Estas experiencias ofrecen valiosas lecciones que pueden ser extrapoladas a otras ciudades y regiones de la región, siempre y cuando se adapten a las particularidades locales.



3.8.

Combatir el crimen predatorio: el rostro cotidiano del ecosistema criminal

Uno de los errores estratégicos más comunes en la lucha contra la criminalidad ha sido enfocarse casi exclusivamente en dismantelar los grandes cárteles de drogas, capturar a sus líderes o combatir el tráfico ilícito transnacional, dejando de lado las formas de crimen predatorio que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Son delitos predatorios son aquellos cuyo objetivo es la apropiación indebida de bienes de las víctimas, usando la coerción o la violencia. El crimen organizado genera a su alrededor todo un ecosistema criminal que gira alrededor de hurtos, robos, extorsiones, secuestros, menudeo de drogas, etc.

Aunque la lucha contra los cárteles y las redes criminales transnacionales es crucial, **el crimen organizado también genera un ecosistema de delitos más pequeños pero igualmente destructivos, como los robos, hurtos, secuestros y extorsiones, que muchas veces son subestimados por las autoridades.**

El crimen predatorio es una manifestación cotidiana del poder de los grupos criminales, que extienden su influencia más allá del narcotráfico para infiltrarse en las economías locales y en la vida diaria de los ciudadanos. Estos delitos incluyen:

▲ **Extorsión:** conocida como “cobro de piso” en México o el sistema de “gota a gota” en Colombia, la extorsión es una práctica generalizada en la que comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos son obligados a pagar a los grupos criminales para poder operar o simplemente para garantizar su seguridad personal. **Esta práctica no solo destruye la economía local, sino que también genera un clima de terror en las comunidades.**

▲ **Secuestros:** aunque el secuestro con fines de extorsión ha disminuido en algunos países, sigue siendo un problema grave en varios lugares de la región. Este tipo de delito no solo genera grandes ingresos para los grupos criminales, sino que también **contribuye a una sensación de inseguridad extrema en las zonas más afectadas**, especialmente en áreas rurales o periféricas donde el Estado tiene poca presencia.

▲ **Robos y hurtos:** a menudo perpetrados por pequeñas células criminales asociadas a las organizaciones más grandes, los robos y hurtos son una manifestación del control territorial que ejercen los grupos delictivos. **El incremento de estos delitos suele estar relacionado con la presencia de organizaciones criminales más estructuradas**, que financian sus operaciones a través de estas actividades menores, pero generalizadas.

▲ **Microtráfico:** el microtráfico de drogas es otra consecuencia directa de las redes de narcotráfico a gran escala, que establecen mercados locales de consumo en zonas urbanas y rurales. Este fenómeno, aunque menos visible que los grandes cargamentos transnacionales, **tiene un impacto devastador en las comunidades**, especialmente entre los jóvenes, que son tanto consumidores como empleados de estas redes.

Combatir este crimen predatorio es tan importante como dismantelar las grandes redes criminales, ya que representa el rostro cotidiano del crimen organizado y es la fuente primaria de victimización de la mayoría de los ciudadanos. Las políticas de seguridad no pueden limitarse a atacar solo los grandes cárteles o las redes transnacionales, sino que deben abarcar también estos delitos cotidianos que afectan directamente la calidad de vida de millones de personas.



3.9. Impacto en Europa: aprendizajes de América Latina

La experiencia de América Latina en la lucha contra estos fenómenos ha proporcionado una serie de lecciones que ahora se vuelven sumamente valiosas para Europa, donde el crimen organizado está en pleno crecimiento.

A lo largo de los últimos años, **Europa ha visto un aumento significativo de la influencia de organizaciones criminales transnacionales, muchas de ellas con vínculos directos o indirectos con los cárteles latinoamericanos y otras estructuras delictivas.** Las redes de narcotráfico, en particular, han extendido su influencia desde América Latina hasta puertos clave en Europa, como Rotterdam, Hamburgo y Barcelona, y han comenzado a importar no solo sustancias ilícitas, sino también métodos y tácticas habituales en América Latina, como el sicariato, las extorsiones, y formas innovadoras de robo, como el novo cangaço que se popularizó en Brasil.

El costo humano y social de estos fenómenos en América Latina ha sido inmenso y Europa debe prestar atención a estas dinámicas si desea evitar que el crimen organizado se convierta en una fuerza aún más destabilizadora en el continente.



3.10. Seguridad privada en América Latina

La seguridad privada ha crecido en América Latina en las últimas décadas, en gran medida como respuesta a las dificultades del Estado para garantizar la seguridad pública de manera efectiva. La región ha experimentado niveles altos de criminalidad y violencia y muchas personas y empresas han recurrido a empresas de seguridad privada para llenar el vacío que las fuerzas públicas no han podido cubrir.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el número de agentes de seguridad privada en América Latina supera con creces al de las fuerzas policiales en muchos países. Se estima que hay aproximadamente 4 millones de guardias de seguridad privada en la región, en comparación con 2.4 millones de policías.

A pesar de los beneficios que la seguridad privada ofrece en términos de protección personalizada y respuesta rápida, el crecimiento descontrolado de este sector también plantea una serie de riesgos y desafíos importantes que deben ser abordados. En muchos países de América Latina, la regulación del sector de la seguridad privada es débil o inexistente. Esto ha permitido que empresas operen sin cumplir con estándares mínimos de entrenamiento, supervisión o acreditación. Según datos de la ONU, hasta el 50% de las empresas de seguridad privada en algunos países de América Latina operan sin licencia, lo que las convierte en actores informales dentro del ámbito de la seguridad.

El futuro de la seguridad privada en América Latina, y en otras regiones del mundo, dependerá en gran medida de la capacidad de los Estados para regular y profesionalizar este sector.

■ AUTORES

Jose María Blanco Navarro

Director de Prosegur Research y de los Servicios de Inteligencia de Prosegur Security. Previamente fue Director de Ciber inteligencia en Prosegur. 18 años en Guardia Civil, de los cuales 10 fueron como Director del Centro de Análisis y Prospectiva. Profesor en diversos grados y posgrados en temas de seguridad, terrorismo, crimen organizado y análisis de inteligencia. Editor y/o autor de varios libros sobre seguridad nacional, radicalización y crimen organizado. Investigador en proyectos europeos H2020.

Puerto González Díez

Coordinadora de Security Intelligence en Prosegur Research. Graduada en Periodismo, con 5 años de experiencia en el análisis de redes sociales. Master en análisis de inteligencia y diplomacia. Máster en Estudios Contemporáneos en América Latina. Actualmente, se encuentra desarrollando su doctorado en ciencia política en la UCM, concretamente en la rama de geografía política centrado en América Latina. Profesora asociada en distintas universidades en las materias de inteligencia, geopolítica y crimen organizado.

Carlota López Bascuñana

Analista de inteligencia en Prosegur Research. Graduada en Psicología y especialización en Análisis de Inteligencia aplicada a la seguridad.

Juan Guillermo Mendoza Bazán

Consultor especializado en Inteligencia, Riesgo Político y Prospectiva, para la iniciativa privada y organismos internacionales. Fue funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, actualmente CNI de México) donde se desempeñó como responsable del área de asuntos con América del Norte.

Jerónimos Ríos

Doctor en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid) y Doctor en Humanidades (Universidad Rey Juan Carlos). Actualmente es profesor ayudante doctor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación es la violencia y la seguridad en espacio iberoamericano, especialmente en Colombia y Perú. Ha publicado más de 100 artículos académicos y 50 capítulos de libros, además de ser autor o coordinador de una quincena de libros. Fue asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos durante el proceso de diálogo e implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2012-2018).

Carolina Sampó

Profesora y coordinadora académica del Grado en Criminología y Seguridad de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Fue investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Argentina, así como en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (LACS) de la Universidad de Maryland y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en Argentina. Trabaja como consultora internacional en seguridad y crimen organizado y dicta cursos de grado y posgrado sobre temas relacionados con la seguridad transnacional, la violencia y el crimen, con especial enfoque en el narcotráfico en el Sur Global.

Nicolas Zevallos Trigos

Criminólogo, especializado en crimen organizado, delito urbano y estudios policiales. Ha integrado, asesorado y dirigido medio centenar de proyectos de investigación y gestión para el control del delito en instituciones públicas y agencias internacionales. Ha sido funcionario de alta dirección en entidades estatales relacionadas con el control del delito. Es docente de Metodología de la Investigación y Criminología, así como autor de medio centenar de publicaciones académicas en sus áreas de especialización. Es el Fundador y Director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología.

Jaris Mujica

Es criminólogo, Master en Ciencia Política y Licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Estudio el master y doctorado en ejecución penal por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ha sido comisionado de la unidad anticorrupción de la Defensoría del Pueblo, Jefe de la Oficina de Asuntos Internos del Sistema penitenciario del Perú, Jefe de la Unidad de información de la Procuraduría, e investigador de diferentes oficinas del sistema de Naciones Unidas y de la cooperación intencional. Es investigador especializado métodos de investigación aplicados. Ha publicado mas de 30 artículos científicos, 14 libros y ha recibido más de 20 premios a la investigación.

Christian Campos.

Politólogo (PUCP), Máster en Métodos y Técnicas de Investigación Social (CLACSO), y especializado en Criminología Aplicada y Gestión Integral de Políticas de Seguridad Ciudadana. Ha conformado equipos de asesoría de alto nivel y de análisis de gestión conocimiento en entidades como el Ministerio del Interior, el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú y Anti-Trafficking Perú. Ha integrado más de 40 proyectos de investigación aplicada, asistencia técnica y consultoría sobre el fenómeno criminal y el control delictivo, para entidades públicas y privadas. Autor de una decena de publicaciones sobre crimen organizado y economías ilegales. Es Investigador asociado y docente en el Instituto de Criminología.

■ DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Inés Carrero Díaz

Diseñadora gráfica en Prosegur Research y Global Marketing Prosegur. Graduada en Bellas Artes con Título Experto en Diseño Digital, especializada en la creación de soluciones visuales para comunicación estratégica y branding.

**Garantizamos la seguridad
de las personas, las empresas
y la sociedad en su conjunto.**

Para más información contacte con
research@prosegur.com
www.prosegurresearch.com

